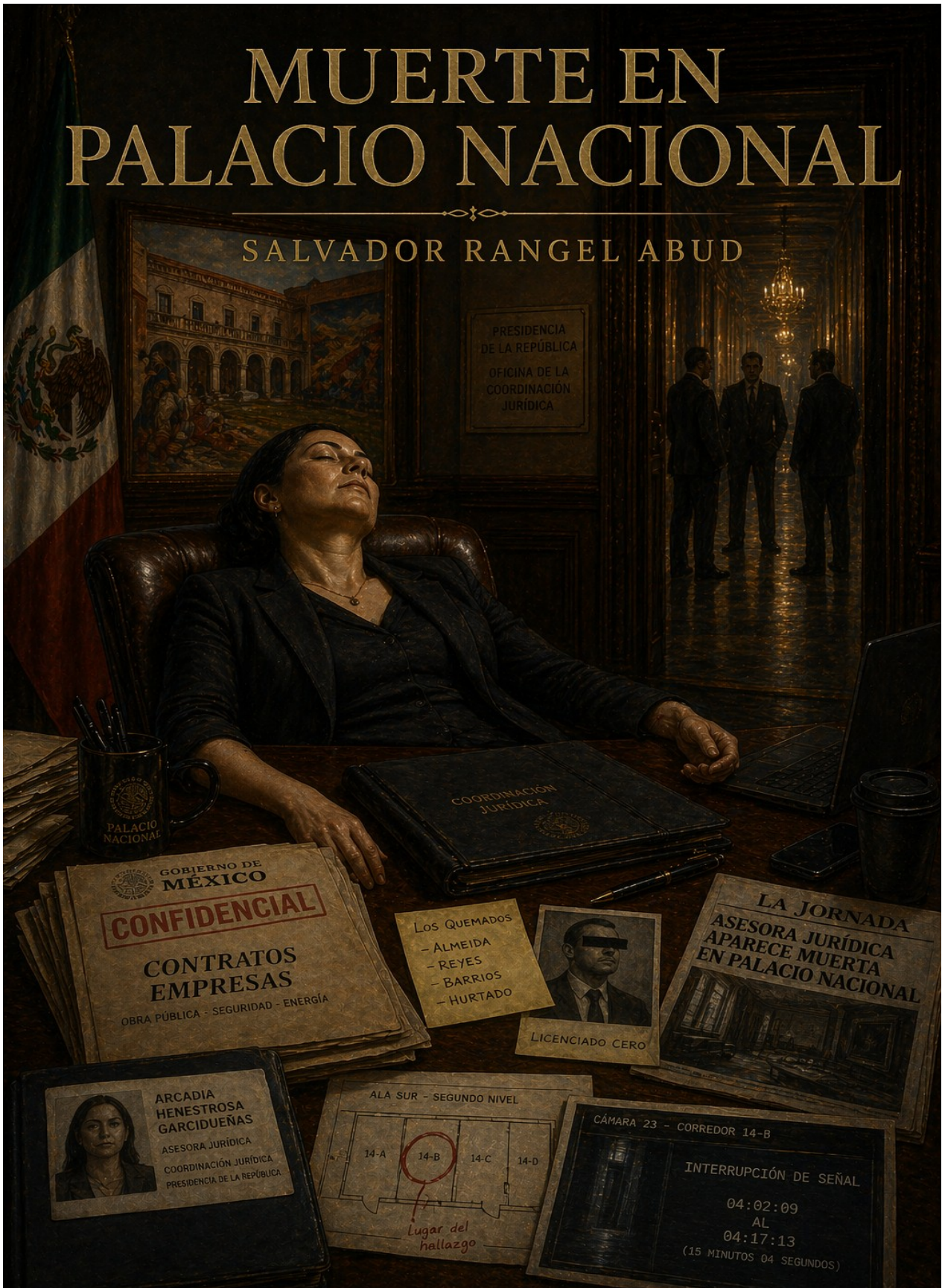


MUERTE EN PALACIO NACIONAL

SALVADOR RANGEL ABUD



MUERTE EN PALACIO NACIONAL

Salvador Rangel Abud

SINOPSIS

En el corazón del poder mexicano, una muerte imposible sacude los cimientos del Estado. Una madrugada, el cuerpo de la licenciada Arcadia Henestrosa Garcidueñas —asesora jurídica de la Presidencia de la República— aparece sin vida dentro de Palacio Nacional, en una zona que, por protocolo, debería ser impenetrable. No hay signos de violencia claros, no hay testigos, y lo más inquietante: los registros de seguridad presentan un vacío de quince minutos que nadie puede —o quiere— explicar.

Antes de que el gobierno pueda administrar el silencio, el caso se filtra en un podcast de alcance nacional. Obligada a actuar, la Fiscalía General de la República asigna la investigación a Silvestre Monterde Goldstein, un agente incómodo para el sistema: incorruptible, políticamente inclasificable, marcado por la pérdida de su hermana doce años atrás en circunstancias que nunca creyó accidentales.

A medida que avanza, Monterde descubre que Arcadia no era quien aparentaba ser, y que su muerte no es un hecho aislado sino el primer hilo de una red que conecta a funcionarios, empresas fantasma, operadores en las sombras y un mecanismo de corrupción institucional que ha sobrevivido a tres gobiernos. Cada pista lo acerca más al centro del poder. Y al mismo tiempo lo aísla.

Porque en Palacio Nacional, algunas muertes no se investigan. Se administran.

ADVERTENCIA DE CONTENIDO

Esta novela contiene violencia institucional sin sangre visible, corrupción de Estado narrada con precisión técnica y sin ingenuidad, personajes que toman decisiones morales en condiciones diseñadas para que no puedan tomarlas, y una burocracia que mata con la misma eficiencia con que archiva expedientes. Contiene también, en su fondo, la obstinación de quien cree que la verdad tiene consecuencias aunque el sistema haya sido diseñado para que no las tenga.

SOBRE EL AUTOR

Salvador Rangel Abud es médico cirujano, especialista en salud pública, maestro en administración de hospitales y doctorando en ciencias, además de escritor aficionado.

DETALLES DE PUBLICACIÓN

Título: Muerte en Palacio Nacional

Autor: Salvador Rangel Abud

Género: Thriller político / Novela negra / Denuncia social

Estructura: Prólogo + 12 capítulos + Epílogo

Ambientación: Ciudad de México / Cuernavaca / Mazatlán / Xalapa, 2025

Idioma: Español

Año de publicación: 2026

Plataforma: Internet Archive — Acceso abierto

Contacto: wrangel.1352@gmail.com

NOTA DEL AUTOR

Esta novela nació de una pregunta que llevo décadas haciéndome: ¿por qué en México la impunidad no es una falla del sistema sino su funcionamiento correcto? No escribí una novela sobre un crimen. Escribí una novela sobre la arquitectura que hace posible que el crimen ocurra dentro de las instituciones que deberían impedirlo, y sobre el tipo de personas que deciden, sabiendo el costo, que esa arquitectura no puede seguir siendo invisible.

Silvestre Monterde Goldstein no es un héroe. Es alguien que cree, con la obstinación del creyente sin dios, en la cadena de custodia y en la prueba que resiste el contrainterrogatorio. En este país, a veces, eso es suficiente para que algo cambie. Casi nunca. Pero a veces.

LICENCIA

Esta obra se publica bajo la licencia Creative Commons:

Salvador Rangel Abud © Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Usted es libre de compartir y distribuir esta obra en cualquier medio o formato, siempre que se otorgue crédito apropiado al autor, no se utilice con fines comerciales y no se generen obras derivadas sin autorización expresa. Más información: creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

PALABRAS CLAVE

thriller político · novela negra · corrupción institucional · Palacio Nacional · México · Fiscalía · denuncia social · crimen de Estado · impunidad · investigación criminal · poder · secretos · novela en español · Ciudad de México · sistema político mexicano

TEMAS PRINCIPALES

Muerte en Palacio Nacional no trata sobre un asesinato. Trata sobre lo que hace posible que un asesinato ocurra dentro de las instituciones diseñadas para impedirlo, y sobre lo que cuesta intentar demostrarlo. A lo largo de sus

doce capítulos, la novela explora la corrupción institucionalizada como infraestructura y no como excepción; la diferencia entre un régimen con funcionarios corruptos y un régimen donde la corrupción es el funcionamiento normal del sistema; la soledad específica de quien investiga desde adentro de la institución que también es parte del caso; la memoria como forma de deuda —lo que Arcadia debe a quienes no pudieron hablar antes que ella—; y la distribución de la verdad como única estrategia de supervivencia en un sistema diseñado para archivarla.

CITAS DESTACADAS

"En Palacio Nacional, algunas muertes no se investigan. Se administran."

"No era un régimen que tenía funcionarios corruptos. Era un régimen que había institucionalizado la corrupción hasta convertirla en el funcionamiento normal del sistema."

"Su única militancia era el procedimiento: creía, con la obstinación del creyente sin dios, en la cadena de custodia, en el testimonio verificable, en la prueba que resiste el contrainterrogatorio."

"Si alguien lee esto y yo ya no estoy, que sepa que no fue un accidente."

"Hay cosas que uno guarda mucho tiempo pensando que es prudencia, y un día se da cuenta de que era miedo."

COMPARACIONES LITERARIAS

Los lectores familiarizados con las siguientes obras encontrarán en *Muerte en Palacio Nacional* un territorio narrativo cercano, con el anclaje mexicano y la precisión institucional que le son propios.

Arturo Pérez-Reverte (***La reina del sur***, ***El maestro de esgrima***): la prosa directa, los diálogos cargados de subtexto y la mirada sin piedad sobre las instituciones que producen lo que dicen combatir.

John le Carré (***El topo***, ***El espía que surgió del frío***): el thriller institucional donde el enemigo no está afuera sino dentro del sistema, y donde la lealtad a la institución y la lealtad a la verdad son cosas que rara vez coinciden.

Henning Mankell (***Wallander***): la investigación como proceso moral, el investigador solitario que avanza no por heroísmo sino por incapacidad de detenerse, y el peso de lo que el trabajo le hace a quien lo hace.

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN

Monterde rechaza la oferta de Monterrey aunque sabe que aceptarla sería la decisión más segura. ¿Es eso valentía, obstinación o simplemente la incapacidad de ser otra persona?

Arcadia distribuye su expediente en tres direcciones simultáneas antes de morir. ¿Qué dice esa estrategia sobre lo que ella entendía del sistema que intentaba exponer?

La novela presenta a Sandoval Meza no como villana sino como funcionaria perfectamente adaptada al sistema. ¿Es esa adaptación una forma de corrupción o una forma de supervivencia?

El caso de Rebeca, la hermana de Monterde, conecta la historia del presente con un crimen de hace doce años. ¿Qué implica eso sobre la continuidad de los mecanismos de impunidad a través de los cambios de gobierno?

El epílogo termina con Monterde caminando en Xalapa sin saber todavía si hizo lo correcto. ¿Es ese final una derrota, una victoria parcial o simplemente la honestidad sobre lo que produce la justicia institucional cuando funciona?

CÓMO CITAR ESTA OBRA

APA: Rangel Abud, S. (2026). *Muerte en Palacio Nacional*. Internet Archive. <https://archive.org>

MLA: Rangel Abud, Salvador. *Muerte en Palacio Nacional*. Internet Archive, 2026.

Chicago: Rangel Abud, Salvador. *Muerte en Palacio Nacional*. Internet Archive, 2026.

OTRAS OBRAS

Salvador Rangel Abud es autor de más de ciento setenta novelas publicadas. Su obra abarca el thriller científico, la novela histórica, la ficción especulativa, la sátira política, el drama psicológico, el thriller médico de denuncia, la comedia negra, la novela de genealogía, la crónica costumbrista, la fábula ética, la ciencia ficción de base científica, la comedia romántica, el thriller de intriga familiar y —como demuestra esta entrega— el thriller político de denuncia social con anclaje institucional preciso.

Todas sus obras de acceso abierto se encuentran disponibles en Internet Archive bajo licencia CC BY-NC-ND 4.0. Para solicitudes de reseña, colaboración editorial o derechos de traducción, contactar directamente al autor por correo electrónico.

MENSAJE FINAL

México tiene instituciones. Tiene leyes. Tiene jueces y fiscales y agentes que entraron a sus trabajos, algunos de ellos, creyendo que las instituciones podían ser honestas si uno lo era suficientemente.

Lo que tiene también —y esto es lo que esta novela intenta documentar con la precisión de la ficción cuando la ficción se toma en serio— es un sistema que ha aprendido a convertir esa honestidad en una amenaza manejable. Que

sabe cómo usar la transferencia, la presión, la oferta conveniente y el archivo muerto para que quienes podrían cambiar algo terminen siendo parte de lo que no cambia.

Silvestre Monterde Goldstein eligió no ser parte de eso. Esa elección le costó Xalapa. Quizás valió la pena. Pregúntele en seis meses.

ÍNDICE

PRÓLOGO:	El suceso
CAPÍTULO 1:	La asignación imposible
CAPÍTULO 2:	La muerta que no debería estar muerta
CAPÍTULO 3:	Los quince minutos
CAPÍTULO 4:	El archivo de Arcadia
CAPÍTULO 5:	Presiones
CAPÍTULO 6:	La periodista
CAPÍTULO 7:	El general retirado
CAPÍTULO 8:	Los aliados incómodos
CAPÍTULO 9:	La conexión Rebeca

CAPÍTULO 10:	Lo que el sistema protege
CAPÍTULO 11:	La identidad del Licenciado Cero
CAPÍTULO 12:	Lo que se puede demostrar
EPÍLOGO:	Los resabios

MUERTE EN PALACIO NACIONAL

Por Salvador Rangel Abud

PRÓLOGO

*Palacio Nacional, Ciudad de México,
14 de marzo de 2025, madrugada*

La primera en saberlo fue Consuelo Páez Rincón, aunque tardó cuatro horas en decírselo a alguien.

Llevaba once años limpiando los corredores del ala sur de Palacio Nacional en el turno de las seis de la mañana, y en ese tiempo había aprendido que la discreción no era una virtud sino una condición de empleo. Había encontrado botellas de whisky escocés detrás de los sillones de piel, había recogido prendas de ropa interior que no pertenecían a los cónyuges oficiales de nadie, había escuchado conversaciones que no debía escuchar y había visto entrar y salir a personas a horas en que Palacio debería estar vacío. Once años de esa clase de silencio le habían enseñado que lo que ocurre dentro de estas paredes no existe mientras nadie lo nombre.

Lo que vio a las seis y cuarto de aquella mañana de marzo era diferente. Lo supo antes de acercarse, antes incluso de encender las luces del corredor 14-B, porque hay cosas que el cuerpo reconoce antes que la mente y la mente reconoce antes que la voluntad. El zapato de tacón bajo asomando detrás del

escritorio. La postura equivocada, ese abandono del cuerpo que no se parece a ningún otro tipo de descanso. El silencio distinto.

Consuelo Páez Rincón apagó su aspiradora portátil, retrocedió tres pasos y se quedó en el umbral con la mano en el interruptor de la luz que no encendió. Esperó. No sabía qué esperaba. Quizás que la figura detrás del escritorio se moviera, quizás que resultara ser otra cosa, quizás que alguien llegara y tomara la decisión por ella. Nadie llegó. La figura no se movió.

Salió del corredor, cerró la puerta con cuidado de no hacer ruido, y siguió limpiando las otras oficinas durante cuarenta minutos antes de reportarle a su supervisora que había un problema en el 14-B.

Su supervisora era Dolores Fuentes Magaña, veintidós años en el mismo edificio, y tardó exactamente el tiempo necesario en entender lo que Consuelo le estaba describiendo con circunloquios y eufemismos, porque ninguna de las dos quería ser la primera en pronunciar la palabra correcta. Dolores Fuentes bajó al corredor 14-B, abrió la puerta, encendió la luz, vio lo que había que ver y la apagó. Subió a su oficina de supervisión en el segundo nivel y marcó el número interno de seguridad que llevaba años sin usar.

Así empezó.

Lo que Consuelo y Dolores no sabían, porque nadie se los dijo esa mañana ni en los días siguientes, era que ellas no habían sido las primeras.

Tres horas antes de que Consuelo Páez empujara su aspiradora por el corredor 14-B, a las tres y cuarenta y siete de la madrugada, la cámara de seguridad número 23 había registrado a una mujer caminando sola por ese mismo corredor. Caminaba con el paso de alguien que conoce el edificio de memoria, sin dudar en los cruces, sin mirar los números de las puertas. Llevaba un portafolio de piel oscura bajo el brazo derecho y una taza de café en la mano izquierda, lo cual habría sugerido a cualquier observador que pensaba quedarse un rato. La cámara la captó durante ocho segundos y luego el ángulo la perdió. Eran las 3:47:22 de la madrugada.

A las 4:02:09, la misma cámara comenzó a transmitir estática.

Duró quince minutos con cuatro segundos. En el registro técnico posterior, ese intervalo quedaría documentado como interrupción de señal por falla en el nodo de transmisión 7-C. El técnico que firmó ese informe se llamaba Rodrigo Almeida Bravo, tenía veintinueve años, una deuda de diecisiete mil pesos con una financiera y un hermano mayor que trabajaba en la Coordinación de Seguridad Digital del Palacio. Rodrigo Almeida firmó el informe un martes por la tarde, lo subió al sistema y esa misma noche presentó su renuncia voluntaria por motivos personales.

La tercera persona que supo lo que había ocurrido en el corredor 14-B antes de que el sol saliera sobre el Zócalo era un hombre que aquella madrugada no debería haber estado en Palacio Nacional.

Su nombre no aparece en ningún registro de acceso de esa noche. Ninguna cámara lo captó. No existe bitácora de guardia que lo consigne. Sin embargo,

a las 4:58 de la mañana, desde una caseta de teléfono pública en la calle República de Uruguay —porque hay hombres que aún saben dónde quedan las casetas de teléfono públicas y para qué sirven—, realizó una llamada de cuatro minutos a un número con clave de área 667, que corresponde a la ciudad de Culiacán, Sinaloa. La llamada no fue grabada porque nadie sabía que había que grabarla. Lo que se dijo en esa llamada no consta en ningún expediente.

Consuelo Páez Rincón recibió su liquidación completa tres semanas después con una bonificación que no esperaba. Nunca declaró ante ninguna autoridad. Dolores Fuentes Magaña fue transferida, con aumento de sueldo, a la coordinación de servicios del edificio de la Secretaría de Gobernación en Bucareli. Rodrigo Almeida Bravo pagó su deuda con la financiera y abrió una miscelánea en Iztapalapa. El hombre de la caseta telefónica siguió, durante los meses siguientes, haciendo exactamente lo que había estado haciendo siempre.

La mujer del portafolio de piel y la taza de café no volvió a caminar por ningún corredor.

Se llamaba Arcadia Henestrosa Garcidueñas, tenía cincuenta y un años, era sinaloense de Guasave, asesora jurídica de la Presidencia de la República, y llevaba dieciocho meses construyendo en silencio el expediente que la había matado.

Nadie lo supo esa mañana.

Esa mañana, lo único que existía era una mujer detrás de un escritorio en el corredor 14-B, un zapato de tacón bajo asomando hacia la luz, y el silencio particular de Palacio Nacional antes de que el mundo despierte y vuelva a fingir que todo está en orden.

CAPÍTULO 1

La asignación imposible

Fiscalía General de la República, Ciudad de México, 16 de marzo de 2025

La oficina de Primitiva Sandoval Meza olía a café recalentado y a un perfume de importación que costaba más de lo que Monterde ganaba en una quincena. Él lo notó en cuanto entró, como notaba siempre los detalles que nadie había puesto ahí para que los notara, y se sentó en la silla frente al escritorio sin que nadie se lo indicara porque llevaba suficientes años en la Fiscalía para saber que esperar a que te inviten a sentarte es una forma de ceder terreno antes de empezar.

Sandoval Meza terminó de leer algo en su pantalla, o fingió terminarlo, y levantó la vista para mirarlo.

Era una mujer de cincuenta y seis años con el tipo de cara que sugiere que alguna vez fue atractiva y que ya no le importa haberlo dejado de ser. Cabello negro con hilos grises que no teñía, no por descuido sino por estrategia: en un

edificio lleno de funcionarios que se esforzaban en parecer más jóvenes de lo que eran, la madurez sin disimulo era una declaración de poder.

Llevaba quince años ascendiendo dentro de la Fiscalía con la paciencia de quien entiende que las instituciones no se conquistan por asalto sino por erosión. Había sobrevivido a tres fiscales generales, a dos cambios de gobierno y a una auditoría interna que se había archivado en circunstancias que Monterde nunca había podido establecer con suficiente precisión.

—Monterde —dijo, como si confirmara que era él.

—Licenciada.

Sandoval abrió una carpeta delgada sobre el escritorio y la empujó hacia él sin levantarse. Monterde la tomó. Adentro había tres hojas: un memorando interno de dos párrafos, una fotografía de la víctima en vida tomada de su credencial institucional, y una hoja con datos básicos. Nombre, cargo, edad. Fecha y hora aproximada del deceso. Ubicación dentro del Palacio.

Leyó todo con la velocidad de quien ha aprendido a leer documentos oficiales entre líneas, que es donde suele estar la información que importa.

—El caso se asigna a usted por instrucción del fiscal —dijo Sandoval—. Perfil de alta sensibilidad. Requiere a alguien con experiencia en casos de esta naturaleza y con la capacidad de manejar la discreción que la situación exige.

Monterde levantó la vista de la carpeta.

—¿Qué naturaleza tiene la situación?

—Una funcionaria de primer nivel apareció muerta dentro de Palacio Nacional. Eso ya es suficiente naturaleza.

—¿Causa de muerte?

—El informe forense preliminar indica paro cardiorrespiratorio.

—¿A los cincuenta y un años, sin antecedentes cardiovasculares conocidos, dentro de su oficina a las cuatro de la mañana.

No era una pregunta. Sandoval lo miró un momento antes de responder.

—Por eso se investiga.

Monterde volvió a la carpeta. La fotografía de la credencial mostraba a una mujer de facciones definidas, mirada directa, el gesto de quien ha aprendido a posar para fotografías institucionales sin perder la expresión que tiene cuando no la fotografían. Arcadia Henestrosa Garcidueñas. Asesora jurídica de la Presidencia. Guasave, Sinaloa, 1973.

—Discreción y rapidez —continuó Sandoval—. El gobierno tiene interés en que este asunto se resuelva sin alimentar la narrativa de ciertos sectores que ya están usando la muerte de la licenciada Henestrosa para sus propios fines.

—¿Qué sectores.

—Los de siempre. —Sandoval hizo un gesto vago que abarcaba la oposición política, los medios críticos al régimen y todo lo que entraba en esa categoría difusa—. Los primeros indicios que maneja seguridad apuntan hacia una

operación de desestabilización. Gente con interés en dañar al gobierno en un momento particularmente delicado.

Monterde anotó eso en su libreta. No porque lo creyera. Lo anotó porque esa frase, dicha en esa oficina en ese tono, era información. Le decía con precisión qué era lo que el sistema necesitaba que él encontrara, lo cual era exactamente lo contrario de lo que él iba a buscar.

—¿Tiene acceso a los registros de seguridad de Palacio? —preguntó.

—Se coordinará con la Coordinación de Seguridad del Palacio. Le han sido notificados.

—¿Testigos?

—Ninguno identificado hasta ahora.

—¿El personal de limpieza que encontró el cuerpo?

Una pausa mínima.

—Están disponibles para declarar.

—Bien. Necesito también el expediente médico de la víctima, sus registros de acceso al Palacio en los últimos seis meses, su agenda de los últimos treinta días y el listado completo del personal con acceso al ala sur esa noche.

Sandoval lo observó con la expresión de quien está calculando hasta dónde puede dejar que alguien camine antes de ponerle un límite.

—Se gestionará lo que sea pertinente para la investigación —dijo.

—Todo lo que pedí es pertinente para la investigación.

El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para que ambos entendieran dónde estaban parados.

—Monterde —dijo Sandoval, y su tono cambió apenas, no en volumen sino en textura, como cuando alguien deja de hablar para el expediente y empieza a hablar en serio—. Este caso tiene un techo. Usted lo sabe. Yo lo sé. Lo que se espera es un resultado que sea jurídicamente sostenible y políticamente manejable. No una guerra.

—Entiendo lo que se espera —dijo Monterde, y se levantó.

Salió de la oficina con la carpeta delgada bajo el brazo y el café que Sandoval nunca le ofreció.

En el pasillo, caminó hacia los elevadores con el paso parejo de siempre, sin apresurarse. Adentro del elevador, solo, miró la fotografía de la credencial una vez más. Arcadia Henestrosa Garcidueñas. Guasave, Sinaloa, 1973. Asesora jurídica de la Presidencia.

La conocía. No bien, no de manera íntima, pero la había tratado dos veces en contextos de trabajo. La primera, cuatro años atrás, en una reunión de coordinación interinstitucional sobre protocolos de cadena de custodia en casos de corrupción de alto perfil.

La segunda, dieciocho meses antes, en un pasillo de este mismo edificio, donde ella lo había detenido un momento con la excusa de saludarlo y le

había dicho algo que en ese momento le pareció anodino y que ahora, con la fotografía de la credencial en la mano, adquiriría un peso diferente.

Le había dicho: hay cosas que uno guarda mucho tiempo pensando que es prudencia, y un día se da cuenta de que era miedo.

Él no había sabido qué responder. Asintió, intercambiaron cortesías, siguieron cada quien por su camino.

Dieciocho meses después, Arcadia Henestrosa estaba detrás de un escritorio en el corredor 14-B del ala sur de Palacio Nacional con el corazón parado.

Monterde guardó la fotografía en la carpeta y salió del elevador.

Fernanda Leal lo estaba esperando en la sala cuatro del área de análisis, con dos cafés capuchinos sobre la mesa y una tableta con el expediente preliminar ya abierto en la parte más interesante.

Tenía veintinueve años, cabello corto, la costumbre de morderse el interior de la mejilla cuando procesaba información y una capacidad para el análisis forense digital que sus superiores habían intentado sistemáticamente subutilizar asignándola a tareas administrativas.

Monterde la había sacado de esa situación hacía dos años, cuando resolvió un caso de fraude electoral en Tamaulipas gracias a una reconstrucción de metadatos que Fernanda había elaborado en tres días trabajando sola.

—¿Qué nos dieron? —preguntó ella en cuanto él entró.

—Una carpeta con tres hojas y una narrativa sobre la oposición.

Fernanda lo miró.

—¿La oposición mató a la asesora jurídica de la Presidencia dentro de Palacio Nacional?

—Eso es lo que se espera que encontremos.

—Ah. —Fernanda tomó su café—. ¿Y qué vamos a encontrar?

—Todavía no lo sé. Por eso vamos a investigar.

Trabajaron durante seis horas sin salir de la sala. Monterde construyó en su libreta el esquema inicial del caso mientras Fernanda comenzaba a solicitar los accesos a los sistemas que necesitaban: registros de seguridad, bitácoras de acceso, comunicaciones internas del área jurídica de la Presidencia. Varios de los accesos fueron denegados con distintas fórmulas burocráticas. Otros llegaron incompletos. Dos solicitudes no recibieron respuesta.

—Los registros de la cámara 23 del corredor sur —dijo Fernanda, mirando su pantalla con la expresión de quien lee algo que no cuadra—. Hay un intervalo de quince minutos catalogado como falla técnica.

—¿Cuándo.

—Entre las cuatro dos y las cuatro diecisiete de la madrugada del catorce de marzo.

Monterde calculó. El personal de limpieza había encontrado el cuerpo a las seis quince. La última imagen de Arcadia caminando por el corredor era de las tres cuarenta y siete.

—¿Qué dice el informe técnico?

—Falla en el nodo de transmisión 7-C. Firmado por un técnico llamado Rodrigo Almeida Bravo.

—¿Está disponible para declarar?

Fernanda tecleó durante unos segundos.

—Renunció voluntariamente el dieciséis de marzo. Dos días después de la muerte de la licenciada Henestrosa.

Monterde escribió el nombre en su libreta. Rodrigo Almeida Bravo. Renuncia voluntaria. 16 de marzo.

—Localízalo —dijo.

A las siete de la tarde, Monterde cerró su libreta, recogió su saco del respaldo de la silla y le dijo a Fernanda que se fueran. Caminaron juntos hasta la salida del edificio y se separaron en la calle.

Él fue a recoger a Griselda a casa de su vecina, la señora Amparo, que vivía en el mismo piso y que cuidaba a la perra con una dedicación que Monterde nunca había podido agradecerle de manera proporcional.

Griselda era una perra de tamaño mediano, color café con manchas blancas, con un modo de moverse que sugería que en otra vida había sido alguien importante. Lo esperaba siempre en la puerta como si su regreso fuera el evento central de la jornada. Esa noche, Monterde se agachó a saludarla más tiempo del habitual.

Calentó algo que había en el refrigerador, comió de pie frente a la ventana que daba a la calle Moctezuma, y luego se sentó en el sillón con su libreta y repasó todo lo que sabía, que era muy poco, y todo lo que no sabía, que era casi todo.

Arcadia Henestrosa Garcidueñas había muerto en circunstancias que la autopsia oficial se negaba a llamar por su nombre. Los registros de seguridad presentaban un vacío de quince minutos que había sido catalogado como falla técnica por un técnico que renunció cuarenta y ocho horas después.

Su superiora directa en la Fiscalía le había indicado, con la elegancia de quien nunca deja huella, que orientara la investigación hacia la oposición política. Y él había conocido a la víctima, lo cual significaba que en algún momento iba a tener que declararlo o decidir no hacerlo, y ninguna de las dos opciones era cómoda.

También significaba otra cosa. Dieciocho meses antes, en ese pasillo, Arcadia le había dicho algo que ahora sonaba diferente. Hay cosas que uno guarda mucho tiempo pensando que es prudencia, y un día se da cuenta de que era miedo.

¿Le estaba hablando de ella misma? ¿Le estaba hablando a él?

Monterde cerró la libreta. Griselda estaba dormida a sus pies con esa indiferencia absoluta al mundo que solo tienen los perros y los santos.

Mañana iría al Servicio Médico Forense.

La autopsia oficial decía paro cardiorrespiratorio. Solo que él quería ver qué decía la autopsia real.

CAPÍTULO 2

La muerta que no debería estar muerta

Servicio Médico Forense · Palacio Nacional · Ciudad de México, 17 de marzo de 2025

El Servicio Médico Forense de la Ciudad de México huele igual a las seis de la mañana que a las seis de la tarde: a formaldehído, a detergente industrial y a algo que no tiene nombre pero que el cuerpo reconoce como la proximidad de lo definitivo. Monterde había estado ahí suficientes veces para haber dejado de notarlo, igual que uno deja de notar el ruido del tráfico en una ciudad grande. Lo que sí notó esa mañana, en cuanto empujó la puerta de la sala de análisis donde lo esperaba el doctor Aurelio Buentello Salas, fue que había dos informes sobre la mesa en lugar de uno.

Buentello era un hombre de sesenta y dos años con bigote blanco, manos grandes acostumbradas al trabajo preciso y una manera de hablar que sugería que había pasado demasiados años explicándoles a jueces y abogados cosas que ellos no querían entender. Era uno de los mejores patólogos forenses del país, lo cual en México significaba que llevaba décadas siendo sistemáticamente ignorado por las instancias que deberían haberlo escuchado.

—Agente Monterde —dijo sin levantar la vista de lo que estaba leyendo.

—Doctor. —Monterde miró los dos informes—. ¿Cuál de los dos es el oficial?

Buentello levantó la vista.

—El de arriba.

—¿Y el de abajo?

—El que yo escribí.

Monterde se sentó. Tomó el informe de arriba, lo leyó en dos minutos y lo devolvió a la mesa. Paro cardiorrespiratorio de etiología no determinada. Sin signos externos de violencia. Sin hallazgos toxicológicos relevantes en el análisis preliminar. Conclusión: muerte natural. Firmado por el doctor Ramón Castellanos Vega, coordinador de servicios forenses de la Procuraduría capitalina.

—¿Cuándo firmó Castellanos este informe? —preguntó.

—El quince por la tarde. Menos de treinta y seis horas después del hallazgo.

—¿Eso es normal?

—Para un caso sin circunstancias especiales, es rápido pero posible. Para este caso —Buentello empujó el segundo informe hacia él—, es una aberración.

Monterde tomó el segundo documento. Tenía el doble de páginas. Lo leyó despacio, deteniéndose en los párrafos técnicos que requería releer, y cuando terminó lo dejó sobre la mesa y miró a Buentello.

—Explíqueme las tres cosas que más le llaman la atención —dijo.

Buentello se recargó en su silla con el gesto de quien ha estado esperando que le hicieran esa pregunta.

—Primera. Las petequias. Arcadia Henestrosa presentaba petequias hemorrágicas en la conjuntiva de ambos ojos y en la mucosa oral. Son hemorragias puntiformes. El informe oficial las menciona de pasada como hallazgo inespecífico. No lo son. Las petequias conjuntivales en ese patrón y en esa distribución son un indicador clásico de asfixia mecánica. No de paro cardíaco espontáneo.

—¿Podría haber otra explicación?

—Hay otras causas posibles. Tos severa, maniobra de Valsalva prolongada, estados de shock. Pero en ausencia de antecedentes que justifiquen cualquiera de esas causas, y en el contexto de todo lo demás, la interpretación más parsimoniosa es la que el informe oficial evitó escribir.

—Segunda cosa.

—El nivel de potasio. La toxicología preliminar lo menciona como dentro de rangos normales. En mi análisis independiente, el nivel de potasio sérico es de 7.2 mili moles por litro. El rango normal superior es 5.0. A 7.2, el potasio produce arritmias fatales. Una hiperpotasemia de ese nivel puede matar a una persona sana sin dejar rastros evidentes de violencia externa y puede producir exactamente el cuadro electrocardiográfico compatible con un paro cardiorrespiratorio.

Monterde lo miró.

—¿Quiere decir que alguien pudo haberle administrado potasio.

—Quiero decir que el nivel de potasio en la sangre de Arcadia Henestrosa al momento de la autopsia era letal, y que eso no aparece en el informe oficial.

—¿Cómo se administra.

—Vía intravenosa es lo más eficiente. Una solución concentrada de cloruro de potasio produce un paro cardíaco en minutos. En una autopsia rutinaria, si no sabes lo que buscas, puede pasar desapercibido. Los niveles de potasio se elevan de manera natural en el proceso de descomposición celular, así que un patólogo que no esté buscando específicamente una hiperpotasemia premortem puede interpretar el valor elevado como un artefacto postmortem.

—¿Y usted estaba buscando.

Buentello hizo una pausa antes de responder.

—Cuando me llegó el caso, algo no cuadraba. Una mujer de cincuenta y un años sin antecedentes cardiovasculares documentados, en buen estado general de salud según su expediente médico institucional, muere de paro cardíaco en su oficina a las cuatro de la mañana. Decidí mirar con más cuidado de lo que el protocolo estándar requería.

—¿Y la tercera cosa?

Buentello abrió el informe en una página marcada con un clip.

—Las marcas en el antebrazo izquierdo. Muy pequeñas. Puntiformes. En el informe oficial están catalogadas como marcas de extracción de sangre para análisis clínicos recientes, lo cual es plausible si la víctima se hubiera hecho estudios de laboratorio en los últimos días. Revisé su expediente médico. No hay ningún estudio de laboratorio en los últimos cuatro meses. Las marcas no tienen la morfología típica de una venopunción rutinaria. Tienen la morfología de una punción realizada con urgencia, o por alguien que no era experto en venopunciones, o en condiciones de poca luz.

El silencio que siguió fue de los que se construyen solos, sin que nadie tenga que fabricarlos.

—¿Presentó usted este informe ante alguna autoridad? —preguntó Monterde.

—Se lo entregué al coordinador Castellanos el mismo día que terminé de redactarlo. —Buentello tomó su café, que debía estar frío—. Me dijo que lo revisaría. Eso fue hace dos días. No he vuelto a saber de él.

—¿Tiene copias.

—Usted tiene una en sus manos.

—¿Hay más.

Buentello lo miró con la expresión de quien lleva décadas en una institución y sabe exactamente cómo funciona.

—Las que sean necesarias —dijo.

Monterde dobló el informe con cuidado, lo guardó en el interior de su saco y se levantó.

—Doctor Buentello. Nadie debe saber que tuvimos esta conversación hasta que yo le diga lo contrario.

—Agente Monterde. —El patólogo también se levantó—. Llevo treinta y cuatro años en esta institución. Sé perfectamente cuándo hay que hablar y cuándo hay que esperar. Si no lo supiera, ya no estaría aquí.

Monterde asintió. Le extendió la mano. Buentello se la estrechó con las manos grandes y precisas de quien ha pasado décadas haciendo preguntas que los muertos no pueden responder pero que a veces, si uno mira con cuidado, los muertos ya dejaron escritas en su propio cuerpo.

En la calle, Monterde caminó media cuadra antes de detenerse. El sol de marzo en la Ciudad de México a esa hora de la mañana caía con una claridad

que parecía mentira dado lo que había dentro de ese edificio. Sacó su libreta y escribió tres palabras: petequias, potasio, punción.

Arcadia Henestrosa Garcidueñas no había muerto de un paro cardíaco espontáneo. Alguien le había detenido el corazón.

La pregunta no era cómo. La pregunta era quién había tenido acceso a ella, a una solución de cloruro de potasio y a quince minutos de oscuridad en los registros de seguridad. Y la pregunta detrás de esa pregunta era qué había estado documentando la licenciada Henestrosa durante los últimos dieciocho meses que justificara ese nivel de planificación.

Llamó a Fernanda.

—¿Localizaste a Almeida Bravo? —preguntó en cuanto ella contestó.

—Tengo una dirección en Iztapalapa. Vive con su madre. Intenté llamarle pero el número que registró al renunciar está fuera de servicio.

—Vamos a visitarlo hoy en la tarde. —Hizo una pausa—. ¿Pudiste acceder al expediente médico de la víctima?

—El expediente institucional llegó esta mañana. Pero está incompleto. Faltan los registros de los últimos cuatro meses.

Monterde miró la calle sin ver nada en particular.

—¿Incompleto por error o incompleto por diseño?

—No hay forma de saberlo todavía. Pero las páginas que faltan no están en blanco. No están. Alguien las retiró antes de enviarnos el expediente.

—Anótalo. Y busca el médico de cabecera que aparezca en los registros anteriores. Quiero hablar con él.

Colgó y guardó el teléfono. Siguió caminando hacia donde había estacionado su coche, un Tsuru gris de dos mil nueve que había decidido no cambiar porque en esa ciudad un Tsuru es invisible y la invisibilidad tiene un valor que ningún seguro puede calcular.

Mientras manejaba de regreso a la Fiscalía, pensó en Arcadia.

La había visto por primera vez cuatro años atrás en esa reunión de coordinación interinstitucional, y lo que recordaba de ella era precisamente su manera de escuchar. Había en la sala una docena de funcionarios de distintas dependencias, todos hablando con la urgencia de quien necesita demostrar que sabe más que los demás, y Arcadia Henestrosa había permanecido callada durante casi toda la reunión, tomando notas en un cuaderno de pasta dura, sin levantar la vista más que para hacer dos preguntas. Ambas preguntas habían sido las más precisas de la mañana.

La segunda vez que la vio, dieciocho meses antes, había sido diferente. El pasillo de la Fiscalía, las diez de la mañana, ella saliendo de una reunión con el área de asuntos constitucionales, él entrando. Se saludaron con la cortesía de quienes se conocen sin conocerse, y entonces Arcadia lo detuvo. Dijo que quería preguntarle algo, si tenía un momento. Él tenía prisa pero dijo que sí. Ella preguntó: ¿usted cree que hay casos que el sistema no puede resolver

porque el sistema mismo es parte del caso? Monterde respondió que sí, que eso pasaba con más frecuencia de lo que la gente pensaba. Arcadia asintió, lo miró un segundo con algo que no era exactamente miedo pero sí era consciencia de algo, y luego dijo esa frase que él no había olvidado aunque tampoco había sabido qué hacer con ella: hay cosas que uno guarda mucho tiempo pensando que es prudencia, y un día se da cuenta de que era miedo.

Luego siguió caminando y él también.

Ahora, manejando por el Eje Central con el tráfico de la mañana avanzando a trompicones, Monterde se preguntaba si esa conversación había sido casual o si Arcadia había buscado ese encuentro. Si lo había buscado, ¿por qué a él? ¿Qué sabía de él que lo hiciera parecer un interlocutor posible para ese tipo de confesión a medias?

La respuesta más sencilla era también la más incómoda: que Arcadia había estado buscando a alguien dentro del sistema que no fuera del sistema. Alguien que tuviera acceso institucional pero que no le debiera lealtades a las mismas personas a quienes ella había comenzado a temer.

Si eso era cierto, entonces dieciocho meses atrás Arcadia Henestrosa ya sabía que estaba en peligro. Y había decidido guardar silencio.

El informe de Buentello decía que el potasio mata en minutos. Eso significaba que quien lo hizo estuvo con ella en ese corredor. Que Arcadia, en algún momento de esa madrugada del catorce de marzo, estuvo frente a frente con la persona que había decidido matarla. Quizás lo reconoció. Quizás incluso lo conocía.

Monterde llegó a la Fiscalía, estacionó el Tsuru en el sótano y subió por las escaleras porque los elevadores del edificio tenían cámaras y él necesitaba pensar sin que nadie lo viera pensar.

Fernanda lo esperaba con el expediente de la víctima desplegado sobre la mesa y una expresión que él ya conocía: la de quien ha encontrado algo que no esperaba encontrar.

—El médico de cabecera —dijo ella en cuanto lo vio entrar—. El doctor que aparece en los registros anteriores del expediente. Se llama Héctor Izquierdo Garza, tiene consulta privada en la colonia Polanco. Lo llamé hace una hora.

—¿Y?

Fernanda dudó un segundo antes de responder, lo cual era inusual en ella.

—Me dijo que la licenciada Henestrosa había cancelado todas sus citas en los últimos cuatro meses. Que había dejado de atenderse con él. Me lo dijo sin que yo le preguntara, como si llevara días esperando que alguien llamara y preguntara precisamente eso.

—¿Le preguntaste por qué canceló?

—Me dijo que no lo sabía. Pero luego, antes de colgar, añadió algo. Dijo: lo que sí sé es que en la última cita que tuvo conmigo, en noviembre, llegó con

el brazo izquierdo vendado. Le pregunté qué le había pasado. Me dijo que se había caído. Yo le creí en ese momento. Ahora ya no sé.

El brazo izquierdo.

Las marcas puntiformes en el antebrazo izquierdo que Buentello había documentado en su informe y que el informe oficial había catalogado como venopunciones rutinarias.

Monterde se quedó mirando la pared durante tres segundos que para él equivalían a media hora de razonamiento.

—Hay alguien que lleva tiempo practicando con ella —dijo.

Fernanda lo miró sin responder, porque a veces las conclusiones no necesitan confirmación sino silencio.

—Consigue la dirección del doctor Izquierdo. Vamos a verlo hoy. —Monterde se sentó y abrió su libreta—. Y busca todo lo que puedas sobre los últimos dieciocho meses de Arcadia Henestrosa. Agenda, desplazamientos, comunicaciones internas, viajes. Quiero saber con quién se reunió, adónde fue y qué dejó de hacer que antes hacía.

—Eso es mucho material.

—Empieza por Sinaloa —dijo Monterde—. Quiero saber cuántas veces viajó a Culiacán en el último año y medio. Y con quién se reunió cuando estuvo ahí.

Fernanda anotó sin preguntar por qué Sinaloa. En dos años de trabajar juntos había aprendido que Monterde no daba instrucciones sin razón, y que las razones llegaban siempre, aunque a veces tardaran.

La razón en este caso era una llamada de cuatro minutos desde una caseta telefónica en la calle República de Uruguay a las 4:58 de la madrugada del catorce de marzo, a un número con clave de área 667. Un detalle que estaba en el expediente preliminar enterrado en dos líneas de un informe de comunicaciones que nadie había considerado importante. Monterde lo había leído. Lo había subrayado. Y lo había conectado, con esa capacidad de conectar puntos que sus superiores jamás habían sabido aprovechar porque preferían puntos que no se conectaran, con la procedencia sinaloense de la víctima y con las empresas que habrían de aparecer, lo presentía con la certeza que da el oficio, en el expediente que Arcadia había estado construyendo durante meses.

Arcadia Henestrosa había nacido en Guasave, Sinaloa. Alguien había llamado a Culiacán minutos después de asegurarse de que estaba muerta.

Eso no era una coincidencia. Era una geografía.

Y las geografías, en los casos de este tipo, siempre llevaban a algún lugar.

CAPÍTULO 3

Los quince minutos

División de análisis forense digital · FGR · Ciudad de México, 18 de marzo de 2025

La División de análisis forense digital de la Fiscalía General de la República ocupaba la mitad del séptimo piso de un edificio que olía a papel húmedo y a café de máquina expendedora. Era un espacio sin ventanas al exterior, iluminado por fluorescentes que Fernanda Leal había complementado con una lámpara de escritorio propia porque la luz artificial de tubo le producía jaquecas después de las cuatro horas. Nadie le había dicho que podía traer la lámpara. Nadie le había dicho que no podía. En dos años, ninguno de sus superiores directos había entrado a ese espacio más de tres veces, lo cual era exactamente el tipo de invisibilidad que a Fernanda le permitía trabajar.

Esa mañana había llegado a las seis y cuarto. Monterde llegó a las siete menos diez con dos cafés de la panadería de la esquina, que eran considerablemente mejores que los de la máquina del pasillo, y con la expresión de quien ha dormido lo suficiente para funcionar pero no lo suficiente para descansar.

—Cuéntame —dijo, sentándose en la silla que siempre usaba cuando trabajaba ahí, frente a la segunda pantalla.

Fernanda giró su silla hacia él. Tenía tres ventanas abiertas en su monitor principal y una hoja de notas manuscritas sobre el teclado, que era otro de sus hábitos: escribía a mano lo que necesitaba entender de verdad y en pantalla lo que necesitaba procesar rápido.

—Los registros de la cámara 23 —dijo—. Empecé desde el principio, desde las doce de la noche del trece de marzo hasta las seis de la mañana del catorce. Cuatro horas y cuarto de grabación continua antes del intervalo. Funciona bien. Sin interrupciones, sin anomalías, la señal es limpia. Luego, a las 4:02:09, corte abrupto. No es un fade, no es una degradación progresiva de la señal como ocurre con una falla de hardware real. Es un corte. Como cuando apagas un interruptor.

—¿Eso descarta la falla técnica?

—Descarta la falla técnica espontánea. Una falla real en el nodo de transmisión produce una degradación antes del corte, o produce una señal de error que queda registrada en el sistema. Aquí no hay ni una cosa ni la otra. Lo que hay es una interrupción limpia seguida de quince minutos de estática y luego la reanudación de la señal, también limpia, también abrupta, a las 4:17:13.

—¿La estática es real?

Fernanda lo miró con la expresión que reservaba para las preguntas que la obligaban a explicar cosas que ella consideraba evidentes pero que entendía que no todo el mundo tenía por qué saber.

—No. La estática es generada. Alguien insertó una secuencia de ruido visual en el canal de transmisión para que el intervalo no apareciera como un espacio en negro, que habría sido más obvio. Es una técnica que existe, que

tiene nombre en el ámbito de la seguridad digital y que requiere acceso al sistema de gestión de cámaras, no solo al hardware físico de la cámara.

—¿Qué tipo de acceso?

—Acceso administrativo al sistema central de videovigilancia. Hay tres niveles de acceso en el sistema de Palacio Nacional. El nivel uno es visualización: los guardias de seguridad en turno pueden ver las cámaras en tiempo real pero no pueden editar ni descargar. El nivel dos es gestión operativa: los coordinadores de turno pueden hacer descargas, revisar historiales, reportar fallas. El nivel tres es administración del sistema: puede modificar configuraciones, gestionar permisos, y, teóricamente, intervenir en los canales de transmisión.

—¿Cuántas personas tienen acceso de nivel tres?

Fernanda tomó su hoja de notas.

—Once. Cuatro son técnicos del área de sistemas de Palacio. Tres son coordinadores de seguridad con rango de dirección. Dos son funcionarios de la Secretaría de Gobernación con responsabilidades de supervisión sobre infraestructura de seguridad nacional. Uno es el responsable de seguridad digital de la Presidencia. Y uno más es externo: una empresa contratista que mantiene el sistema y tiene acceso remoto para actualizaciones y soporte técnico.

—¿La empresa contratista tiene registro de acceso esa noche?

—Eso es lo primero que verifiqué. El sistema registra automáticamente cada acceso remoto con fecha, hora y usuario. La empresa contratista no registra ningún acceso entre las doce de la noche del trece y las ocho de la mañana del catorce.

—¿Y los otros diez?

—Ahí está el problema. —Fernanda giró hacia su pantalla y abrió una ventana con una tabla—. Los registros de acceso del sistema central muestran que entre las 3:50 y las 4:20 de la madrugada del catorce, hubo un acceso de nivel tres. Duró diecinueve minutos. Pero el campo de identificación de usuario está en blanco.

Monterde se quedó mirando la tabla.

—¿Puede estar en blanco por un error del sistema?

—Puede estar en blanco porque alguien con conocimiento suficiente del sistema supo cómo entrar sin dejar ese registro. No es fácil. Requiere conocer la arquitectura del sistema desde adentro. Pero tampoco es imposible si sabes lo que estás haciendo.

—¿Rodrigo Almeida Bravo sabía lo que estaba haciendo?

Fernanda dudó.

—Almeida era técnico de nivel dos. Tenía conocimiento del sistema suficiente para detectar una falla y reportarla, pero no el nivel de acceso ni, según su perfil profesional, la capacidad técnica para ejecutar lo que estoy

describiendo. Lo que sí pudo hacer Almeida, y esto es importante, es firmar un informe que explicara el intervalo como una falla técnica. Eso no requiere habilidades avanzadas. Requiere disposición.

—Y un hermano mayor en la Coordinación de Seguridad Digital.

Fernanda lo miró.

—¿Cómo sabes eso?

—Está en su expediente de personal. Lo leí anoche. El hermano se llama Gustavo Almeida Bravo, trabaja como analista senior en la Coordinación de Seguridad Digital de Palacio desde hace seis años. —Monterde bebió su café —. ¿Puedes verificar si Gustavo Almeida tiene acceso de nivel tres?

Fernanda tecleó durante treinta segundos.

—Sí. Es uno de los cuatro técnicos del área de sistemas de Palacio con acceso de nivel tres.

El silencio que siguió tenía la densidad de las cosas que empiezan a tomar forma.

—Localicemos también a Gustavo —dijo Monterde.

—Ya lo intenté esta mañana. Está de licencia por enfermedad desde el quince de marzo. Un día después de la muerte de la licenciada Henestrosa.

—¿Verificada la licencia?

—El área de recursos humanos de Palacio confirma la solicitud. No hay ningún documento médico adjunto en el expediente que me enviaron, pero eso puede ser un rezago administrativo o puede ser que no exista.

Monterde anotó en su libreta: Gustavo Almeida Bravo. Acceso nivel tres. Licencia desde 15 de marzo. Sin documentación médica.

—¿Pudiste avanzar en los viajes de Arcadia a Sinaloa? —preguntó.

—Eso tardó más. Los registros de viajes institucionales de la Presidencia no están en los sistemas a los que tengo acceso directo. Tuve que solicitarlos formalmente y me llegó una respuesta que básicamente dice que el área jurídica de la Presidencia está revisando qué información puede compartir con la Fiscalía.

—¿La Presidencia le está poniendo restricciones a la Fiscalía en una investigación de homicidio.

—Me lo dijeron con más palabras y menos claridad, pero sí, eso es lo que dijeron.

Monterde dejó su café sobre la mesa. Había algo en esa respuesta que era, a su manera, más reveladora que cualquier registro de acceso: la Presidencia no estaba cooperando con la investigación de la muerte de su propia asesora jurídica. Eso podía significar que estaban protegiendo a alguien. O podía significar algo más incómodo: que estaban protegiendo información que la investigación podría exponer como daño colateral.

—Busca los registros de viajes por otra vía —dijo—. Aerolíneas, manifiestos de vuelos privados, registros de la Guardia Nacional en los aeropuertos. Y busca también en el registro vehicular los vehículos asignados a la Presidencia. Si Arcadia viajó a Culiacán en vehículo oficial, hay una bitácora.

—Eso va a tardar.

—Empieza ahora.

Fernanda asintió y giró hacia su pantalla. Monterde se quedó mirando la tabla con el acceso de nivel tres y el campo de usuario en blanco. Once personas con acceso. Una de ellas, o alguien que actuó a través de una de ellas, había intervenido el sistema de videovigilancia de Palacio Nacional en los minutos en que Arcadia Henestrosa moría en el corredor 14-B. El técnico que firmó el informe de falla era el hermano menor del hombre con acceso de nivel tres, y ambos hermanos habían desaparecido del escenario en las cuarenta y ocho horas siguientes al crimen.

Era demasiado ordenado para ser espontáneo.

Lo que estaba viendo no era la huella de un crimen de pasión ni de una improvisación. Era la huella de una operación que había sido planificada con tiempo suficiente para anticipar la necesidad de borrar sus propias trazas.

Su teléfono vibró. Era un número que no tenía registrado. Lo dejó sonar. Vibró de nuevo. Lo tomó.

—Monterde —dijo.

Silencio de dos segundos. Luego una voz de mujer, baja, con la dicción precisa de quien ha aprendido a hablar en público y sabe exactamente cuánto peso darle a cada palabra.

—Agente Monterde, soy Valentina Camarillo. Necesito hablar con usted hoy.

Monterde no respondió de inmediato. Conocía el podcast. Lo había escuchado dos veces en los últimos tres días, desde que el caso se había filtrado, con la atención desagradable de quien se escucha a sí mismo en una grabación sin haberlo autorizado: Camarillo había publicado detalles del caso que solo podían provenir de alguien con acceso al expediente oficial. El número de cámara. La hora exacta del intervalo de señal. El nombre del técnico que firmó el informe.

—¿Cómo consiguió este número? —preguntó.

—De la misma manera en que consigo todo —dijo Camarillo—. Lo que tengo que contarle es más importante que cómo llegué a usted.

—¿Qué tiene que contarme.

—Arcadia Henestrosa me llamó hace seis semanas. Quería reunirse. Le dije que sí. Me mandó cancelar dos veces. La tercera vez que intenté contactarla, no respondió.

Monterde miró a Fernanda, que lo estaba observando sin fingir que no lo hacía.

—¿Dónde quiere reunirse? —preguntó.

—Donde usted diga. Pero hoy.

—Café La Habana. República de Cuba, a las siete de la tarde.

—Ahí estaré.

La llamada terminó. Monterde bajó el teléfono y lo miró un momento como si el aparato pudiera explicarle algo más de lo que acababa de escuchar.

—¿Valentina Camarillo? —preguntó Fernanda.

—Sí.

—¿Le crees?

Monterde recogió su saco del respaldo de la silla.

—Creo que tiene algo. No sé todavía si es lo mismo que yo tengo o si es algo distinto. —Se levantó—. Mientras tanto, sigue con los registros de viaje. Y localiza a Gustavo Almeida aunque esté de licencia por enfermedad. Quiero saber dónde está físicamente.

—¿Le aviso si lo encuentro antes de las siete?

—Avísame en cuanto encuentres cualquier cosa.

Salió al pasillo. En el elevador, de bajada hacia el estacionamiento, pensó en la frase que Fernanda había usado sin darse cuenta: ¿le crees? No: ¿crees que dice la verdad?, no ¿crees que su información es confiable? Le crees. Como si la credibilidad de Valentina Camarillo fuera una cuestión personal, no procesal.

Monterde sabía que en los casos de este tipo, la frontera entre lo personal y lo procesal era exactamente donde el sistema te atrapaba. El sistema no te corrompía con dinero, no siempre: a veces te corrompía con urgencia, con la ilusión de que entender algo era lo mismo que probarlo, de que creerle a alguien era lo mismo que tener evidencia.

Él creía que Arcadia había sido asesinada. Tenía el informe de Buentello para sostenerlo. Creía que los quince minutos de estática habían sido fabricados. Tenía el análisis de Fernanda para sostenerlo. Creía que los hermanos Almeida eran piezas en un mecanismo más grande. Todavía no tenía nada para sostenerlo, solo una coincidencia de fechas y un campo de usuario en blanco.

Y esta tarde iba a reunirse con una periodista que le diría cosas que podían ser verdad, parcialmente verdad o estratégicamente verdad, y su trabajo era escuchar todo con la misma temperatura fría con que leía un informe forense.

Salió a la calle. El sol de marzo seguía siendo implacable. El Tsuru estaba donde lo había dejado, invisible entre docenas de coches del mismo color y la misma época.

Arrancó y puso rumbo al norte. Tenía una dirección en Iztapalapa, un técnico que había renunciado cinco días atrás y una tarde entera antes de las siete.

Los quince minutos de oscuridad en el corredor 14-B eran el corazón del caso. Todo lo demás era consecuencia o contexto. Quien había borrado esos quince minutos sabía exactamente lo que había ocurrido en ellos.

Y Monterde iba a encontrar a esa persona aunque tuviera que reconstruir, segundo a segundo, cada uno de esos novecientos cuatro segundos de estática fabricada.

CAPÍTULO 4

El archivo de Arcadia

Iztapalapa · Xochimilco · Ciudad de México, 18 de marzo de 2025

La dirección que Fernanda había conseguido para Rodrigo Almeida Bravo era un edificio de tres pisos en la colonia Jardín Balbuena, a cuatro cuadras del mercado, con una fachada de azulejo beige que en algún momento había sido blanco y una reja de herrería negra con el número quince pintado a mano.

Monterde tocó el timbre del departamento 2-B a las once y cuarto de la mañana y esperó. No hubo respuesta. Tocó de nuevo. Desde adentro llegó el sonido de una televisión encendida y luego pasos lentos y luego el ruido de una cadena descorrida.

La mujer que abrió tenía setenta y tantos años, cabello blanco recogido en una trenza, mandil de cocina y la expresión de quien ha abierto puertas a desconocidos suficientes veces como para no asustarse pero sí para calibrar.

—¿La señora Almeida? —preguntó Monterde, con su credencial ya en la mano.

La mujer la miró sin tocarla.

—¿Qué pasó?

—Nada malo, señora. Necesito hablar con su hijo Rodrigo.

—Rodrigo no está.

—¿Sabe dónde puedo encontrarlo?

La mujer lo miró un momento más, con esa forma de mirar que tienen las madres cuando están calculando qué decir para proteger a alguien sin mentir del todo.

—Se fue el fin de semana. Me dijo que iba a casa de un amigo en Puebla. No me dio más detalles.

—¿Tiene forma de contactarlo? ¿Un número de teléfono, una dirección en Puebla?

—Me dijo que iba a llamarme cuando llegara. —Pausa—. No ha llamado.

Monterde guardó la credencial.

—¿Cuándo fue la última vez que habló con él?

—El sábado en la mañana. —La voz de la mujer era plana, sin inflexiones, como quien narra hechos que preferiría no narrar—. Llegó aquí el viernes en la noche, estuvo un rato, cenamos, y el sábado temprano se fue.

—¿Lo notó diferente el viernes?

La pregunta quedó en el aire entre los dos. La señora Almeida miró más allá de Monterde, hacia la calle, como si buscara algo o como si necesitara un momento antes de responder.

—Estaba nervioso —dijo finalmente—. Mi hijo cuando está nervioso no come. El viernes no cenó casi nada.

Monterde le dio una tarjeta con su número directo y le pidió que lo llamara en cuanto Rodrigo se comunicara. La mujer tomó la tarjeta con cuidado, como si fuera algo que podía romperse, y cerró la puerta sin decir más.

De vuelta en el Tsuru, Monterde se quedó sentado un momento sin arrancar. Rodrigo Almeida había renunciado el lunes, visitado a su madre el viernes, y el sábado había desaparecido hacia Puebla sin dar una dirección ni llamar después.

El hermano mayor estaba de licencia por enfermedad sin documentación. Ambos habían salido del escenario en el mismo periodo de cuarenta y ocho horas, en distintas direcciones, con distintas excusas.

Arrancó el coche y marcó a Fernanda mientras manejaba.

—¿Algo sobre Gustavo Almeida?

—Sí. Localicé su domicilio registrado en el IMSS. Colonia Narvarte. Fui esta mañana antes de que llegaras, cuando todavía no me decías que fuera al trabajo. —Pausa breve—. Nadie abre. Los vecinos del piso de abajo dicen que no lo han visto desde el lunes.

—¿Vive solo?

—Sí. Separado. Un hijo que vive con la madre en Ecatepec.

Monterde calculó. Los dos hermanos Almeida habían desaparecido. Eso podía significar varias cosas, y no todas eran igualmente tranquilizadoras. Podía significar que los habían movido para protegerlos como testigos.

Podía significar que los habían movido para silenciarlos como riesgos. Podía significar que habían huido por iniciativa propia, con suficiente miedo como para no decirle a nadie adónde iban.

—Pon una alerta en el sistema con los dos nombres —dijo—. Quiero saber si alguno usa tarjeta de crédito, cajero automático, si sube a un avión o cruza cualquier caseta de cobro en el país.

—Ya está hecho para Rodrigo. Gustavo lo agrego ahora.

Colgó y siguió manejando. No hacia la Fiscalía. Hacia la colonia Portales, donde había un café de chinos en la calle Moctezuma al que iba a pensar cuando necesitaba pensar sin que nadie lo interrumpiera. Pidió un café con leche y una orden de pan dulce que no iba a comerse, y sacó su libreta.

Lo que tenía hasta ese momento era una cadena de hechos verificables, algunos con soporte documental y algunos todavía solo con soporte testimonial, que apuntaban todos en la misma dirección: alguien con acceso

privilegiado al sistema de seguridad de Palacio Nacional había fabricado una ventana de quince minutos en los registros de videovigilancia, y esa ventana coincidía con el momento en que Arcadia Henestrosa recibía una dosis letal de cloruro de potasio que su autopsia oficial se negaba a llamar por ese nombre. Los hermanos Almeida habían facilitado la cobertura burocrática de esa operación y habían desaparecido en cuanto el caso comenzó a moverse.

Lo que no tenía era el por qué. No el por qué inmediato, que era relativamente claro: Arcadia sabía algo que alguien necesitaba que no dijera. Lo que no tenía era el qué. Qué era lo que Arcadia sabía.

Qué era lo que llevaba dieciocho meses documentando. Qué era lo que la había llevado, en algún momento de ese proceso, a pararse en un pasillo de la Fiscalía General y decirle a un investigador que apenas conocía que hay cosas que uno guarda mucho tiempo pensando que es prudencia y un día se da cuenta de que era miedo.

Esa tarde, a las siete, Valentina Camarillo iba a decirle que Arcadia la había contactado seis semanas antes de morir. Que había querido reunirse. Que había cancelado dos veces.

Seis semanas antes eran los primeros días de febrero. Monterde anotó la fecha en su libreta y la subrayó. Algo había ocurrido en febrero que había llevado a Arcadia a decidir que ya no podía seguir guardando lo que guardaba. Y algo había ocurrido después, en algún momento entre esa decisión y la madrugada del catorce de marzo, que la había llevado a cancelar esa reunión dos veces.

Alguien se había dado cuenta de que estaba a punto de hablar.

Dejó el café a medias, pagó y salió.

Tenía una dirección más que visitar antes de las siete.

La había encontrado Fernanda esa mañana, rastreando los contactos del teléfono de Arcadia hacia atrás en el tiempo, identificando los números que aparecían con mayor frecuencia en los meses anteriores a la muerte. Uno de ellos, que había dejado de aparecer en el registro a partir de enero, correspondía a un nombre que no estaba en la agenda de Arcadia sino en la memoria del teléfono sin etiqueta, solo como una serie de iniciales: E.V.H.

La Fiscalía había cruzado el número con sus bases de datos y había obtenido un nombre: Evaristo Villanueva Hurtado, setenta y dos años, propietario de una empresa de almacenamiento y logística con bodegas en Xochimilco, Vallejo y Cuautitlán.

No había ningún registro de que Arcadia Henestrosa y Evaristo Villanueva tuvieran relación profesional alguna. Ninguna reunión institucional, ningún contrato, ninguna correspondencia oficial. Solo ese número en la memoria del teléfono, sin nombre, y un rastro de llamadas que se extendía durante catorce meses y se cortaba abruptamente en enero.

La bodega de Xochimilco era la más cercana.

Monterde llegó poco después de la una de la tarde. Era una nave industrial en una calle sin nombre oficial, identificada solo por un número en el mapa satelital que Fernanda le había enviado: un edificio de lámina galvanizada con portones de metal y una caseta de vigilancia donde un hombre de mediana edad dormitaba con la barbilla sobre el pecho. Monterde bajó del coche, se identificó y pidió hablar con el encargado.

El encargado tardó diez minutos en aparecer desde el interior de la nave. Era un hombre delgado de unos cuarenta años, con overol de trabajo y la expresión de quien está calculando qué sabe y qué conviene que sepa el interlocutor.

—¿El señor Villanueva está disponible? —preguntó Monterde.

—El señor Villanueva no viene por aquí. —El encargado lo miró con cautela—. ¿En qué le puedo ayudar?

—Necesito revisar el registro de acceso a las instalaciones. Específicamente visitas de los últimos dieciocho meses que no correspondan a clientes regulares de almacenamiento.

—Para eso necesito una orden.

—La orden llega mañana. —Monterde lo miró con la paciencia específica de quien sabe que la orden existe y que el encargado también lo sabe—. Mientras tanto, me gustaría que me mostrara las instalaciones de manera voluntaria. Eso simplifica el proceso para todos.

El encargado lo consideró durante cinco segundos.

—¿Qué es lo que está buscando?

—No lo sé todavía. Por eso quiero ver.

Lo que Monterde encontró en la tercera sección de la nave, detrás de un doble fondo de cajas de almacenamiento que el encargado abrió con la lentitud de quien sabe que no puede negarse pero intenta ganar tiempo, era un espacio de aproximadamente doce metros cuadrados, limpio, sin polvo, con una mesa de trabajo, una silla, un archivero metálico de cuatro cajones y una cámara de seguridad propia, independiente del sistema de la nave, instalada en el ángulo superior derecho.

El archivero estaba cerrado con llave.

La cámara de seguridad tenía una luz roja encendida.

Monterde sacó su teléfono y llamó a Fernanda.

—Necesito una orden de cateo para una bodega en Xochimilco —dijo—. Y necesito que alguien del área técnica venga a revisar una cámara de seguridad independiente que está grabando en este momento. —Hizo una pausa—. Y necesito que el juez la firme antes de las cuatro de la tarde.

—¿Qué encontraste?

—Todavía no sé lo que encontré. Pero alguien tuvo la precaución de instalar una cámara propia en un espacio que no debería existir dentro de una bodega

comercial. Eso me dice que lo que hay en ese archivero importa suficiente como para que alguien quisiera saber quién lo tocaba.

La orden llegó a las tres cuarenta. Fernanda llegó con ella y con un técnico del área forense a las cuatro y cuarto. El archivero se abrió con una ganzúa en tres minutos porque la cerradura era de las que se compraban en cualquier ferretería, lo cual era en sí mismo significativo: la seguridad del espacio no estaba en el archivero sino en la discreción de su existencia.

Adentro había cuatro carpetas de pasta dura, numeradas a mano con tinta negra del uno al cuatro, y una memoria USB en una bolsa de plástico sellada.

Monterde tomó la primera carpeta con guantes. La abrió.

Eran documentos. Contratos, correos impresos, estados de cuenta, actas de constitución de empresas, registros del Registro Público de la Propiedad. Todo organizado cronológicamente, con notas manuscritas al margen en la letra apretada y vertical que Monterde había visto en la credencial institucional de Arcadia: la letra de alguien que escribe rápido porque piensa más rápido de lo que la mano puede seguir.

La primera hoja era una carátula escrita a mano. Decía:

Contratos de seguridad nacional adjudicados por excepción, 2022-2024. Empresas relacionadas. Flujos. El Licenciado Cero.

Monterde leyó esa última línea dos veces.

—¿Qué es? —preguntó Fernanda desde detrás de él.

—Es el expediente que la mató —dijo Monterde.

Pasó las páginas con cuidado, sin leer todavía en profundidad, solo identificando la estructura. Tres empresas aparecían repetidamente: Seguridad Integral del Noroeste S.A. de C.V., Servicios Especializados Balam S.A. de C.V., y Consorcio de Protección Avanzada S.A. de C.V.

Las tres tenían en común que habían recibido contratos de adjudicación directa, sin licitación pública, por montos que sumaban en conjunto poco menos de dos mil millones de pesos en un periodo de dos años. Las tres tenían domicilios fiscales en Sinaloa.

Y las tres, según los documentos que Arcadia había recopilado con la paciencia de un arqueólogo, tenían el mismo apoderado legal registrado ante notario: un hombre cuyo nombre Monterde no reconoció de inmediato pero cuya firma aparecía en una docena de documentos, siempre con la misma rúbrica elaborada y siempre con el mismo sello notarial de la Ciudad de México.

En la cuarta carpeta, la más delgada, había un solo documento de cuatro páginas mecanografiadas. No tenía membrete, no tenía firma, no tenía fecha. Era un resumen narrativo, escrito en primera persona, de cómo Arcadia Henestrosa había comenzado a detectar las irregularidades, qué había buscado, qué había encontrado y a qué conclusiones había llegado.

La última oración del documento decía: *Si alguien lee esto y yo ya no estoy, que sepa que no fue un accidente.*

Monterde leyó esa oración y no dijo nada durante un momento.

Luego levantó la vista hacia Fernanda, que lo miraba desde el otro lado de la mesa.

—Fotocopia todo —dijo—. La memoria USB se va al área técnica esta noche. Las originales se custodian bajo protocolo de máxima reserva. Y nadie, absolutamente nadie fuera de los dos, sabe que esto existe hasta que yo lo diga.

—¿Ni Sandoval Meza?

—Especialmente Sandoval Meza.

Fernanda asintió sin preguntar más. Esa era otra de las cosas que Monterde valoraba en ella: sabía cuándo una instrucción era suficiente explicación.

Salieron de la bodega a las seis menos cuarto. Monterde le dejó el material a Fernanda con instrucciones precisas sobre la cadena de custodia y se fue directo al Centro Histórico con el tráfico de la tarde encima y la última oración del documento de Arcadia repitiéndose en algún lugar entre el estómago y el pecho.

Si alguien lee esto y yo ya no estoy, que sepa que no fue un accidente.

Arcadia lo había sabido. Había sabido que podía no salir de esto. Y aun así había construido el expediente, lo había guardado, lo había protegido con la cámara independiente y con la discreción de un intermediario de setenta y dos años cuyo nombre no aparecía en ningún registro oficial.

Eso no era cobardía disfrazada de prudencia. Era todo lo contrario.

Llegó al Café La Habana siete minutos antes de las siete. Pidió un café americano y se sentó en una mesa al fondo, de espaldas a la pared, con vista a la entrada. Era un hábito que tenía desde la academia y que nunca había necesitado justificar porque nunca había resultado innecesario.

Valentina Camarillo entró a las siete en punto. Era una mujer de treinta y seis años, estatura media, cabello oscuro recogido, ropa sin pretensiones y una manera de moverse que sugería que sabía exactamente cómo entrar a un lugar sin que pareciera que estaba buscando a alguien, aunque lo estuviera. Lo identificó en tres segundos y caminó directo hacia su mesa.

Se sentó sin esperar a que la invitara.

—Agente Monterde.

—Señorita Camarillo.

La mesera llegó y Valentina pidió un té sin levantar la vista del menú más de un segundo. Luego dejó el menú sobre la mesa y lo miró con la franqueza de alguien que no tiene tiempo que perder ni interés en fingir que lo tiene.

—Arcadia me llamó el cuatro de febrero —dijo—. Me dijo que tenía material sobre contratos de seguridad nacional adjudicados de manera irregular. Me

dijo que eran montos grandes, que involucraban a personas con nombres importantes y que necesitaba un medio de confianza para hacerlo público de manera que no pudiera ser ignorado. Le dije que nos reuniéramos. Canceló el once de febrero. Volvió a cancelar el veintiuno. El primero de marzo intenté llamarla yo. No contestó. Intenté tres veces más en los siguientes diez días. Nada.

Monterde escuchó sin interrumpir. Luego preguntó:

—¿Le dijo algo sobre el contenido del material? ¿Nombres, montos, empresas?

—Mencionó Sinaloa. Y mencionó un apodo. —Valentina lo miró—. El Licenciado Cero.

Monterde bebió su café.

—¿Lo había escuchado antes?

—No. Lo busqué. No encontré nada en ninguna fuente abierta. Lo cual, en este oficio, me dice que es alguien que ha tenido mucho cuidado de no existir en el registro público.

—¿Por qué me dice todo esto?

Valentina lo miró con una expresión que no era exactamente sorpresa pero sí algo parecido a la valoración de una pregunta inesperada.

—Porque Arcadia eligió no venir a mí al final. Eso significa que algo la asustó de la vía pública. Lo cual significa que la única vía que le quedaba era la institucional. —Hizo una pausa—. Y usted es la parte de la institución que el gobierno no controla. Todavía.

—¿Cómo sabe eso?

—Mi padre cubrió la transición española —dijo Valentina—. Me enseñó a distinguir entre los funcionarios que sirven al sistema y los que sirven a la ley. Son cosas distintas. Casi nunca coinciden. —Lo miró—. Usted es de los segundos. Eso lo sabe cualquiera que haya revisado su expediente.

Monterde no respondió a eso. Dejó el café y preguntó:

—¿Qué quiere a cambio de lo que me está dando?

—La historia. Cuando usted pueda darla. Con el tiempo suficiente para publicarla antes de que alguien más la archive.

—No puedo garantizarle eso.

—Lo sé. Pero puede garantizarme que si tiene que elegir entre publicarlo y enterrarlo, elige publicarlo.

Monterde la miró durante tres segundos.

—Eso no se lo puedo garantizar a usted —dijo—. Me lo garantizo a mí mismo. Que no es lo mismo, pero es lo único que tengo.

Valentina asintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba y exactamente la que necesitaba.

Afuera, la calle República de Cuba estaba llena de gente que volvía a casa después del trabajo, sin saber que en ese café, en una mesa al fondo, acababa de cerrarse un trato que no tenía testigos, no tenía papel y no tenía precio, y que era, por eso mismo, el único tipo de trato que en este país todavía valía algo.

CAPÍTULO 5

Presiones

FGR · Colonia Doctores · Ciudad de México, 19-20 de marzo de 2025

Sandoval Meza lo citó a las nueve de la mañana.

No era una invitación. Era una convocatoria, que es la forma en que en la Fiscalía General de la República se le dice a un subordinado que aparezca en el despacho de su superior sin la posibilidad real de declinar.

Monterde llegó a las nueve en punto, con su libreta bajo el brazo y sin el café que normalmente traía de la panadería de la esquina, porque esa mañana había llegado directo del estacionamiento sin pasar por ningún lado, y esa austeridad involuntaria le recordó que llevaba dos días comiendo mal y durmiendo menos.

La oficina de Sandoval olía igual que la primera vez: a café recalentado y a perfume de importación. Pero esa mañana había algo más, una tensión en el aire que Monterde identificó antes de sentarse como la tensión específica de quien ha recibido una presión de arriba y necesita transmitirla hacia abajo con la apariencia de que es una decisión propia.

Sandoval no le ofreció café.

—¿Cómo va la investigación? —preguntó.

Era una pregunta de apertura, no de información. Monterde la respondió con la economía de quien entiende que lo que diga en este momento va a ser usado de alguna manera que todavía no puede anticipar con precisión.

—Avanzando —dijo—. Hay varias líneas abiertas.

—¿Cuáles líneas.

—Los registros de seguridad de Palacio presentan irregularidades que estamos analizando. El informe forense oficial tiene inconsistencias que estamos documentando. Y hay algunos testigos que todavía no hemos podido localizar.

—¿Qué testigos.

—Personal técnico del sistema de videovigilancia de Palacio que renunció en los días posteriores al hecho.

Sandoval lo miró con la expresión de quien está escuchando lo que quería escuchar para poder responder lo que ya tenía preparado.

—Monterde. —Dejó pasar un segundo—. Hay información nueva que la Coordinación de Inteligencia ha puesto sobre la mesa. Información sobre

movimientos previos al deceso de la licenciada Henestrosa que apuntan hacia una operación organizada desde sectores de la oposición con acceso a personas cercanas a ella.

—¿Qué tipo de información?

—Comunicaciones interceptadas. Reuniones documentadas. El patrón es claro.

—¿Puedo ver esa información?

—Se canalizará a través de los conductos formales.

Monterde conocía lo que significaba esa frase. Significaba que la información no existía o que existía en una forma que no resistía el escrutinio, y que los conductos formales eran la manera de mantenerla en circulación sin exponerla a verificación.

—Licenciada —dijo—, con respeto, cualquier información sobre el caso tiene que entrar al expediente y tiene que ser verificable. Si hay comunicaciones interceptadas que señalan a alguien, las necesito en el expediente con su cadena de custodia completa para poder trabajar con ellas.

—Estoy hablándole de inteligencia operativa, no de prueba procesal.

—Yo investigo para producir prueba procesal. La inteligencia operativa sin verificación no me sirve.

Sandoval cerró la carpeta que tenía frente a ella con un movimiento que era menos el cierre de un documento que el cierre de una conversación que no estaba yendo como planeaba.

—Hay interés político en que este caso tenga resolución pronta —dijo—. No lo digo yo. Lo dice el fiscal. Lo dice la Presidencia.

—Entiendo.

—¿Entiende lo que implica?

Monterde la miró directamente.

—Entiendo que hay interés en que el caso se cierre rápido —dijo—. No entiendo por qué eso debería llevarnos a una conclusión que no está sostenida por la evidencia.

El silencio que siguió fue largo. Sandoval abrió la carpeta de nuevo, tomó una hoja y la empujó hacia él sobre el escritorio.

—Hay una plaza disponible en la coordinación regional de Monterrey —dijo—. Dirección de investigaciones especiales. Mejor categoría, mejor compensación, más autonomía operativa. Se abre formalmente en abril. El fiscal piensa en usted para ese puesto.

Monterde miró la hoja. Era una descripción de plaza con el sello de la Fiscalía y la firma del director de recursos humanos. Alguien la había preparado con anticipación, lo cual significaba que esta conversación había sido planeada y que la oferta de Monterrey no era espontánea sino parte de una secuencia.

La tomó. La leyó. La dejó sobre el escritorio.

—Agradezco la consideración —dijo—. Necesito tiempo para pensarlo.

—Por supuesto. —La voz de Sandoval recuperó algo de su temperatura habitual—. No hay prisa. Pero tampoco hay una cantidad ilimitada de tiempo para ninguna de las dos cosas.

Monterde recogió su libreta y se levantó.

En el pasillo, caminó hacia el área de análisis con el paso que tenía cuando necesitaba que nadie le hablara. Fernanda estaba en su escritorio, con audífonos puestos que se quitó en cuanto lo vio entrar.

—¿Cómo te fue?

—Me ofrecieron Monterrey.

Fernanda lo miró.

—¿Monterrey como en la ciudad o Monterrey como en cierra el caso?

—Las dos cosas al mismo tiempo.

—¿Y?

—Y nada. Cuéntame qué tienes.

Fernanda giró hacia su pantalla con la expresión de quien entiende que hay momentos en que la mejor respuesta es seguir trabajando.

—La memoria USB del archivo de Xochimilco. El área técnica trabajó en ella anoche. Estaba cifrada con una clave que tardaron cuatro horas en resolver, lo cual me dice que Arcadia sabía lo que estaba haciendo cuando la protegió. Adentro hay tres cosas. Primera: una copia digital de todo el material que estaba en las carpetas físicas, organizado de la misma manera. Segunda: un registro de comunicaciones, correos y mensajes de texto, entre Arcadia y distintos interlocutores a lo largo de dieciocho meses. Tercera: un archivo de audio.

—¿Un audio?

—Una grabación. Cuarenta y dos minutos. Calidad razonable, hecha probablemente con el teléfono. Dos voces: Arcadia y un hombre. La fecha del archivo es el veintinueve de enero de este año.

—¿Lo escuchaste?

—Todo. —Fernanda hizo una pausa que era poco habitual en ella—. Monterde, el hombre en esa grabación conoce el mecanismo completo. No como alguien que lo investigó desde afuera. Como alguien que lo vivió desde adentro. Habla de los contratos, de las empresas, de los flujos de dinero, con el detalle de quien participó. Y en un momento, hacia el final de la grabación, dice algo que me hizo escuchar dos veces para asegurarme de que había entendido bien.

—¿Qué dice?

—Dice: el Licenciado Cero no está solo en esto. Tiene protección en la Fiscalía. El silencio que siguió fue de los que cambian la temperatura de una habitación.

Monterde se sentó lentamente.

—¿Puedes identificar la voz del hombre?

—Todavía no. El área técnica está trabajando en eso. Puedo decirte que es un hombre de entre cincuenta y sesenta años, con acento del norte, probablemente sinaloense o sonoreense. Habla con la familiaridad de alguien que conoce a Arcadia desde hace tiempo, no con la distancia de una fuente nueva.

—¿Dice su nombre en algún momento de la grabación?

—No. Y Arcadia tampoco lo llama por ningún nombre. Lo trata de usted durante toda la conversación.

Monterde abrió su libreta y escribió: grabación 29 enero. Hombre 50-60, norte. Participante directo. Protección en Fiscalía.

Subrayó la última línea dos veces.

—Nadie más tiene acceso a ese audio —dijo—. Ni el área técnica.

—Le dije al técnico que era material bajo reserva máxima y que cualquier copia o transmisión sin mi autorización era violación de protocolo. Me miró como si fuera a reportarme. —Pausa—. No creo que me reporte.

—Si lo hace, lo sabré antes de que llegue a Sandoval. —Monterde se levantó—. ¿Hay algo en el registro de comunicaciones de la USB que identifique al hombre de la grabación?

—Hay un número de teléfono que aparece con frecuencia en los mensajes de texto de Arcadia entre octubre del año pasado y enero de este año. El número no está registrado a nombre de nadie en los sistemas del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Es un número de tarjeta SIM de prepago, activado en Culiacán en septiembre del año pasado y dado de baja en febrero de este año.

—¿Dado de baja o abandonado?

—Formalmente dado de baja. Lo cual requiere un trámite. No es lo mismo que simplemente dejar de usarlo.

Monterde miró el techo un momento.

—Alguien desactivó el número después de hablar con Arcadia en enero y antes de que ella muriera en marzo. Eso es una limpieza.

—Sí.

—¿Hay forma de rastrear dónde se activó físicamente la tarjeta SIM? ¿Qué establecimiento comercial la vendió?

—Estoy en eso. Tengo el número de serie del chip. Los distribuidores de Telcel en Culiacán son manejables como universo de búsqueda. Dame un día.

Monterde asintió. Se quedó de pie en medio de la sala con la libreta en la mano, mirando sin ver el mapa que Fernanda había fijado en la pared con alfileres de colores, un mapa de la Ciudad de México con puntos marcados en Xochimilco, Palacio Nacional, Iztapalapa, Narvarte y el Centro Histórico.

—Hay protección en la Fiscalía —dijo, no como pregunta sino como quien termina de decir en voz alta algo que ha estado pensando en silencio.

—Eso dice el hombre en la grabación.

—¿Sandoval?

Fernanda lo miró.

—No lo sé. Pero alguien en este edificio sabía lo suficiente sobre el expediente para filtrarlo al podcast de Camarillo antes de que nosotros tuviéramos acceso completo al caso. Eso no lo hace alguien de fuera.

Era un razonamiento que Monterde ya había hecho. Solo que ahora tenía una grabación de cuarenta y dos minutos que lo confirmaba desde la perspectiva de alguien que había estado adentro del mecanismo.

—¿Qué hacemos con el audio? —preguntó Fernanda.

—Por ahora, nada. Lo guardamos, lo protegemos y seguimos construyendo el expediente alrededor de él. Cuando llegue el momento de usarlo, tiene que ser en condiciones que no permitan que lo descalifiquen por la forma en que fue obtenido o custodiado.

—¿Y Sandoval?

—Sandoval sigue recibiendo los reportes de avance que le corresponde recibir. Sin el archivo de Xochimilco. Sin el audio. Sin los hermanos Almeida. Le damos lo suficiente para que crea que la investigación va en la dirección que ella quiere, y lo suficiente para que no pueda acusarnos de ocultarle información cuando llegue el momento de rendir cuentas.

Fernanda lo miró con la expresión de alguien que está entendiendo en tiempo real las implicaciones de lo que escucha.

—Estamos investigando dentro de la institución que también es parte del caso —dijo.

—Sí.

—Eso es complicado.

—Sí —dijo Monterde—. Pero es lo que hay.

Trabajaron hasta las ocho de la noche. Monterde salió del edificio con la libreta llena de notas, el expediente duplicado en una memoria USB que guardaba en el bolsillo interior del saco, y el peso específico de haber pasado el día construyendo una investigación que su propia institución podría usar para destruirlo si llegaba a saber lo que contenía.

Fue a recoger a Griselda a casa de la señora Amparo. La perra lo recibió con la misma intensidad de siempre, sin distinción entre los días buenos y los días como ese. Eso era lo que Monterde más valoraba de ella: que no calibraba.

Calentó frijoles, hizo unos huevos, comió en la mesa de la cocina con Griselda dormida bajo la silla. Luego se sirvió un mezcal y fue a sentarse al sillón.

Llevaba cuatro días con el caso. Tenía un expediente físico en una bodega de Xochimilco bajo custodia de la Fiscalía. Tenía un audio de cuarenta y dos

minutos con una voz sin nombre que confirmaba la existencia del Licenciado Cero y su protección dentro de la institución donde él trabajaba.

Tenía tres empresas sinaloenses, dos hermanos desaparecidos, un médico de cabecera con una historia sobre un brazo vendado, un patólogo que había firmado un informe que nadie quería ver y una periodista con quien había hecho un trato sin papel ni precio en el Café La Habana.

Y tenía una oferta de trabajo en Monterrey que era, en el lenguaje del sistema, una última oportunidad antes de que la última oportunidad se convirtiera en otra cosa.

Bebió el mezcal despacio. Afuera, en la calle Moctezuma, pasaba el tráfico de la noche con esa constancia sin tregua que tienen las ciudades grandes, ese ruido de fondo que uno deja de escuchar hasta que de repente lo escucha y recuerda que el mundo sigue funcionando aunque uno esté sentado en un sillón tratando de entender quién mató a una mujer que supo demasiado.

Griselda se movió bajo la silla y volvió a quedarse quieta.

Monterde cerró los ojos un momento. Los abrió.

Se levantó, fue al baño, se lavó los dientes y se acostó con la ropa puesta porque en los últimos cuatro días había desarrollado el hábito de no desvestirse del todo, como si el caso pudiera llamarlo en cualquier momento y él necesitara estar listo.

Se durmió en diez minutos.

Lo despertó el teléfono a la una y cuarto de la mañana. Era un número desconocido. Lo dejó sonar. Paró. Sonó de nuevo. Lo tomó.

—Monterde —dijo.

Silencio. Luego una respiración. Luego una voz que era la de una mujer mayor, baja, con algo que no era exactamente miedo pero sí era urgencia.

—Soy la señora Almeida. La mamá de Rodrigo. —Pausa—. Me llamó hace una hora. Desde un teléfono que no conozco.

Monterde se sentó en la cama.

—¿Dónde está?

—No me dijo. Me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Pero antes de colgar me dijo algo que no entendí. Me dijo que le dijera al agente que fue a verme que el número del nodo era el siete-C, que eso era importante. —Pausa—. ¿Usted sabe qué significa eso?

Monterde ya estaba de pie, buscando sus zapatos en la oscuridad.

—Sí señora —dijo—. ¿Dijo algo más?

—Solo eso. Y que cuidara a su hermano.

—¿A Gustavo?

La señora Almeida tardó un segundo.

—No. Rodrigo no tiene hermano. Rodrigo es hijo único.

Monterde bajó el teléfono despacio.

El nodo 7-C era el que Rodrigo había señalado en su informe como fuente de la falla técnica. Que Rodrigo lo mencionara ahora, en una llamada clandestina desde un número desconocido, después de días de silencio, significaba que tenía algo que decir sobre ese nodo. Algo que no había podido decir cuando firmó el informe. Algo que quizás ahora, desde la distancia y desde el miedo, estaba tratando de comunicar en el único código que podía usar sin exponerse.

Y el hermano que no existía.

Rodrigo Almeida era hijo único. La señora lo había dicho con la naturalidad de quien nombra un hecho elemental. Pero alguien, en algún momento de la investigación, había construido la figura del hermano mayor. El hermano con acceso de nivel tres. El hermano en la Coordinación de Seguridad Digital.

Monterde se quedó de pie en la oscuridad de su departamento con el teléfono en la mano y una certeza que se instalaba en el centro del pecho con la frialdad de las cosas que uno no quiere entender pero que ya entendió.

Gustavo Almeida Bravo no era el hermano de Rodrigo.

Gustavo Almeida Bravo, quienquiera que fuese, había existido en el expediente porque alguien lo había puesto ahí. En los registros de personal de Palacio. En la base de datos del IMSS. En el domicilio de la colonia Narvarte donde nadie abría porque nadie vivía.

Alguien había construido una identidad para crear un sospechoso que señalara en la dirección correcta el tiempo suficiente para que la investigación creyera que avanzaba mientras en realidad giraba sobre sí misma.

Monterde se puso los zapatos, tomó el saco y salió al pasillo.

Iba a necesitar verificar cada dato sobre Gustavo Almeida desde el principio.

Y mientras lo hacía, iba a tener que aceptar que llevaba cuatro días investigando en parte dentro de un escenario que alguien había construido para él.

En el pasillo del edificio, esperando el elevador, pensó en la señora Almeida con su mandil de cocina y su trenza blanca, abriendo la puerta sin saber que la respuesta que le daba sobre el hermano que no existía era la pieza que lo cambiaba todo.

Las madres, pensó Monterde, siempre saben exactamente cuántos hijos tienen.

Era la única certeza de la noche.

CAPÍTULO 6

La periodista

FGR · Colonia Narvarte · Centro Histórico · Ciudad de México, 20-21 de marzo de 2025

A las dos de la mañana, Monterde estaba sentado frente a la pantalla de su computadora en la sala de su departamento con Griselda dormida a sus pies y tres ventanas abiertas en el navegador: el sistema de registros del IMSS, la base de datos de personal de Palacio Nacional a la que tenía acceso mediante su credencial de la Fiscalía, y el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México.

Gustavo Almeida Bravo, según los registros del IMSS, era dado de alta como trabajador formal en la Coordinación de Seguridad Digital de Palacio Nacional desde hacía seis años. Tenía número de seguridad social, historial de cotizaciones, registro de derechohabientes. En la base de datos de personal de Palacio aparecía con fotografía, RFC, domicilio en la colonia Narvarte y el puesto de analista senior. Todo en orden. Todo coherente.

Demasiado coherente.

Monterde abrió el Registro Público de la Propiedad y buscó el domicilio de la colonia Narvarte. El inmueble aparecía a nombre de una empresa: Inmobiliaria Servicios del Centro S.A. de C.V. La buscó en el Registro Mercantil. Constituida hacía cuatro años. Sin actividad fiscal reciente. Socios fundadores: dos nombres que no le decían nada todavía.

Buscó el RFC de Gustavo Almeida en el sistema del SAT con sus credenciales de acceso institucional. El RFC existía. Había declaraciones fiscales de los últimos cinco años. Ingresos consistentes con el puesto de analista senior en el sector público.

Se recargó en la silla.

Una identidad falsa construida con ese nivel de detalle no era el trabajo de una tarde. Era el trabajo de meses, posiblemente de años. Requería acceso a los sistemas del IMSS, del SAT, del Registro Público, de la base de datos de personal de Palacio. Requería a alguien que supiera cómo funcionaban esos sistemas desde adentro y que tuviera la paciencia y los recursos para construir una persona que existiera en todos los registros correctos sin existir en ninguna realidad verificable.

Y requería un propósito. Una identidad falsa de ese calibre no se construye para usarla una sola vez. Se construye como infraestructura. Como una herramienta que puede activarse cuando se necesite un nombre en un registro, un responsable en un expediente, un eslabón en una cadena que señale en la dirección correcta.

Monterde escribió en su libreta: Gustavo Almeida = identidad construida. ¿Cuándo. ¿Para qué caso anterior. ¿Quién tiene acceso a esos sistemas simultáneamente.

Esa última pregunta era la que importaba. El universo de personas capaces de construir una identidad en cuatro sistemas federales distintos con coherencia suficiente para resistir una revisión de primer nivel era pequeño. No era un individuo con habilidades excepcionales. Era una operación con recursos institucionales.

Cerró la computadora a las tres y cuarto y se acostó. Durmió cuatro horas.

A las siete y media estaba en la División de análisis forense digital con dos cafés de la panadería y la libreta abierta en la página de la noche anterior.

Fernanda llegó a las ocho menos diez, lo vio y evaluó la situación en dos segundos.

—Cuéntame —dijo.

Monterde le contó. La llamada de la señora Almeida. El hermano que no existía. La verificación nocturna. La identidad construida en cuatro sistemas.

Fernanda lo escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, giró hacia su pantalla y empezó a teclear antes de decir nada.

—Dame veinte minutos —dijo.

Monterde bebió su café y esperó. Desde donde estaba sentado podía ver las tres pantallas de Fernanda llenarse de ventanas, tablas, registros. La vio moverse entre sistemas con la fluidez de alguien que no piensa en las herramientas sino directamente en la información que está buscando.

A los diecisiete minutos se detuvo.

—La fotografía —dijo.

—¿Qué fotografía?

—La fotografía de la credencial de Gustavo Almeida en la base de datos de personal de Palacio. —Fernanda giró una de sus pantallas hacia él—. La busqué en el sistema de reconocimiento facial del Instituto Nacional Electoral. Cada mexicano que ha tramitado credencial de elector tiene su fotografía en esa base. El sistema cruza rostros. Si Gustavo Almeida existiera como persona real, su fotografía debería coincidir con alguien en esa base.

—¿Y?

—No coincide con nadie. La fotografía de la credencial de Palacio es una fotografía de una persona que no tiene registro en el INE, lo cual significa que esa persona nunca tramitó credencial de elector, lo cual en México, para un adulto de cuarenta y dos años que nació aquí, trabaja aquí y vive aquí, es estadísticamente imposible. —Hizo una pausa—. O la fotografía es de alguien que existe pero bajo otro nombre y otra identidad, o es una fotografía generada.

—¿Generada cómo.

—Inteligencia artificial. Hay herramientas que producen rostros fotorrealistas de personas que no existen. Ningún rasgo corresponde a nadie real. El sistema de reconocimiento facial no puede encontrar una coincidencia porque no hay nadie a quien encontrar.

Monterde miró la fotografía en la pantalla. Un hombre de aspecto ordinario, cabello oscuro con algunas canas, mirada directa, expresión neutra. El tipo de cara que en una oficina pública no llamaría la atención de nadie.

Una cara que no existía.

—¿Puedes certificar esto? ¿Con metodología que resista un peritaje?

—Necesito dos días y acceso a un software de análisis de metadatos de imagen que no tenemos en la División. Puedo solicitarlo al área técnica sin decir para qué caso es.

—Hazlo. —Monterde se levantó—. Y mientras tanto, necesito que busques en los registros históricos de la base de datos de personal de Palacio cuándo fue dada de alta esta identidad. Quiero la fecha exacta de creación del registro y, si es posible, desde qué terminal o usuario se creó.

—Eso puede haber sido borrado.

—Puede. Pero los sistemas federales tienen capas de respaldo que a veces conservan metadatos que nadie recordó limpiar. Busca.

Salió de la División a las nueve y media. Tenía una cita que no estaba en ninguna agenda oficial.

La noche anterior, después de la llamada de la señora Almeida, había enviado un mensaje a Valentina Camarillo con una sola línea: necesito verla hoy, misma hora, mismo lugar. La respuesta había llegado en tres minutos: ahí estaré.

Pero antes del Café La Habana tenía que hacer algo que había estado posponiendo desde la mañana del día anterior, cuando Fernanda le contó lo del audio.

Fue al domicilio de la colonia Narvarte.

Era un edificio de cuatro pisos en la calle Laredo, de los años sesenta, con interfón en la entrada y una maceta con un árbol pequeño en el vestíbulo que alguien regaba con regularidad. Tocó el interfón del departamento 3-A, que era el que correspondía al domicilio registrado de Gustavo Almeida. Nadie respondió. Tocó al 3-B. Una voz de hombre preguntó quién era. Monterde se identificó.

Bajó el vecino del 3-B: un hombre de unos cincuenta años, ingeniero según sus propias palabras, que vivía en ese edificio desde hacía ocho años.

—El 3-A —dijo Monterde—. ¿Conoce al vecino?

El hombre frunció el ceño.

—Ese departamento lleva dos años vacío. Lo usa de vez en cuando una empresa para reuniones, creo. Pero no vive nadie ahí. Nunca he visto a nadie entrar con maletas, nunca he escuchado nada en las noches. —Lo miró—. ¿Pasó algo?

—Verificación de rutina —dijo Monterde—. ¿Recuerda la última vez que vio actividad en ese departamento?

El hombre pensó.

—Hace tres o cuatro semanas. Llegaron dos personas en la tarde, estuvieron tal vez una hora y se fueron. No los vi bien. Los escuché desde el pasillo.

—¿Hombres, mujeres?

—Dos hombres. Eso es todo lo que puedo decirle.

Monterde le dio las gracias, le dejó su tarjeta y bajó a la calle.

Un departamento que nadie habitaba pero que aparecía como domicilio oficial de una identidad construida, visitado por dos hombres tres o cuatro semanas antes de que esa identidad fuera activada como pieza en el expediente del caso Henestrosa. La línea de tiempo encajaba con una precisión que ya no podía atribuirse a la casualidad.

Caminó hasta su coche pensando en el tamaño de lo que estaba viendo. No era un crimen de Estado en el sentido dramático que la frase suele implicar. Era algo más banal y por eso más sólido: era una operación de mantenimiento. Alguien había detectado que Arcadia Henestrosa era un riesgo para un mecanismo que llevaba años funcionando, y había activado los recursos necesarios para neutralizarla y para asegurarse de que la investigación posterior no llegara a ningún lugar inconveniente. La identidad de Gustavo Almeida era uno de esos recursos. El informe de falla técnica de Rodrigo Almeida era otro. La instrucción de Sandoval Meza de orientar la investigación hacia la oposición era otro.

Cada pieza había sido diseñada para consumir tiempo y atención de la investigación sin producir resultados reales. Y habrían funcionado si Rodrigo Almeida no hubiera llamado a su madre desde un teléfono desconocido para decirle algo que no podía decir de otra manera.

Las madres, había pensado Monterde la noche anterior. Las madres siempre saben cuántos hijos tienen.

Llegó al Café La Habana a las siete en punto. Valentina Camarillo ya estaba en la mesa del fondo, la misma que habían usado la noche anterior, con un café y una libreta abierta frente a ella. Esta vez no fingió que no lo estaba esperando.

—Encontró algo —dijo en cuanto Monterde se sentó. No era una pregunta.

—Sí. Y necesito que usted me cuente algo con más detalle de lo que me contó ayer.

—Pregunte.

—Cuando Arcadia la contactó en febrero. ¿Cómo lo hizo? ¿Teléfono, correo, mensaje?

—Mensaje de texto. Desde un número que no tenía registrado. Me dijo quién era, me dijo que tenía material importante y me propuso una fecha para reunirnos.

—¿Conserva el mensaje?

—Lo imprimí cuando empezó todo esto. —Valentina abrió su libreta y sacó una hoja doblada. La dejó sobre la mesa—. Por si acaso.

Monterde la tomó. El mensaje estaba transcrito a mano con la fecha y la hora: 4 de febrero, 11:23 de la mañana. El número de origen era de diez dígitos con clave de área 667.

Culiacán.

El mismo código de área que la llamada de la caseta telefónica de República de Uruguay en la madrugada del catorce de marzo. El mismo que el número de prepago que había estado en contacto con Arcadia durante cuatro meses y que fue dado de baja formalmente en febrero.

—¿Me permite fotografiar esto? —preguntó.

—Puede quedarse con la hoja. Tengo copia.

Monterde dobló la hoja y la guardó.

—Ahora necesito contarle algo —dijo.

Valentina cerró su libreta y lo miró con la atención de quien entiende que lo que viene es importante.

Monterde le contó lo de Gustavo Almeida. La identidad construida. El departamento vacío. La llamada de la señora Almeida sobre el hijo único. No le contó el audio de cuarenta y dos minutos. No todavía.

Valentina escuchó sin interrumpir, como hacía siempre, y cuando Monterde terminó se quedó un momento en silencio antes de hablar.

—Mi padre me contó algo cuando yo tenía dieciséis años —dijo—. Había cubierto los últimos años del franquismo y la transición española. Me dijo que lo que más le había costado entender, cuando era joven reportero, era la diferencia entre un régimen corrupto y un régimen que ha institucionalizado la corrupción. Me dijo que la diferencia no estaba en la magnitud sino en la infraestructura. Un régimen corrupto tiene funcionarios que roban. Un régimen que ha institucionalizado la corrupción tiene sistemas diseñados para que el robo sea el funcionamiento normal, no la excepción. —Hizo una pausa—. Lo que usted me está describiendo no son funcionarios que cometieron un crimen. Es una infraestructura que produjo un crimen como parte de su operación regular.

Monterde la miró.

—¿Su padre sigue vivo?

—Murió hace seis años. —Sin pausa, sin inflexión—. ¿Por qué lo pregunta?

—Porque lo que acaba de decir es la descripción más precisa de lo que estoy viendo que he escuchado en cinco días.

Valentina asintió levemente.

—¿Qué necesita de mí? —preguntó.

—Por ahora, nada que no me haya dado ya. Pero necesito saber algo: si en algún momento le digo que tiene que esperar para publicar, ¿puede esperar?

—Depende de cuánto.

—No lo sé todavía.

—Entonces la respuesta es: si confío en que la espera tiene un propósito, sí. Si siento que me está usando para enterrar el caso, no.

—¿Cómo va a saber la diferencia?

Valentina lo miró directamente.

—Porque me va a decir la verdad aunque no pueda decirme todo. Hay una diferencia entre no poder hablar y no querer hablar. Esa diferencia se nota.

Monterde pensó en eso.

—De acuerdo —dijo—. Y si en algún momento yo desaparezco del caso, si me transfieren o me suspenden o simplemente dejo de tener acceso al expediente, necesito que usted sepa que eso no es una decisión mía.

Valentina lo miró con algo que no era exactamente alarma pero sí era reconocimiento de una posibilidad real.

—¿Tan cerca está el caso de algo que no quieren que se sepa?

—Más cerca de lo que estaba ayer —dijo Monterde.

Salió del Café La Habana a las ocho y cuarto. La calle República de Cuba estaba menos concurrida que la noche anterior, con ese silencio particular que tienen las calles del Centro Histórico cuando el turismo y el comercio se retiran y queda solo la ciudad real debajo.

Caminó media cuadra y se detuvo.

Frente a su coche, estacionado en doble fila con las intermitentes encendidas, había una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Dos policías uniformados estaban junto al Tsuru. Uno de ellos lo vio venir y le hizo una señal.

Monterde se acercó con la credencial ya en la mano.

—¿Algún problema? —preguntó.

El policía tomó la credencial, la miró y se la devolvió.

—Su vehículo estaba abierto, agente. —Le extendió una hoja doblada—. Encontramos esto en el asiento del conductor.

Monterde tomó la hoja. La desdobló.

Era una hoja blanca tamaño carta, sin membrete, con una sola línea escrita a computadora en el centro:

Lo que tiene en el bolsillo sabe demasiado. Entréguelo y esto termina.

Monterde dobló la hoja con cuidado, la guardó en el bolsillo interior del saco, junto a la memoria USB con el duplicado del expediente, y miró a los dos policías.

—¿Vieron quién dejó esto?

—Cuando llegamos ya estaba —dijo el policía—. Un transeúnte nos avisó que el coche estaba abierto.

—¿El transeúnte dio sus datos?

—Se fue antes de que pudiéramos pedirlos.

Monterde asintió. Les agradeció, subió al Tsuru y arrancó.

Alguien sabía que tenía la memoria USB. Alguien lo había seguido desde la Fiscalía o desde la bodega de Xochimilco o desde este mismo café, y había tenido el tiempo y la confianza suficientes para abrir su coche, dejar una nota y retirarse sin que nadie lo viera con claridad.

Eso significaba dos cosas.

Primera: que la operación que estaba investigando tenía recursos de vigilancia activos sobre él en tiempo real. No era una advertencia improvisada. Era una demostración de capacidad.

Segunda: que todavía no querían eliminarlo. Una nota era una negociación. Si hubieran querido eliminarlo, no habrían dejado una nota. Habrían hecho lo que le hicieron a Arcadia: una solución limpia, un informe de causa natural y quince minutos de oscuridad en los registros.

Lo que le decía la nota era que tenían algo que perder si él seguía adelante. Y lo que le decía la forma de la nota era que creían que él tenía algo que perder también.

Manejó hacia la colonia Doctores por rutas que cambiaba cada tres cuadras, un hábito que había desarrollado en casos anteriores y que nunca había necesitado tanto como en este momento.

Llegó a su edificio, estacionó, subió. Antes de entrar al departamento revisó la puerta: sin marcas, sin signos de haber sido forzada. Entró. Todo en su lugar.

Fue directamente al baño, levantó el panel de la pared detrás del espejo y sacó la segunda copia de la memoria USB que había preparado la tarde anterior sin decírselo a nadie, ni siquiera a Fernanda. La miró un momento. La guardó de nuevo.

Luego tomó el teléfono y marcó un número que no había usado en dos años.

Era el número de un notario público en la colonia Roma, un hombre que había sido testigo en un caso de Monterde cuatro años atrás y que desde entonces le debía un favor que ninguno de los dos había nombrado pero que ambos sabían que existía.

El notario contestó al cuarto tono, con la voz rasposa de quien acaba de despertar.

—Soy Monterde —dijo—. Necesito verlo mañana temprano. Es urgente y es confidencial.

Silencio breve.

—¿Tan urgente como para ser a las siete de la mañana?

—Más —dijo Monterde.

—A las siete entonces —dijo el notario, y colgó sin preguntar más.

Monterde dejó el teléfono sobre la mesa, fue a recoger a Griselda de casa de la señora Amparo, que abrió la puerta en bata con la expresión de quien ya está acostumbrado a horarios irregulares, y volvió al departamento.

Se sentó en el sillón con la perra a sus pies y la nota doblada sobre la mesa de centro.

Lo que tiene en el bolsillo sabe demasiado. Entréguelo y esto termina.

No iba a entregarlo. Eso lo había decidido en el momento en que leyó la primera línea, antes de doblar el papel, antes de agradecerles a los policías, antes de arrancar el coche. No porque fuera valiente, que no era la palabra correcta para lo que sentía, sino porque había llegado al punto en que entregar era equivalente a traicionar a Arcadia, a Rebeca, a todo lo que él había decidido ser cuando entró a la Fiscalía con veintiséis años y la convicción de que las instituciones podían ser honestas si uno lo era suficientemente.

Ya no creía eso. Pero seguía creyendo en lo otro: en la cadena de custodia, en el testimonio verificable, en la prueba que resiste el contrainterrogatorio.

Griselda levantó la cabeza, lo miró un segundo y volvió a apoyarla en el suelo.

Mañana, a las siete de la mañana, iba a sentarse frente a un notario y a construir la única protección que el sistema no podía desactivar desde adentro: dejar el expediente en manos de alguien que no dependía de la Fiscalía para existir.

Eso no era renunciar. Era lo contrario.

Era asegurarse de que aunque lo movieran, aunque lo transfirieran, aunque lo suspendieran, lo que había encontrado siguiera existiendo en algún lugar donde el sistema no pudiera apagarlo con un interruptor.

Igual que los quince minutos de la cámara 23.

Solo que esta vez la oscuridad iba a durar lo que él decidiera, no lo que decidieran ellos.

CAPÍTULO 7

El general retirado

Colonia Roma · Cuernavaca · Ciudad de México, 21 de marzo de 2025

El despacho del notario Benjamín Cuéllar Montoya olía a madera vieja y a café recién hecho, que era la combinación más honesta que Monterde había oído en días. Cuéllar era un hombre de sesenta y cuatro años, corpulento, con las manos de quien ha pasado décadas firmando documentos y la expresión de quien ha aprendido que la discreción no es una virtud sino un requisito de supervivencia profesional. Lo había conocido cuatro años atrás en un caso de fraude notarial donde Cuéllar había sido el único funcionario del gremio dispuesto a testificar contra un colega con conexiones políticas. Ese tipo de disposición, en México, no se olvida.

Monterde llegó a las siete en punto. Cuéllar ya tenía el café servido.

Le explicó lo que necesitaba en doce minutos, sin rodeos y sin los eufemismos que habría usado con cualquier otra persona. Cuéllar escuchó con los codos

sobre el escritorio y los dedos entrelazados, sin interrumpir, sin cambiar la expresión.

Cuando Monterde terminó, el notario se quedó un momento en silencio.

—Lo que me está pidiendo —dijo— es que custodie un expediente bajo instrucciones de apertura condicionada. Si usted no se presenta en persona en cuarenta y ocho horas, o si se presenta bajo evidente coacción, el sobre se abre y el contenido se remite a las instancias que usted indique.

—Exactamente.

—¿Cuántas instancias?

—Tres. Se las voy a dar por escrito. Dos son judiciales. Una es periodística.

Cuéllar asintió lentamente.

—Esto no es un servicio notarial estándar.

—No. Es un favor.

—Sí. —El notario extendió la mano—. Deme el sobre.

Monterde sacó del interior de su saco un sobre manila grueso, sellado con cinta adhesiva y firmado sobre el sello en tinta roja para evidenciar cualquier apertura. Se lo entregó. Cuéllar lo colocó sobre el escritorio, tomó un sello y lo estampó en el dorso con la fecha, la hora y su firma.

—Cuarenta y ocho horas —dijo—. Y si no aparece, espero que lo que hay adentro valga el problema que me va a causar.

—Vale más —dijo Monterde.

Salió del despacho a las siete y cuarenta. En la calle Roma la mañana estaba limpia, con esa luz de marzo que en la Ciudad de México tiene una calidad particular, como si el aire tuviera menos capas que en cualquier otra estación. Caminó hasta el Tsuru, revisó el asiento del conductor antes de subir, y arrancó hacia el sur.

Tenía una cita en Cuernavaca.

La había conseguido Fernanda la tarde anterior, después de tres llamadas y de invocar el nombre de la Fiscalía con una firmeza que a Monterde le había parecido, escuchándola desde el otro lado del escritorio, la firmeza de alguien que ya no tiene paciencia para los protocolos que protegen a las personas equivocadas. El general retirado Ezequiel Bautista Noriega había aceptado recibirlo a las once de la mañana en su domicilio particular en la colonia Lomas de Cortés, con la condición, comunicada a través de un asistente, de que la conversación fuera informal y no quedara registrada como declaración oficial.

Monterde había dicho que sí. Las condiciones del general le importaban menos que lo que el general pudiera decirle.

La autopista México-Cuernavaca a esa hora de la mañana estaba razonablemente despejada. Monterde manejó con la radio apagada, pensando en lo que sabía del general.

Ezequiel Bautista Noriega había tenido una carrera militar de treinta y ocho años que culminó en el rango de general de brigada y en el cargo de coordinador de seguridad de Palacio Nacional, puesto que ocupó durante tres años y del que fue relevado, con ascenso a general de división y pensión completa, veinticuatro meses atrás. El relevo había sido presentado públicamente como una transición por edad, pero en los círculos de seguridad que Monterde frecuentaba se decía otra cosa: que Bautista Noriega había tenido un conflicto de fondo con la nueva coordinación de seguridad de la Presidencia sobre los protocolos de acceso al Palacio, y que había perdido ese conflicto porque la nueva coordinación tenía más respaldo político que él.

Un hombre que pierde una disputa de poder dentro de las instituciones militares mexicanas y termina retirado en Cuernavaca puede ser dos cosas: alguien que quiere olvidar, o alguien que espera el momento de recordar. Monterde iba a descubrir cuál de las dos era Bautista Noriega.

La casa era grande, de un solo piso, con jardín perimetral y una reja de hierro forjado que sugería que el general había pasado suficiente tiempo en instalaciones con perímetros controlados como para replicar esa lógica en su vida civil. El asistente, un hombre joven de uniforme informal, lo hizo pasar a una sala con muebles de madera oscura, trofeos de cacería en las paredes y una fotografía enmarcada en la que un Bautista Noriega de unos cuarenta años estrechaba la mano de un presidente que ya no estaba en el poder.

El general llegó cinco minutos después.

Tenía setenta y un años, pero los llevaba con la postura de alguien que nunca se permitió encorvarse porque la postura es también una forma de mando. Cabello blanco, corto, bigote del mismo color, manos que al estrechar las de Monterde comunicaban que todavía había fuerza ahí aunque ya no hubiera necesidad de demostrarla.

Se sentaron. El asistente trajo café sin que nadie lo pidiera y se retiró.

—Agente Monterde —dijo Bautista Noriega—. Me dijeron que era de la Fiscalía.

—Así es, general.

—¿Y esto es informal.

—Completamente. No hay grabación, no hay acta, no hay nada que lo comprometa a usted de ninguna manera.

El general lo estudió un momento.

—¿Qué quiere saber?

—Quiero entender cómo funciona el sistema de seguridad de Palacio Nacional. Específicamente el sistema de videovigilancia.

—Eso está en los manuales técnicos.

—Los manuales técnicos me dicen cómo debería funcionar. Usted me puede decir cómo funciona de verdad.

El general tomó su café. Lo sostuvo un momento antes de beber.

—¿Esto es por la muerte de la licenciada Henestrosa?

—Sí.

—¿Y la versión oficial no le convence.

—La versión oficial tiene quince minutos que no puede explicar.

Bautista Noriega dejó la taza sobre la mesa con un movimiento deliberadamente tranquilo, como quien hace tiempo mientras decide.

—Cuando yo llegué a la coordinación —dijo finalmente—, el sistema de videovigilancia de Palacio tenía tres capas de redundancia. Cada cámara transmitía a dos servidores distintos: uno local, en el mismo edificio, y uno remoto, en una instalación de respaldo en la Secretaría de Gobernación. La idea era que si el servidor local fallaba o era intervenido, el servidor remoto conservaba la copia íntegra de todo lo grabado.

—¿Y en el caso Henestrosa hay copia en el servidor remoto?

—Esa es la pregunta correcta. —El general cruzó los brazos—. Cuando me incorporé a la coordinación, la primera cosa que hice fue verificar que las dos capas funcionaran. Funcionaban. Cuando me fui, seguían funcionando. Pero en los dieciocho meses que medían entre mi salida y la muerte de la licenciada Henestrosa, la nueva coordinación hizo modificaciones al sistema que yo no autoricé porque ya no era mi responsabilidad autorizarlas.

—¿Qué tipo de modificaciones?

—No lo sé con certeza. Lo que sí sé es que la empresa contratista que mantenía el sistema, la que había instalado originalmente las capas de redundancia, fue sustituida por otra empresa unos diez meses después de mi retiro. La nueva empresa tenía un contrato diferente con especificaciones técnicas distintas.

—¿Recuerda el nombre de la nueva empresa?

El general no respondió de inmediato. Monterde esperó.

—Servicios Especializados Balam —dijo finalmente.

Monterde no cambió la expresión, pero algo en su pecho se tensó con la precisión de un resorte.

Servicios Especializados Balam S.A. de C.V. Era una de las tres empresas sinaloenses del expediente de Arcadia. Una de las que había recibido contratos de adjudicación directa sin licitación por montos que sumaban cientos de millones de pesos.

La empresa que mantenía el sistema de videovigilancia de Palacio Nacional era la misma que aparecía en el expediente de la mujer que había muerto en los quince minutos que ese sistema no había registrado.

—¿Cuándo se enteró de eso? —preguntó Monterde, con la misma temperatura de siempre.

—Cuando me lo dijo un contacto en la Secretaría de Gobernación, hace unos ocho meses. —El general lo miró—. No hice nada con esa información porque

ya no era mi responsabilidad y porque en este país uno aprende a distinguir entre las batallas que puede ganar y las que no.

—¿Pero la conservó.

—La conservé.

—¿Tiene documentación?

—Tengo el contrato original que firmé con la empresa anterior y una nota interna que yo mismo redacté cuando me enteré del cambio. La redacté para el expediente institucional pero nunca la entregué porque para entonces ya sabía que el expediente institucional no era el lugar correcto para ese tipo de notas.

—¿Me la puede dar?

El general lo miró durante un momento largo.

—Vine a esta ciudad cuando me retiré —dijo— porque Cuernavaca tiene el clima adecuado para la artritis y porque está suficientemente lejos de donde ocurren las cosas como para que uno pueda ver lo que ocurre sin estar adentro. Eso me pareció un arreglo razonable. —Hizo una pausa—. Lo que me está diciendo usted esta mañana me sugiere que el arreglo ya no es tan razonable.

—¿Por qué?

—Porque si Servicios Especializados Balam tiene el contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia de Palacio, y si esa empresa está vinculada al mecanismo que mató a la licenciada Henestrosa, entonces el sistema de seguridad del edificio donde vive y trabaja la Presidenta de la República está en manos de las mismas personas que ese mecanismo. —Bautista Noriega dejó pasar un segundo—. Y eso ya no es un problema de investigación. Es un problema de seguridad nacional.

Monterde no respondió. No era necesario.

El general se levantó, salió de la sala y volvió cuatro minutos después con una carpeta delgada que puso sobre la mesa sin ceremonia.

—El contrato original y la nota interna —dijo—. Si necesita que declare formalmente, lo pienso. Pero necesito garantías de que mi declaración va a algún lugar que no sea el archivo muerto de la Fiscalía.

—No puedo garantizarle el destino —dijo Monterde—. Puedo garantizarle que si declara, la declaración va a estar en manos de más de una persona y más de una institución antes de que nadie pueda archivarla.

El general asintió lentamente.

—Eso tendrá que ser suficiente.

Monterde tomó la carpeta, la guardó en el interior de su saco y se levantó para irse. En la puerta, el general lo detuvo con una pregunta que no había hecho antes.

—¿Sabe ya quién es el Licenciado Cero?

Monterde se volvió.

—¿Usted lo sabe?

Bautista Noriega sonrió por primera vez en toda la conversación. Era una sonrisa sin alegría, del tipo que producen las ironías que cuestan demasiado.

—Lo conozco —dijo—. Lo he conocido desde hace años. Es alguien que ha tenido suficiente cuidado de nunca aparecer en primer plano. Alguien que opera siempre a través de otros. —Hizo una pausa—. Pero hay algo que quizás usted no sabe todavía. Algo que me dijo una persona de la Secretaría de Gobernación hace tres semanas, cuando ya había muerto la licenciada Henestrosa y yo todavía no sabía si alguien iba a investigar de verdad o si esto iba a archivarse como siempre.

—¿Qué le dijo?

—Que los quince minutos de la cámara 23 no fueron planeados para esa noche.

Monterde lo miró.

—Fueron planeados para otra ocasión —continuó el general—. Meses antes. Alguien construyó esa ventana de oscuridad para un uso que después no fue necesario, y la dejó ahí, latente, dentro del sistema. Como una herramienta lista para cuando se necesitara. —Sus ojos no se apartaron de los de Monterde—. Lo que eso le dice, agente, es que el plan de matar a alguien dentro de Palacio Nacional no nació con Arcadia Henestrosa. Arcadia fue la primera en quien se usó. No necesariamente la última en quien estaba prevista.

El jardín afuera tenía ese silencio de los jardines en casas grandes donde nadie juega porque los niños ya se fueron. Monterde escuchó el silencio un momento antes de responder.

—¿Quién era el objetivo original?

—No lo sé —dijo Bautista Noriega—. Y le digo la verdad cuando le digo eso. Hay cosas que uno prefiere no saber porque saber demasiado en este país tiene un costo que a mi edad ya no estoy seguro de poder pagar.

Monterde asintió.

—Gracias, general.

—No me las dé todavía —dijo Bautista Noriega—. Dénmelas cuando esto termine de una manera que no sea el archivo muerto.

Manejó de regreso a la Ciudad de México con las ventanas cerradas y el aire acondicionado apagado, que era su manera de pensar en el coche cuando necesitaba que el espacio fuera incómodo lo suficiente para no dormirse en las ideas.

Los quince minutos no habían sido planeados para Arcadia.

Eso cambiaba la geometría del caso de una manera que Monterde tardó treinta kilómetros en empezar a articular. Si la ventana de oscuridad era una

infraestructura preexistente, construida con anticipación para un uso que no había llegado a concretarse, entonces el mecanismo del Licenciado Cero llevaba más tiempo del que el expediente de Arcadia sugería. No era una operación construida para neutralizar a Arcadia específicamente. Era una operación que llevaba funcionando el tiempo suficiente para haber necesitado antes esa capacidad, aunque por alguna razón ese uso previo no había sido necesario o no había sido activado.

¿Quién era el objetivo original?

Monterde no lo sabía. Pero sí sabía algo que el general había omitido quizás sin darse cuenta de que lo omitía: si el objetivo original no había sido neutralizado, seguía siendo un objetivo.

Y si seguía siendo un objetivo, y si el mecanismo del Licenciado Cero había tenido que adelantar el uso de la ventana para Arcadia porque ella había acelerado sus planes de filtrar el expediente, entonces había alguien más ahí afuera que no sabía que tenía una ventana de quince minutos con su nombre.

Monterde tomó el teléfono en el semáforo de la salida de la autopista y llamó a Fernanda.

—¿Puedes cruzar el expediente de Arcadia con los registros de acceso al Palacio de los últimos dos años? Quiero saber qué otras personas con acceso al ala sur han tenido conflictos documentados con la coordinación de seguridad, con la Presidencia o con cualquier área vinculada a los contratos de Balam.

—¿Estás buscando otro objetivo?

—Estoy buscando un patrón —dijo Monterde—. Dame lo que encuentres antes de las seis.

Colgó y siguió manejando.

Servicios Especializados Balam tenía el contrato de mantenimiento del sistema de videovigilancia de Palacio. Eso significaba acceso remoto al sistema. Eso significaba que los quince minutos no habían requerido a nadie físicamente presente en el edificio para ser activados. Bastaba con acceso remoto desde cualquier lugar del país, o del mundo, y con una clave de administrador.

Y eso significaba que Gustavo Almeida, el hermano que no existía, había sido plantado en el expediente no para señalar hacia un sospechoso real sino para señalar hacia un vector de acceso físico que no era el vector real. El acceso real había sido remoto. La identidad falsa de Gustavo existía para que la investigación buscara en el lugar equivocado el tiempo suficiente para que la operación quedara fuera del alcance de la evidencia.

Era una operación diseñada por alguien que conocía exactamente cómo trabajan los investigadores.

Alguien que conocía exactamente cómo trabajaba él.

Monterde pensó en la nota del Tsuru. En el audio de cuarenta y dos minutos. En la protección que el hombre sin nombre mencionaba dentro de la Fiscalía.

Pensó en Sandoval Meza y en la oferta de Monterrey.

Y pensó en algo que hasta ese momento no había querido pensar porque era el tipo de conclusión que, una vez pensada, ya no se puede dejar de ver: que la razón por la que lo habían asignado a él específicamente no era solo porque era incómodo para el sistema y le daba cobertura política al fiscal. Era también porque alguien sabía exactamente hasta dónde podría llegar y exactamente cómo detenerlo antes de que llegara demasiado lejos.

Lo habían asignado a él porque creían que lo conocían.

El error que habían cometido era creer que conocerlo era suficiente para controlarlo.

Entró a la ciudad por el Periférico sur con el tráfico de la tarde encima y esa sensación específica, que tenía a veces en los casos grandes, de que el caso había dejado de ser un rompecabezas con piezas dispersas y se había convertido en algo con forma propia: una forma que todavía no podía ver completa pero que ya podía sentir, como se siente en la oscuridad el borde de un mueble antes de verlo.

Iba a necesitar más piezas.

Pero ya sabía dónde estaban.

CAPÍTULO 8

Los aliados incómodos

FGR · Cámara de Diputados · Colonia Doctores · Ciudad de México, 22-23 de marzo de 2025

El mensaje llegó a las ocho y cuarenta de la mañana, mientras Monterde estaba en la División de análisis forense digital revisando con Fernanda el cruce de registros de acceso al Palacio que ella había preparado la noche anterior. Era un número desconocido, como todos los que habían importado en los últimos días, y el texto era breve con esa brevedad calculada de quien escribe sabiendo que los mensajes pueden ser interceptados:

Agente Monterde. Tenemos información sobre el caso Henestrosa que usted no tiene. Somos diputados de oposición. Necesitamos hablar hoy. Discreción absoluta de ambas partes.

Monterde leyó el mensaje dos veces, lo mostró a Fernanda sin decir nada, y guardó el teléfono.

—¿Qué vas a hacer? —preguntó Fernanda.

—Reunirme con ellos.

—¿Crees que tienen algo real?

—No lo sé. Pero si tienen algo y no los escucho, es mi error. Si tienen algo fabricado y los escucho, aprendo dónde está la siguiente trampa.

Fernanda asintió con la expresión de quien entiende la lógica pero no está completamente tranquila con ella.

Monterde respondió al número con una sola línea: *Hoy a las cinco. Plaza de Santo Domingo. Vengo solo.*

La respuesta llegó en dos minutos: *Ahí estaremos.*

Antes de esa reunión había trabajo que hacer. Fernanda tenía el cruce de registros sobre la mesa y se los presentó con la metodología que Monterde le conocía desde hacía dos años: primero el marco, luego los datos, luego las anomalías, sin dramatismo y sin conclusiones que el dato no sostenía por sí solo.

—Revisé los registros de acceso al ala sur de Palacio de los últimos veinticuatro meses —dijo—. Personas con acceso autorizado que además tienen algún tipo de conflicto documentado con la coordinación de seguridad, la Presidencia o las áreas vinculadas a los contratos de Balam. —Giró una pantalla hacia él—. Encontré once nombres. De esos once, ocho tienen conflictos menores: disputas de protocolo, solicitudes rechazadas, ese tipo de cosas. Los otros tres son diferentes.

—Cuéntame los tres.

—El primero es un subsecretario de Hacienda que presentó una queja formal ante la Contraloría hace catorce meses por irregularidades en un proceso de adjudicación de contratos de tecnología. La queja fue archivada en seis semanas. Desde entonces tiene acceso restringido a ciertas áreas del Palacio sin explicación oficial documentada.

—¿Tiene contacto con Arcadia?

—Hay dos reuniones registradas en la agenda institucional de Arcadia con ese subsecretario, ambas en los seis meses anteriores a la queja. Después de la queja, ninguna.

—¿Segundo?

—Una directora general del área de comunicación social de la Presidencia. Pidió su retiro voluntario hace ocho meses. Antes del retiro tuvo una reunión con Arcadia que no aparece en la agenda oficial sino en el registro de visitantes del edificio. Fue un martes a las siete de la noche, cuando el edificio tiene tráfico mínimo.

—¿Qué hizo después del retiro?

—Se fue a vivir a España. —Pausa—. Barcelona.

Monterde anotó los dos nombres.

—¿El tercero?

Fernanda dudó un segundo, lo cual era inusual.

—El tercero es el que más me preocupa. —Giró otra pantalla—. Es un asesor de seguridad nacional adscrito directamente a la oficina de la Presidencia. Lleva tres años en el cargo. No tiene conflictos documentados. No tiene

quejas, no tiene llamadas de atención, no tiene absolutamente nada en su expediente que llame la atención. Su historial es impecable.

—¿Entonces por qué está en la lista?

—Porque crucé su nombre con el registro de contratos de la Secretaría de la Función Pública y aparece como representante técnico en las tres licitaciones que adjudicaron contratos a Balam, a Seguridad Integral del Noroeste y a Consorcio de Protección Avanzada. No como funcionario firmante: como representante técnico de la dependencia compradora. Es el que certifica que los servicios cumplen con los requerimientos técnicos del contrato.

—¿Su nombre aparece en el expediente de Arcadia?

—No directamente. Pero aparece su firma en seis de los diecisiete contratos que Arcadia había documentado.

Monterde se quedó mirando el nombre en la pantalla.

Bernardo Salcedo Prieto. Asesor de seguridad nacional. Tres años en el cargo. Expediente impecable. Firma en seis contratos del mecanismo que Arcadia había estado documentando durante dieciocho meses.

Alguien con expediente impecable dentro de un mecanismo que producía crímenes no era una anomalía: era la definición exacta del tipo de operador que una infraestructura de ese tipo necesitaba en su centro. Invisible, técnico, irremplazable para los procesos que nadie más quería entender en detalle.

—No lo toques todavía —dijo Monterde—. Ni investigues más sobre él sin decirme. Quiero saber qué tenemos antes de que él sepa que lo estamos viendo.

—Entendido.

—¿Algo más del cruce?

—Sí. Los registros de viajes de Arcadia que finalmente llegaron del área de transportes de la Presidencia, que los enviaron con tres días de retraso y con una nota que decía que habían tenido dificultades técnicas para localizarlos.

—Fernanda levantó una ceja—. Dificultades técnicas.

—¿Qué dicen los registros?

—Arcadia viajó a Culiacán cuatro veces en los últimos dieciocho meses. Dos veces en vehículo oficial con chofer asignado, dos veces en vuelo comercial con tarjeta institucional. Las fechas coinciden con periodos de actividad intensa en el expediente que guardaba en Xochimilco: las dos primeras visitas son de los meses donde hay mayor acumulación de documentos nuevos en el archivo. Las dos últimas son de octubre y diciembre del año pasado.

—¿Aparece algún nombre en los registros de las visitas? ¿Con quién se reunió?

—Los reportes de chofer de las dos visitas en vehículo oficial dicen que la dejaron en un domicilio en la colonia Chapultepec de Culiacán y la recogieron tres horas después. El domicilio está registrado a nombre de una persona física: Consuelo Henestrosa Viuda de Bracamontes.

—¿Familiar?

—La madre de Arcadia. Setenta y cuatro años, pensionada, vive en ese domicilio desde hace veinte años.

Monterde anotó el nombre. Las visitas a la madre podían ser visitas a la madre. O podían ser la cobertura perfecta para reunirse con alguien en Culiacán sin dejar un registro comprometedor: nadie cuestiona que una funcionaria visite a su madre anciana.

—¿Las dos visitas en vuelo comercial tienen el mismo destino?

—El primer vuelo llega a Culiacán y regresa el mismo día. El segundo vuelo llega a Culiacán y tiene conexión a Los Mochis. Regresa de Los Mochis al día siguiente.

—Los Mochis. —Monterde pensó—. ¿Qué hay en Los Mochis?

—Aparte de la ciudad en sí, hay un puerto industrial y una zona franca de comercio exterior que en los últimos tres años ha procesado un volumen de importaciones que los analistas económicos del Banco de México consideran inusualmente alto en relación con el tamaño de la economía local.

Monterde la miró.

—¿Eso está en algún informe público?

—En un informe técnico del Banco de México de hace ocho meses que tuvo cero cobertura mediática.

—Guárdalo. Y busca si alguna de las tres empresas sinaloenses del expediente de Arcadia tiene operaciones en Los Mochis.

Fernanda tecleó durante un minuto.

—Consorcio de Protección Avanzada tiene una oficina registrada en Los Mochis desde hace dos años. Y tiene un contrato de servicios de seguridad perimetral con la administración de la zona franca por un monto que no aparece en el registro público de contratos del gobierno federal porque la zona franca tiene un régimen jurídico especial que la exime parcialmente de esa obligación de transparencia.

Monterde cerró su libreta.

El mapa se estaba completando con una geometría que ya no era solo un crimen: era una arquitectura. Culiacán como centro de operaciones. Los Mochis como punto de salida o de procesamiento. La zona franca como mecanismo de opacidad financiera. Los contratos de seguridad como cobertura institucional. Y en el centro de todo eso, una red de personas con nombres, firmas y expedientes impecables que producían, como resultado colateral de su operación normal, la muerte de quienes llegaban demasiado cerca.

A las cuatro y cuarenta y cinco salió de la Fiscalía y caminó hacia la Plaza de Santo Domingo. Era un trayecto de veinte minutos a pie que hizo sin apresurarse, cambiando de acera dos veces, deteniéndose en un puesto de

periódicos para mirar los titulares sin comprar ninguno y verificando de paso que nadie ajustara su velocidad a la suya.

No vio a nadie.

Eso no significaba que nadie estuviera ahí. Significaba que si alguien lo seguía, era bueno.

La Plaza de Santo Domingo a esa hora tenía la actividad pausada de las plazas del Centro en días de semana: evangelistas con sus máquinas de escribir bajo los portales, algunos turistas fotografiando la iglesia, palomas y vendedores de tlayudas. Monterde se sentó en una banca frente a la fuente y esperó.

Los diputados llegaron en dos: un hombre y una mujer, ambos de unos cincuenta años, ambos con la ropa sin ostentación deliberada de los políticos que quieren parecer ciudadanos cuando no están en el Congreso. El hombre se llamaba, según se presentó, Rodrigo Espinoza Carrillo, diputado por Jalisco. La mujer era Lorena Matus Gutiérrez, diputada por Coahuila. Ambos pertenecían a partidos distintos pero formaban parte de la misma bancada de oposición en la Cámara.

Se sentaron en la misma banca sin saludarlo de manera que pareciera una reunión.

—Gracias por venir —dijo Espinoza, mirando hacia la iglesia.

—Qué tienen —dijo Monterde, sin preámbulos.

Fue la diputada Matus quien habló.

—Hace tres semanas, antes de la muerte de la licenciada Henestrosa, recibimos a través de un intermediario un paquete de documentos. Contratos, estados de cuenta, actas constitutivas. Material sobre tres empresas con contratos de seguridad nacional adjudicados de manera irregular.

Monterde no dijo nada.

—Lo revisamos con nuestro equipo jurídico —continuó Matus—. Es material sólido. Suficiente para abrir una investigación en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior. Suficiente, posiblemente, para una denuncia penal.

—¿Quién era el intermediario?

—No nos lo dijo. Llegó por correo físico, con remitente en blanco, a la dirección de la oficina de cada uno de nosotros en el Congreso. El mismo día, el mismo paquete.

—¿Lo tienen todavía?

—Sí.

—¿Han hecho algo con él?

El diputado Espinoza giró levemente hacia él.

—Estábamos esperando el momento adecuado para usarlo. Hay un periodo ordinario de sesiones que comienza en dos semanas. El material podía presentarse en el marco de ese periodo con mayor impacto político.

Monterde entendió la dinámica en ese momento con la claridad con que se entienden las cosas cuando uno ya lleva suficientes días mirando el mismo problema desde ángulos distintos. Los diputados tenían el expediente de Arcadia, o una versión de él, enviado por la propia Arcadia antes de morir como garantía de que el material existiera en más de un lugar. Y lo habían estado guardando para usarlo en el momento de mayor impacto electoral, no en el momento de mayor utilidad para la investigación.

Eso no los hacía villanos. Los hacía políticos. Que en algunos contextos era la misma cosa y en otros era algo completamente diferente.

—¿Qué quieren de mí? —preguntó Monterde.

—Coordinación —dijo Matus—. Si usted avanza en la investigación penal y nosotros presentamos el material en el Congreso de manera coordinada, el efecto es multiplicador. No pueden archivar lo uno sin que lo otro quede en el aire. No pueden desacreditar lo uno sin que lo otro lo sostenga.

—¿Y el calendario lo pone el periodo ordinario de sesiones?

—El calendario lo pone lo que sea más efectivo —dijo Espinoza, con la seguridad de quien ha aprendido a decir lo correcto cuando siente que lo están mirando.

Monterde lo miró directamente.

—Voy a decirles algo con toda la claridad que puedo —dijo—. No coordino el calendario de una investigación penal con el calendario legislativo de ningún partido. La investigación avanza cuando la evidencia lo permite y se presenta cuando la evidencia lo sostiene. Si en ese momento coincide con un periodo de sesiones, es una coincidencia afortunada para ustedes. No un acuerdo.

La diputada Matus asintió con algo que podía ser respeto o podía ser resignación a un interlocutor que no iba a ceder.

—Lo entendemos —dijo—. Pero sí podemos compartirle el material que recibimos.

—Sí. Y necesito que me digan algo más. —Monterde los miró alternativamente—. El material que recibieron hace tres semanas. ¿Llegó antes o después de la muerte de la licenciada Henestrosa?

Silencio breve.

—Antes —dijo Espinoza—. Cuatro días antes.

Cuatro días antes del catorce de marzo. Arcadia había enviado el material al Congreso el diez de marzo, cuatro días antes de morir. Eso significaba que para esa fecha ya sabía que estaba en peligro real e inmediato, no un peligro abstracto sino uno con fecha. Había enviado el material a los diputados como una segunda copia de seguridad, además del archivo físico de Xochimilco, y había intentado reunirse con Valentina Camarillo como tercera vía.

Tres salidas simultáneas. Una persona que sabía que el tiempo se acababa y que construyó hasta el último momento.

Monterde pensó en la última oración del documento de cuatro páginas: *Si alguien lee esto y yo ya no estoy, que sepa que no fue un accidente.*

Arcadia no se había rendido. Había distribuido.

—El material me lo envían hoy en la noche —dijo Monterde—. A este número. —Les escribió en un papel el número de un teléfono de prepago que había comprado esa mañana—. Fotografías de cada página, en el orden en que está organizado el original. Y guarden el original bajo su propia custodia.

Se levantó sin extender la mano a ninguno de los dos, porque estrechar manos en una plaza pública era el tipo de detalle que las cámaras de seguridad urbana registraban sin que nadie lo pidiera.

Caminó de regreso hacia la Fiscalía por una ruta diferente a la de llegada, pensando en lo que la conversación le había dado y en lo que le había confirmado.

Lo que le había dado: una tercera copia del expediente de Arcadia en manos de personas que tenían interés político en usarlo, lo cual lo protegía de maneras que una copia notarial no podía. Los políticos hacen ruido cuando les quitan lo que tienen. El ruido también es un tipo de protección.

Lo que le había confirmado: que Arcadia había distribuido su expediente de manera deliberada y sistemática antes de morir. Valentina Camarillo como vía pública. Los diputados como vía legislativa. El archivo de Xochimilco como vía judicial. Tres vectores distintos, tres instituciones distintas, tres tipos de presión distintos.

Una mujer que había pasado dieciocho meses documentando en silencio había gastado sus últimas semanas construyendo una red de distribución para asegurarse de que lo que sabía no muriera con ella.

Monterde llegó a la Fiscalía, subió al séptimo piso, y se quedó de pie frente al mapa de la pared con los alfileres de colores.

Añadió dos nuevos: uno en el Centro Histórico, por la reunión de hoy. Uno en Los Mochis.

El mapa empezaba a tener la forma de algo que podía verse completo.

Fernanda entró a la sala sin llamar, que era lo que hacía cuando tenía algo urgente.

—Los medios afines al gobierno publicaron esta tarde un reportaje —dijo, con el teléfono extendido hacia él.

Monterde tomó el teléfono y leyó el titular.

Investigación sobre muerte en Palacio apunta a red de operadores de oposición vinculados a exfuncionarios. FGR avanza en línea de inteligencia.

Leyó el primer párrafo. Mencionaba a dos exfuncionarios de gobiernos anteriores por nombre, les atribuía vínculos con Arcadia Henestrosa, y citaba como fuente a "altos funcionarios de la Fiscalía General de la República" que no querían ser identificados.

Monterde devolvió el teléfono a Fernanda.

—Sandoval —dijo.

—O alguien sobre Sandoval.

—¿Cuándo publicaron esto?

—Hace dos horas. Ya lo está reproduciendo la televisión de la tarde.

Monterde se quedó mirando el mapa.

La narrativa oficial había sido lanzada. Ya no era una instrucción en una oficina ni una insinuación en un pasillo: era una historia pública con nombres y con la Fiscalía como fuente implícita. A partir de este momento, cualquier conclusión de la investigación que contradijera esa narrativa sería presentada no como el resultado de la evidencia sino como el producto de un agente con agenda política propia.

Era un movimiento inteligente. Era también, pensó Monterde, un movimiento desesperado. Las operaciones que funcionan bien no necesitan narrativa pública. Las narrativas públicas se construyen cuando algo empieza a salirse del control que se tenía previsto.

—¿Qué hacemos? —preguntó Fernanda.

Monterde tomó su saco del respaldo de la silla.

—Seguimos. —Se lo puso—. Mañana temprano quiero el análisis de la fotografía de Gustavo Almeida. Y quiero que revises si Bernardo Salcedo Prieto tiene algún registro de comunicación con cualquiera de los once nombres de la lista de acceso al ala sur.

—¿Lo hago desde aquí?

Monterde la miró.

—¿Desde aquí tienes acceso a lo que necesitas?

—Sí.

—Entonces desde aquí. Pero guarda cada resultado en la copia externa, no solo en el servidor de la Fiscalía.

Fernanda asintió.

Monterde salió al pasillo. En el elevador, bajando, pensó que el reportaje de la tarde era también una señal de algo que el general Bautista Noriega le había dicho en Cuernavaca sin decírselo directamente: que los quince minutos habían sido planeados para antes y activados para Arcadia porque algo había acelerado el calendario.

Lo que había acelerado el calendario era que Arcadia había empezado a distribuir el expediente.

Y lo que estaba acelerando el calendario ahora era que él seguía investigando cuando ya debería haber aceptado Monterrey.

Salió a la calle con el ruido del tráfico de la tarde encima y la certeza de que el margen que le quedaba se estaba reduciendo de una manera que podía medir pero no podía detener.

Solo podía usarlo.

CAPÍTULO 9

La conexión Rebeca

Archivo General de la Nación · FGR · Colonia Doctores · Ciudad de México, 24 de marzo de 2025

Fernanda no le dijo nada cuando llegó esa mañana.

Eso fue lo primero que Monterde notó: que Fernanda, que normalmente empezaba a hablar antes de que él terminara de sentarse, lo miró cuando entró a la sala y luego miró su pantalla y luego volvió a mirarlo con una expresión que no era exactamente miedo pero sí era algo que Monterde no le había visto antes en dos años de trabajar juntos.

—¿Qué encontraste? —dijo él, dejando los cafés sobre la mesa sin quitarse el saco.

Fernanda giró una de sus pantallas hacia él.

Era un documento escaneado. Membrete de la Subsecretaría de Gobernación. Fecha: 11 de febrero de 2013. Clasificación: reservado. En el encabezado, una línea que decía: *Nota informativa interna. Asunto: fuentes de riesgo en el área de fiscalización del Congreso de la Unión.*

Monterde leyó el primer párrafo.

Luego el segundo.

Luego se detuvo en el tercer párrafo, donde aparecía un nombre que hacía doce años no leía en ningún documento oficial, porque en doce años nadie había querido ponerlo en ningún documento oficial que él pudiera ver.

Rebeca Monterde Goldstein. Auditora adscrita a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Identificada como fuente de información sobre irregularidades en contratos de servicios de seguridad. Nivel de riesgo para la operación: alto. Acción recomendada: neutralización de la fuente mediante presión institucional y desacreditación del expediente en proceso.

Monterde leyó esa última línea tres veces.

Neutralización de la fuente.

Doce años atrás, en el lenguaje de un memorando de la Subsecretaría de Gobernación, neutralizar una fuente era desacreditarla, presionarla, archivar su expediente. No necesariamente algo más. No en ese momento. No con esas palabras.

Pero Rebeca había muerto cuatro meses después de la fecha de ese memorando.

Monterde se levantó, caminó hasta la ventana que daba al pasillo interior del edificio y se quedó ahí un momento con la espalda hacia Fernanda. No era que necesitara no ser visto. Era que necesitaba un espacio entre lo que había leído y lo que iba a hacer con ello, y ese espacio tenía que ocurrir antes de que Fernanda pudiera verle la cara.

Doce años. Doce años guardando evidencias que no podía presentar ante nadie porque el sistema que debería recibirlas era el mismo que había cerrado el expediente. Doce años diciéndose que algún día aparecería el hilo correcto para tirar.

El hilo había aparecido en el expediente de una mujer sinaloense muerta en el corredor 14-B del ala sur de Palacio Nacional.

Se volvió.

—¿Cómo llegaste a este documento? —preguntó, con la misma temperatura de siempre. O casi.

Fernanda lo miró con cuidado.

—Estaba buscando en el archivo digital de Xochimilco los vínculos entre los contratos de seguridad del expediente de Arcadia y antecedentes anteriores al periodo que ella documentó. Quería ver si el mecanismo del Licenciado Cero tenía historia antes de 2022. —Hizo una pausa—. El memorando estaba en la cuarta carpeta del archivo, detrás de los documentos de Los Mochis. No estaba en ningún índice. Estaba intercalado entre dos estados de cuenta de 2023 como si alguien lo hubiera puesto ahí sin querer o como si Arcadia lo hubiera encontrado y guardado sin anotar su importancia.

—¿Hay más documentos de 2013 en el archivo?

—Solo ese. Y hay algo más. —Fernanda giró otra pantalla—. La rúbrica que aparece al pie del memorando. El funcionario que lo firmó.

Monterde miró la pantalla.

La firma era elaborada, con un rasgo descendente que terminaba en un bucle hacia la izquierda. Debajo de ella, en tinta diferente, como si hubiera sido añadida después, había un sello con nombre y cargo: *Lic. Esteban Ruvalcaba Laris. Director de Análisis de Inteligencia Interior. Subsecretaría de Gobernación.*

El nombre no le dijo nada de inmediato. Lo buscó en su memoria con la rapidez de quien ha leído miles de expedientes y guarda los nombres como un archivo de acceso rápido aunque nunca los haya organizado conscientemente.

Nada.

—Búscalo —dijo.

Fernanda ya lo estaba haciendo.

—Esteban Ruvalcaba Laris —dijo, leyendo de la pantalla—. Licenciado en Ciencias Políticas por la UNAM. Maestría en Seguridad Nacional en el Colegio de México. Carrera en la Secretaría de Gobernación desde 1998 hasta 2016,

cuando fue designado como coordinador de asesores del entonces candidato presidencial del partido en el poder. Con el cambio de gobierno en 2018 fue nombrado subsecretario de Seguridad Interior. En 2021 fue relevado del cargo y pasó al sector privado como consultor en materia de seguridad y gestión de riesgos. —Pausa—. Tiene domicilio registrado en la Ciudad de México y una sociedad de consultoría constituida en 2021 con dos socios: él y otro individuo cuyo nombre es...

Fernanda se detuvo.

Monterde la miró.

—Bernardo Salcedo Prieto —dijo ella.

El asesor de seguridad nacional adscrito a la oficina de la Presidencia. El hombre con expediente impecable y firma en seis contratos. El que había entrado en la lista de Fernanda el día anterior no por ningún conflicto documentado sino por su presencia sistemática en los procesos de adjudicación que habían alimentado el mecanismo del Licenciado Cero.

Monterde se sentó.

La geometría que había estado tomando forma durante ocho días se completó en ese momento con la precisión de las cosas que, cuando se ven enteras, parecen haber estado ahí desde el principio.

Ruvalcaba Laris había firmado en 2013 el memorando que recomendaba neutralizar a Rebeca Monterde Goldstein como fuente de riesgo. Ruvalcaba Laris había construido en los años siguientes una carrera que lo acercó al centro del poder político del régimen actual. Y Ruvalcaba Laris tenía, desde 2021, una sociedad de consultoría con Bernardo Salcedo Prieto, el hombre que desde adentro de la Presidencia certificaba los contratos que alimentaban el mecanismo.

No era el Licenciado Cero. Era demasiado visible para serlo, demasiado rastreable. Pero era algo que en algunos casos era más peligroso que el centro: era la bisagra. El punto de articulación entre el pasado del mecanismo y su presente. El hombre que había estado ahí en 2013 cuando Rebeca, y que seguía estando ahí en 2025 cuando Arcadia.

Monterde miró el memorando en la pantalla durante un momento largo.

Doce años.

—¿Hay registro de que Arcadia y Ruvalcaba Laris se conocieran? —preguntó.

Fernanda tecleó.

—En el registro de comunicaciones de la memoria USB hay dos números que intercambian mensajes con Arcadia en el periodo entre octubre y enero. Uno es el número de Culiacán de prepago que ya conocemos. El otro es un número de la Ciudad de México que no habíamos identificado todavía. —Tecleó más—. Ese número está registrado a nombre de una empresa: Ruvalcaba y Salcedo Consultoría en Seguridad S.C.

—¿Cuántos mensajes?

—Ocho. Entre el tres de octubre y el doce de noviembre del año pasado. Después de esa fecha, ninguno. Y el once de noviembre, el día antes del último mensaje, hay una entrada en el registro de visitantes del edificio donde tiene oficinas la consultoría: una persona ingresa a las seis de la tarde y sale a las ocho y cuarto. El nombre en el registro de visitantes es Arcelia Herrera, que no corresponde a ninguna identidad verificable en los sistemas.

Arcelia Herrera. Una letra diferente, el mismo apellido. La clase de pseudónimo que se construye deprisa cuando uno necesita uno que pueda recordar sin esfuerzo.

—Arcadia fue a verlo —dijo Monterde.

—Sí. Y después de esa reunión dejó de escribirle.

—¿Qué ocurrió en esa reunión?

Fernanda lo miró.

—No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuatro días después de esa reunión, el número de prepago de Culiacán, el número del hombre que aparece en el audio de cuarenta y dos minutos, envió a Arcadia tres mensajes en el mismo día. No tenemos el contenido porque los mensajes fueron eliminados del teléfono, pero tenemos los metadatos: hora, duración, tamaño del texto. El tercer mensaje es el más largo. Se envió a las once de la noche.

—¿Y después de eso?

—Arcadia no respondió ninguno de los tres. Desde esa noche, el número de Culiacán no volvió a contactarla. Y desde esa noche, el comportamiento de Arcadia en el registro de comunicaciones cambia: empieza a usar el teléfono considerablemente menos, empieza a cancelar reuniones y empieza a preparar el envío del material a los distintos destinatarios.

Monterde procesó la secuencia.

Arcadia había ido a ver a Ruvalcaba Laris en noviembre. Algo en esa reunión le había dicho que ya no podía esperar más. Quizás lo había confrontado con lo que tenía. Quizás había intentado una negociación que no funcionó. Quizás simplemente había visto en esa conversación la dimensión real de lo que estaba enfrentando y había entendido que la única salida era distribuir el expediente antes de que la alcanzaran.

La reunión de noviembre era el punto de inflexión. Todo lo que vino después, la distribución a Valentina, a los diputados, el archivo de Xochimilco con la cámara propia, era consecuencia de lo que Arcadia entendió en esa conversación.

—Necesito el memorando de 2013 en el expediente formal —dijo Monterde—. Cadena de custodia completa, desde cómo lo encontraste hasta dónde está ahora. Y necesito que alguien con autoridad para hacerlo verifique la autenticidad del documento antes de que lo usemos.

—¿A quién le pedimos la verificación sin que salga del círculo?

Monterde pensó.

—El doctor Buentello tiene contactos en el Archivo General de la Nación. Lo llamo yo.

Marcó desde el teléfono de prepago. Buentello contestó al segundo tono.

Le explicó lo que necesitaba en términos que no mencionaban nombres pero que el patólogo entendió sin necesidad de que los mencionara. Buentello dijo que conocía a la subdirectora de acervos históricos del Archivo General y que podía tener una respuesta sobre autenticidad documental en veinticuatro horas si el documento llegaba por los canales correctos.

—Por los canales correctos significa sin que quede registro de la solicitud en los sistemas institucionales —aclaró Buentello.

—Exactamente así —dijo Monterde.

Colgó y se quedó un momento mirando la pared.

Fernanda lo observaba con la prudencia de quien sabe que hay un territorio emocional en esta conversación que ella puede ver pero que no le corresponde nombrar a menos que él lo haga primero.

Monterde no lo hizo.

Lo que sintió en ese momento no era lo que la gente imagina que se siente cuando se confirma algo que uno ha sabido durante doce años. No era alivio ni rabia ni ninguna de las emociones nítidas que tienen nombre y cabida en una conversación. Era algo más parecido a la sensación de que el suelo se nivela después de doce años de caminar sobre una superficie que siempre ha tenido una inclinación que uno aprendió a compensar sin darse cuenta. Una sensación de repente de estar parado derecho, que debería ser cómoda y que en cambio resulta extraña porque el cuerpo ya no sabe qué hacer sin el ángulo.

Rebeca había muerto cuatro meses después del memorando. La causa oficial había sido suicidio: una caída desde el tercer piso de un edificio de apartamentos en la colonia Nápoles, a las dos de la madrugada de un martes de junio. Sin testigos. Sin nota. Sin antecedentes documentados de ideación suicida en ningún expediente clínico.

Monterde tenía veintitrés años cuando Rebeca murió. Treinta y uno cuando entró a la Fiscalía. Cuarenta y tres ahora, sentado frente a una pantalla con el memorando que por primera vez en doce años ponía un nombre y una firma debajo de lo que siempre había sabido sin poder demostrar.

Neutralización de la fuente.

La diferencia entre 2013 y 2025 era que en 2025 el mecanismo había perfeccionado sus métodos. Ya no necesitaba simular una caída desde un tercer piso. Tenía cloruro de potasio y quince minutos de oscuridad y un técnico con deudas dispuesto a firmar un informe.

—¿Estás bien? —dijo Fernanda, en voz baja.

—Sí —dijo Monterde.

No era del todo cierto. Pero era lo suficientemente cierto para seguir trabajando, que era lo que necesitaba que fuera.

—Hay algo más —dijo Fernanda—. El análisis de la fotografía de Gustavo Almeida llegó esta mañana del área técnica.

—¿Y?

—Confirmado. La fotografía es generada por inteligencia artificial. El software de análisis de metadatos detectó patrones de píxel inconsistentes con una fotografía tomada con cámara real, y la ausencia de metadatos EXIF que cualquier cámara o teléfono genera automáticamente. La imagen fue creada digitalmente y no existe ninguna persona real detrás de ese rostro.

—¿Eso es certificable como peritaje?

—Sí. El área técnica puede emitir un dictamen pericial que resiste cualquier contra pericial con los estándares actuales.

—Bien. Pídelo formalmente. Que quede en el expediente.

Fernanda anotó.

—¿Y los registros de cuándo fue creada la identidad en los sistemas?

—Eso tardó más, pero también llegó esta mañana. La entrada en la base de datos de personal de Palacio fue creada hace dieciséis meses. La del IMSS, hace dieciocho. La del SAT, hace veinte. Lo cual significa que la identidad de Gustavo Almeida fue construida durante un periodo de cuatro meses, capa por capa, empezando por el sistema fiscal y terminando por el de personal de Palacio.

—¿Desde qué terminal o usuario se crearon los registros?

Fernanda dudó un segundo.

—Eso es lo más importante y lo más complicado. Los tres registros fueron creados desde terminales distintas en edificios distintos: el SAT, el IMSS y la Coordinación de Sistemas de Palacio. Pero en los tres casos, el usuario que realizó la operación tiene el mismo identificador de red: un código que empieza con las letras BSP.

Monterde la miró.

—Bernardo Salcedo Prieto.

—Las iniciales coinciden. Y el identificador de red corresponde a un usuario con acceso de nivel administrativo en los tres sistemas, lo cual es inusual porque normalmente los accesos institucionales son específicos por dependencia. Tener acceso administrativo simultáneo en el SAT, el IMSS y los sistemas de Palacio requiere una autorización especial que solo puede venir de un nivel muy alto.

—¿Qué nivel?

Fernanda lo miró directamente.

—De la Presidencia de la República.

El silencio que siguió fue breve pero denso.

Monterde cerró su libreta, la abrió de nuevo en una página en blanco y escribió en el centro, rodeado de espacio: *BSP. Acceso simultáneo SAT + IMSS + Palacio. Autorización presidencial.*

Luego escribió debajo: *Ruvalcaba Laris. Memorando 2013. Rebeca.*

Luego, debajo de todo: *El Licenciado Cero no opera solo. Necesita a alguien adentro que tenga ese nivel de acceso.*

Miró lo que había escrito durante un momento.

Salcedo Prieto tenía el acceso. Ruvalcaba Laris tenía la historia. El hombre del audio de cuarenta y dos minutos tenía el conocimiento interno del mecanismo. Y el Licenciado Cero, cuya identidad todavía no tenía, era el punto donde todo convergía.

Faltaba el centro.

Pero por primera vez desde que había tomado el caso, Monterde sintió que el centro no estaba lejos. Estaba cerca. Estaba, de hecho, tan cerca que ya había estado en su campo de visión desde el principio sin que él lo reconociera porque el caso había sido construido precisamente para que no lo reconociera.

Eso era lo que le faltaba entender: no quién era el Licenciado Cero, sino dónde lo había visto ya.

—Necesito releer el expediente completo desde el principio —dijo—. Todo. Los registros de acceso al Palacio, la lista de once personas con acceso de nivel tres, los contratos, las actas, los nombres que han aparecido en cada documento desde el primer día.

—¿Cuándo?

—Esta noche. En casa.

Fernanda le preparó un archivo comprimido con todo el material digitalizado, lo cifró con una clave que solo los dos conocían y lo pasó a la memoria USB de reserva que Monterde guardaba en el bolsillo interior del saco.

Salió de la Fiscalía a las siete y media. Recogió a Griselda. Calentó lo que había en el refrigerador sin prestar atención a qué era. Se sirvió el mezcal de los viernes aunque era lunes porque la semana había dejado de funcionar con el calendario ordinario desde el día en que Sandoval Meza le entregó una carpeta delgada con tres hojas.

Se sentó en el sillón con el archivo abierto en la pantalla de su computadora y Griselda a sus pies y el mezcal sobre la mesa de centro y empezó a leer desde el principio.

Leyó durante tres horas.

A las once y cuarto se detuvo en una página que ya había leído antes, la tercera del informe de la División de análisis forense digital, la que listaba los once nombres con acceso de nivel tres al sistema de videovigilancia de Palacio. La había leído el primer día. La había leído el día en que Fernanda identificó al falso Gustavo Almeida como uno de esos once. La había leído sin

ver lo que ahora, leyéndola por cuarta vez con todo el expediente presente en la memoria, veía con la claridad de las cosas que estaban ahí desde el principio y que uno no ve porque está mirando en otra dirección.

El décimo nombre de la lista.

No era un técnico. No era un coordinador de seguridad. No era un funcionario de Gobernación. Era el responsable de seguridad digital de la Presidencia de la República, cuyo nombre aparecía en esa lista con la naturalidad de quien tiene el acceso más justificado de todos porque es precisamente su responsabilidad tenerlo.

Y ese nombre era el mismo que aparecía en los contratos de la consultoría de Ruvalcaba Laris. El mismo que Fernanda había identificado esa mañana como el código BSP que había creado la identidad de Gustavo Almeida en tres sistemas federales distintos.

Bernardo Salcedo Prieto no era solo el hombre que certificaba los contratos desde adentro.

Era también el hombre que tenía acceso de nivel tres al sistema de videovigilancia de Palacio.

Era el décimo de once.

Era el que había apagado la cámara 23 desde una terminal remota a las 4:02:09 de la madrugada del catorce de marzo y la había vuelto a encender a las 4:17:13.

Y era el hombre que había construido la identidad de Gustavo Almeida para que la investigación buscara a alguien físicamente presente en el edificio cuando la intervención había sido remota, limpia, desde cualquier lugar del mundo con una clave de administrador y diecinueve minutos de paciencia.

Monterde cerró la computadora.

Griselda levantó la cabeza, lo miró un segundo con esos ojos que no juzgan ni calculan, y volvió a apoyarla en el suelo.

Afuera, en la calle Moctezuma, la ciudad seguía siendo la ciudad: ruido de motores, una bocina lejana, el silbato de un policía de tránsito en algún cruce que no se veía desde la ventana.

Monterde tomó el mezcal y lo terminó despacio.

Sabía quién había apagado la cámara. Sabía quién había construido la identidad falsa. Sabía quién había firmado el memorando de 2013. Y sabía que todos ellos eran instrumentos de algo más grande que todavía no tenía cara completa pero que estaba, ahora lo sentía con certeza, a un solo paso de tenerla.

Mañana iba a dar ese paso.

Esta noche solo necesitaba quedarse quieto con lo que sabía sobre Rebeca y dejar que ocupara el espacio que le correspondía, que era un espacio que había estado vacío doce años y que ahora, de repente, tenía algo adentro.

No era justicia. Todavía no.

Pero era la dirección correcta.

Y en este trabajo, a veces, eso es lo único que uno puede pedirle a una noche de lunes.

CAPÍTULO 10

Lo que el sistema protege

FGR · Zona franca de Los Mochis · Ciudad de México · Sinaloa, 25-26 de marzo de 2025

A las seis de la mañana, Monterde estaba en la mesa de su cocina con la computadora abierta, el expediente completo desplegado en cuatro ventanas y un café que había preparado él mismo porque la panadería de la esquina no abría hasta las siete. Griselda dormía debajo de la silla con esa disciplina del sueño que tienen los animales que no tienen pendientes.

Había dormido tres horas.

No era la primera vez en este caso que dormía tres horas, pero era la primera vez que las tres horas no se debían a que el caso lo mantuviera despierto sino a que algo más profundo y más antiguo que el caso se había instalado en el espacio que normalmente ocupaba el sueño. El memorando de 2013. El nombre de Rebeca en tinta oficial. La firma de Ruvalcaba Laris con su rasgo descendente y su bucle hacia la izquierda.

Lo había leído veinte veces entre las once de la noche y las dos de la mañana. No porque necesitara leerlo más para entenderlo, sino porque había algo en leerlo que era distinto a simplemente saber. Era la diferencia entre cargar un peso invisible durante doce años y verlo por primera vez con forma y medidas precisas. El peso no desaparece. Pero cambia la manera de cargarlo.

A las seis y cuarto abrió el archivo de audio de cuarenta y dos minutos.

Lo había escuchado tres veces completo desde que Fernanda se lo había descrito. Esta vez lo escuchó con los auriculares puestos y con el expediente abierto al lado, deteniéndolo cada vez que el hombre sin nombre mencionaba algo que ahora, con lo que sabía sobre Ruvalcaba Laris y Salcedo Prieto, sonaba diferente de como había sonado antes.

El hombre hablaba con Arcadia con la familiaridad de quien la conocía desde antes del mecanismo. Le decía usted pero le preguntaba por cosas personales, por su madre en Culiacán, por un sobrino que estudiaba en Monterrey. No era la distancia de una fuente con una investigadora. Era la distancia de alguien que había elegido hablar y que eligió hacerlo con Arcadia porque Arcadia representaba para él alguna forma de confianza que el resto del sistema ya no le ofrecía.

En el minuto veintidós, el hombre decía: *yo entré a esto pensando que era una operación de seguridad legítima. Que los contratos eran irregulares en la*

forma pero que el fondo era proteger infraestructura nacional. Tardé dos años en entender que el fondo era otro.

En el minuto treinta y uno decía: el que coordina todo no es quien usted cree. No es Ruvalcaba. Ruvalcaba es la memoria del sistema, el que sabe de dónde viene. Pero quien lo opera ahora es alguien que usted ve todos los días y que nadie vería ahí porque su trabajo es precisamente que nadie lo vea ahí.

Monterde detuvo el audio en ese punto.

Alguien que usted ve todos los días.

Lo había escuchado antes. Pero antes no tenía el expediente completo. Antes no tenía el memorando de 2013 ni el análisis de la fotografía de Gustavo Almeida ni el código BSP en tres sistemas federales distintos. Antes no había leído por cuarta vez la lista de once nombres y encontrado al décimo con la claridad de las cosas que estaban ahí desde el principio.

Alguien que usted ve todos los días.

Arcadia trabajaba en la Presidencia de la República. Las personas que veía todos los días eran las personas que trabajaban en la Presidencia de la República.

Salcedo Prieto trabajaba en la Presidencia de la República.

Monterde terminó el café, que ya estaba frío, y llamó a Fernanda a las siete menos diez.

—Necesito que hoy hagamos algo que no hemos hecho todavía —dijo cuando ella contestó.

—¿Qué cosa?

—Necesito el expediente completo de Bernardo Salcedo Prieto. No el expediente de personal de la Presidencia, que ya tenemos. El expediente real: propiedades a su nombre o a nombre de familiares, cuentas bancarias declaradas y no declaradas, sociedades mercantiles donde aparezca como socio o apoderado, viajes al extranjero en los últimos cinco años, y cualquier registro de comunicación con Ruvalcaba Laris anterior a la constitución de la consultoría en 2021.

—Eso requiere acceso a sistemas de la UIF y de la Secretaría de Hacienda que yo no tengo de manera directa.

—¿Puedes conseguirlo por vía informal?

Pausa breve.

—Tengo un contacto en la Unidad de Inteligencia Financiera que me debe un favor desde el caso de Tamaulipas. Pero si lo uso para esto y alguien lo detecta, el favor desaparece y el contacto también.

—Lo sé. Úsalo de todas formas.

Fernanda no preguntó si estaba seguro. En dos años había aprendido que cuando Monterde decía algo con ese tono, la seguridad estaba implícita.

—Dame hasta mediodía —dijo.

Monterde llegó a la Fiscalía a las ocho. Antes de subir al séptimo piso pasó por el despacho de Sandoval Meza y le entregó el reporte de avance semanal que le correspondía presentar ese día: dos páginas con información real pero incompleta, redactadas con el cuidado de quien construye una superficie que resiste el tacto sin revelar lo que hay debajo. Las líneas de investigación sobre el personal técnico de Palacio, las inconsistencias del informe forense oficial, las gestiones de acceso a registros de viaje. Todo verificable, todo insuficiente para construir ninguna conclusión que Sandoval no hubiera ya anticipado y administrado.

Sandoval leyó el reporte con la atención de quien busca algo específico.

—¿Avances sobre los operadores de oposición? —preguntó, sin levantar la vista del papel.

—La línea está abierta —dijo Monterde—. Sin resultados concretos todavía.

Sandoval dejó el reporte sobre el escritorio.

—El fiscal preguntó ayer por el caso —dijo—. Quiere una resolución antes del periodo ordinario de sesiones. Que empieza en dos semanas.

—Entiendo.

—¿Puede tener algo concreto para entonces?

—Puedo tener lo que la evidencia permita tener para entonces.

Sandoval lo miró con la expresión de quien ha agotado ya varios idiomas para decir lo mismo y considera si vale la pena intentar uno más.

—Monterde —dijo—. La plaza de Monterrey sigue disponible.

—Lo sé —dijo Monterde, y salió.

En el séptimo piso, Fernanda ya estaba en su escritorio con auriculares y tres pantallas activas. Le hizo una seña cuando lo vio entrar: espera. Siguió trabajando durante veinte minutos más mientras Monterde revisaba los mensajes del teléfono de prepago. Los diputados Espinoza y Matus habían enviado el material fotográfico del expediente que habían recibido de Arcadia: cuarenta y siete imágenes, organizadas en el mismo orden que las carpetas de Xochimilco. Era esencialmente el mismo material, con una diferencia: en la copia de los diputados había una hoja que no estaba en el archivo de Xochimilco. Una hoja escrita a mano, con la letra apretada y vertical de Arcadia, que decía:

Para quien reciba esto: el nombre completo del Licenciado Cero es Salcedo Prieto, Bernardo. Asesor de seguridad nacional. Presidencia de la República. Tiene acceso a todo. Es quien coordina. Ruvalcaba es la historia. Salcedo es el presente. El audio lo confirma si saben buscar en el minuto 31.

Monterde leyó esa hoja tres veces.

Arcadia lo había sabido. Había sabido el nombre desde antes de distribuir el expediente. Lo había puesto en la copia de los diputados, no en el archivo de Xochimilco, quizás porque calculó que la copia legislativa era la que tenía mayor probabilidad de sobrevivir a cualquier intervención sobre el expediente

judicial. O quizás porque sabía que si ponía el nombre en el archivo de Xochimilco, ese archivo era el primero que iban a intervenir.

Lo que Arcadia no había calculado era que la investigación llegaría al nombre por sus propios medios, desde el código BSP y la lista de once y el audio de cuarenta y dos minutos. Que no iba a necesitar que nadie le dijera el nombre porque el nombre estaba ya en el expediente, esperando a que alguien leyera la lista por cuarta vez con todo el contexto presente.

Fernanda se quitó los auriculares.

—Tengo lo de la UIF —dijo.

—Cuéntame.

—Bernardo Salcedo Prieto tiene tres propiedades a su nombre en la Ciudad de México, todas declaradas, todas consistentes con su salario de servidor público de nivel superior. Hasta ahí, nada. —Hizo una pausa—. Pero tiene una hermana. Claudia Salcedo Prieto, cuarenta y un años, sin empleo formal registrado en los últimos seis años. La hermana tiene a su nombre dos propiedades en Guadalajara, una en Puerto Vallarta y una cuenta en un banco con sede en Panamá que reporta en promedio un saldo mensual de cuatrocientos mil dólares. Los depósitos en esa cuenta tienen un patrón de regularidad que la UIF clasificó hace tres años como de interés para análisis, pero el expediente de análisis fue cerrado administrativamente sin resolución.

—¿Cerrado por quién?

—Por el subdirector de análisis de la UIF en turno en ese momento. Que renunció seis meses después y ahora trabaja como director de cumplimiento en una empresa financiera privada.

Monterde anotó.

—¿Hay registro de comunicación entre Salcedo Prieto y Ruvalcaba Laris antes de 2021?

—Sí. En los registros de acceso al edificio de la Subsecretaría de Gobernación entre 2014 y 2016, Bernardo Salcedo Prieto aparece como visitante frecuente de la Dirección de Análisis de Inteligencia Interior. Dieciséis visitas en dos años, todas en horario de tarde, ninguna con registro de reunión en la agenda oficial de Ruvalcaba Laris.

—¿Qué cargo tenía Salcedo en ese momento?

—Asesor técnico en la Coordinación de Seguridad Nacional de la Presidencia. El mismo cargo que tiene ahora, aunque el nombre de la coordinación cambió con el nuevo gobierno. Lleva once años en el mismo puesto con distintos gobiernos.

Once años. Era lo que hacía invisible a alguien en el sistema mexicano: no el poder, sino la permanencia. Los funcionarios que duraban a través de los cambios de gobierno eran los que el sistema protegía porque eran los que el sistema necesitaba para seguir siendo el mismo sistema independientemente de quién ganara las elecciones.

Salcedo Prieto había sobrevivido a tres presidentes. Había construido su acceso durante once años. Y había usado ese acceso, durante al menos los últimos tres, para operar el mecanismo del Licenciado Cero desde el centro de la institución que tenía por mandato combatirlo.

—Necesito que todo esto entre al expediente formal hoy —dijo Monterde—. Con cadena de custodia completa y con la fuente de cada dato correctamente documentada. No quiero nada que pueda ser descalificado por la forma.

—¿Y la fuente de la UIF?

Monterde pensó un momento.

—La información de la UIF la vamos a corroborar por vías formales. Pide acceso institucional a los mismos registros que consultó tu contacto. Va a tardar más, puede que nos pongan obstáculos, pero cuando llegue va a ser prueba procesal limpia en lugar de dato de inteligencia.

—¿Y mientras esperamos la vía formal?

—Mientras esperamos la vía formal, usamos lo que tenemos para saber qué buscar. La información informal nos da la dirección. La formal nos da la prueba.

Fernanda asintió y giró hacia su pantalla.

Monterde tomó su teléfono y llamó a Valentina Camarillo.

—Necesito que investigue algo —dijo cuando ella contestó.

—¿Qué cosa?

—La zona franca de Los Mochis. Específicamente el contrato de seguridad perimetral que tiene con Consorcio de Protección Avanzada. Quiero saber quién firmó ese contrato del lado de la administración de la zona franca, qué auditores externos han revisado las instalaciones en los últimos dos años y si hay algún registro periodístico de irregularidades en el volumen de importaciones procesadas.

—Hay un reportaje del Banco de México —dijo Valentina de inmediato.

—Lo sé. Quiero más que eso. Quiero fuentes en la zona franca, si las tiene o puede conseguirlas.

—Dame dos días.

—Tiene uno.

Silencio breve.

—Dame uno y medio.

—De acuerdo.

Colgó. A las dos de la tarde recibió una llamada de un número que no conocía, de Sinaloa. Lo dejó sonar. No volvió a sonar. Veinte minutos después llegó un mensaje de texto desde el mismo número: *Soy Rodrigo Almeida. Estoy en Mazatlán. Quiero declarar. Necesito garantías.*

Monterde respondió en diez segundos: *Las garantías dependen de lo que declare. Dígame dónde está exactamente y yo voy.*

La respuesta tardó tres minutos: *Hotel Siesta, habitación 14. Mañana en la mañana. Venga solo.*

Monterde miró el mensaje durante un momento. Luego miró a Fernanda.

—Mañana voy a Mazatlán.

Fernanda lo miró.

—¿Solo?

—Solo.

—Eso no es prudente.

—No —dijo Monterde—. Pero es lo que hay.

Pasó el resto de la tarde construyendo el expediente formal con Fernanda, organizando cada documento, cada registro, cada dato en la secuencia que resistiría el escrutinio de un juez federal que no quisiera verlo pero que no pudiera ignorarlo. Era un trabajo minucioso y lento que Monterde hacía con la misma atención que ponía en cualquier expediente, sin permitirse el error de creer que porque el caso era urgente podía ser descuidado.

A las ocho de la noche el expediente tenía ciento cuarenta y tres fojas. Le faltaban las declaraciones testimoniales de Buentello, el general Bautista Noriega y, si las cosas salían bien en Mazatlán, de Rodrigo Almeida. Y le faltaba el centro: la prueba directa que conectara a Salcedo Prieto con el crimen de Arcadia, no solo con el mecanismo que lo había hecho posible.

Esa prueba podía estar en Mazatlán.

O podía estar en el minuto treinta y uno del audio de cuarenta y dos minutos, que todavía no habían podido atribuir a ninguna voz identificada porque el análisis de voz requería una muestra de comparación que no tenían.

Salió de la Fiscalía a las ocho y media, recogió a Griselda, la dejó con la señora Amparo con instrucciones de que podía ser más de un día, preparó su bolsa de viaje con lo mínimo necesario y reservó un vuelo de las seis de la mañana a Mazatlán desde el teléfono de prepago, pagado con una tarjeta de débito personal que no tenía ninguna relación con su identidad institucional.

Antes de dormirse, tomó el teléfono y le envió un mensaje al notario Cuéllar: *Salgo de viaje mañana temprano. El plazo de cuarenta y ocho horas se renueva desde las seis de la mañana. Si no recibe confirmación mía antes de las seis de la tarde del miércoles, proceda según las instrucciones.*

La respuesta llegó en dos minutos: *Entendido. Buen viaje.*

Monterde dejó el teléfono sobre la mesita de noche, cerró los ojos y se durmió en siete minutos, que era el tiempo que tardaba cuando estaba suficientemente cansado para que el cerebro dejara de argumentar.

Afuera, la ciudad seguía siendo la ciudad.

Adentro, el expediente seguía siendo el expediente.

Y en algún hotel de Mazatlán, en la habitación catorce, un técnico de veintinueve años con una deuda pagada y una miscelánea en Iztapalapa esperaba la mañana con el tipo de miedo que produce saber algo que uno no puede seguir callando y que tampoco puede decir sin que le cueste algo que todavía no sabe exactamente cuánto es.

CAPÍTULO 11

La identidad del Licenciado Cero

Mazatlán · FGR · Ciudad de México, 27 de marzo de 2025

El vuelo aterrizó en Mazatlán a las siete y cuarto de la mañana con el sol ya encima del mar y ese olor a sal y a humedad que tienen los puertos del Pacífico mexicano, un olor que no se parece a ningún otro y que Monterde reconoció desde la escalerilla del avión porque lo había respirado una vez antes, veinte años atrás, en un viaje de trabajo que ahora no recordaba por qué había hecho pero sí recordaba ese olor.

Tomó un taxi del aeropuerto al centro sin dar el nombre del hotel. Le pidió al taxista que lo dejara en el malecón, caminó cuatro cuadras hacia el norte y luego dobló hacia el interior tres cuadras más hasta llegar al Hotel Siesta, que era un edificio de dos pisos color ocre con macetas de buganvilia en los balcones y una recepcionista que no levantó la vista de su teléfono cuando él entró.

No se registró. Subió directamente al primer piso y tocó la puerta de la habitación 14.

Silencio. Luego pasos. Luego la voz de un hombre joven preguntando quién era.

—Monterde —dijo.

La puerta se abrió.

Rodrigo Almeida Bravo era más joven de lo que Monterde había imaginado a partir de su expediente: veintinueve años que en persona parecían veinticinco, con la cara sin afeitar de quien lleva días sin acceso a sus rutinas normales y los ojos de quien ha dormido mal durante el tiempo suficiente para que el insomnio empiece a tener forma propia. Llevaba una camiseta gris, jeans, tenis sin calcetines. Sobre la cama había una bolsa de plástico con ropa y un teléfono desechable sobre la mesita de noche.

La habitación olía a cigarro aunque no había cenicero, lo cual significaba que Rodrigo fumaba por la ventana y que llevaba suficientes días ahí como para que el olor se hubiera instalado en las cortinas.

Monterde entró. Rodrigo cerró la puerta y se quedó de pie junto a ella, con la espalda contra la pared, en la postura específica de quien necesita tener cerca la salida aunque no tenga intención de usarla todavía.

—Siéntese —dijo Monterde, señalando la única silla del cuarto.

Rodrigo no se sentó.

—¿Vino solo? —preguntó.

—Solo.

—¿Nadie sabe que está aquí?

—Nadie en la Fiscalía. Una persona fuera de ella sabe que estoy en Sinaloa.

Rodrigo procesó eso un momento y luego se sentó en el borde de la cama, no en la silla.

Monterde se quedó de pie.

—Empecemos por el principio —dijo—. El nodo 7-C.

Rodrigo bajó la vista al suelo durante un segundo. Luego la levantó.

—El nodo 7-C no falló —dijo—. Nunca falla. Es el nodo más estable del sistema porque tiene triple redundancia desde que lo instalaron. Cualquier técnico del sistema lo sabe.

—¿Por qué firmó el informe entonces?

—Porque me lo pidieron. —Pausa—. Porque me lo pidió mi jefe.

—¿Quién es su jefe directo?

—El coordinador de sistemas de Palacio. Se llama Héctor Pizarro Andrade. Lleva doce años en el cargo.

Monterde anotó el nombre. No estaba en ninguna de las listas que habían construido. Era un nombre nuevo, y los nombres nuevos a estas alturas del expediente significaban capas que todavía no había alcanzado a ver.

—¿Cómo se lo pidió?

—Me llamó esa misma mañana, el catorce de marzo, antes de que llegara al trabajo. A las siete y media. Me dijo que había habido una interrupción de señal en la cámara 23 entre las cuatro y las cuatro diecisiete y que necesitaba que yo redactara el informe técnico atribuyéndola a una falla del nodo 7-C. Me dijo que era una cuestión de protocolo, que a veces pasaban esas cosas y que el procedimiento era documentarlas de esa manera para evitar alarmas innecesarias.

—¿Le creyó?

Rodrigo lo miró.

—No —dijo—. Pero me dijo que si redactaba el informe iba a haber un bono de fin de año y que si no lo redactaba iba a haber una revisión de mi expediente de personal que encontraría irregularidades en mis horas de acceso al sistema durante los últimos seis meses.

—¿Había irregularidades reales?

—Nada grave. Accesos fuera de horario que cualquier técnico hace cuando hay mantenimiento urgente. Nada que no pudiera explicar. Pero en este sistema, si alguien quiere encontrar algo en tu expediente, lo encuentra aunque no esté.

Monterde asintió. Era la mecánica más antigua y más eficiente del sistema: no necesitas que alguien sea culpable para amenazarlo con serlo. Solo necesitas que sepa que la diferencia entre ser culpable y ser inocente la decide quien tiene acceso a los registros.

—¿Y el bono y la amenaza vinieron del coordinador Pizarro?

—Sí. Solo de él. Nunca hablé con nadie más sobre eso.

—¿Conoce usted a Bernardo Salcedo Prieto?

Rodrigo dudó. Era una duda diferente a las anteriores: no la duda de quien busca palabras sino la de quien evalúa consecuencias.

—Lo he visto en el Palacio —dijo finalmente—. Dos o tres veces. No he hablado con él directamente. Pero una de las veces que lo vi fue en una reunión con Pizarro, en la oficina de Pizarro, hace unos ocho meses. Yo pasé por ahí, estaban con la puerta abierta, no sé de qué hablaban.

—¿Lo reconoció en ese momento?

—No. Lo reconocí después, cuando empezó todo esto y busqué su nombre en internet. Encontré una fotografía de una entrega de reconocimientos en la Presidencia y ahí estaba.

—¿Pizarro y Salcedo se conocen.

—Eso parece.

Monterde guardó la libreta.

—Rodrigo. Necesito que me diga algo con toda la claridad que pueda. El informe que firmó establece que la interrupción de señal fue una falla técnica espontánea. ¿Puede declarar ante un juez federal que eso es falso y que lo firmó bajo presión de su superior directo?

Rodrigo Almeida miró el suelo otra vez. Esta vez el silencio duró más.

—¿Qué pasa con Pizarro si yo declaro? —preguntó.

—Eso depende de lo que Pizarro haya hecho y de lo que se pueda probar. Pero su declaración no es contra Pizarro: es sobre el informe. Usted no firmó porque quiso. Firmó porque lo presionaron. Eso tiene nombre jurídico y tiene consecuencias jurídicas distintas para usted y para él.

—¿Me van a proteger?

—Puedo gestionar una medida de protección de testigo si su declaración entra formalmente al expediente. No puedo garantizarle que el proceso va a ser rápido ni que va a ser cómodo. Puedo garantizarle que si declara y la declaración está bien construida, usted tiene más protección con el expediente abierto que con el expediente cerrado. Un expediente cerrado no necesita testigos vivos. Un expediente abierto sí.

Era una manera brutal de decirlo. Era también la única manera honesta.

Rodrigo Almeida lo miró durante un momento largo. Luego asintió.

—Declaro —dijo.

Monterde pasó las siguientes dos horas tomando la declaración de Rodrigo Almeida en la habitación 14 del Hotel Siesta, con el teléfono de prepago grabando en audio y la libreta recogiendo cada detalle verificable: fechas, horas, nombres, la secuencia exacta de la llamada de Pizarro, el contenido preciso de lo que le dijo, la forma en que Rodrigo había redactado el informe sabiendo que era falso, la renuncia dos días después porque no había podido quedarse en un edificio donde todos fingían que no había ocurrido nada.

Al final de la declaración, Rodrigo dijo algo que Monterde no había anticipado.

—Hay algo más —dijo—. Algo que no está en ningún expediente.

Monterde esperó.

—La noche del trece al catorce de marzo, antes de que ocurriera lo que ocurrió, yo estaba de turno en el área técnica. Turno de madrugada, hasta las seis de la mañana. A las tres y cincuenta de la madrugada, diez minutos después de que la cámara 23 registrara a la licenciada Henestrosa caminando por el corredor, recibí un acceso remoto al sistema de mi terminal. No lo pedí yo. Entró desde fuera. Alguien con credenciales de administrador tomó el control de mi terminal de manera remota, navegó hasta el panel de gestión de la cámara 23 y ejecutó la interrupción de señal desde ahí.

Monterde lo miró.

—¿Desde su terminal?

—Desde mi terminal. Que en ese momento estaba activa con mi sesión iniciada porque yo estaba trabajando. Lo que significa que en los registros del sistema, si alguien buscara el origen del acceso que produjo la interrupción, encontraría mi terminal. Mi nombre de usuario. Mi sesión.

—¿Eso estaba diseñado para incriminarlo a usted?

—O para que yo fuera el primer sospechoso si alguien investigaba. O para que yo tuviera miedo suficiente para no hablar. —Rodrigo miró sus manos—. Las dos cosas funcionaron durante un tiempo.

Monterde escribió en la libreta: *Acceso remoto a terminal de Almeida a las 3:50 AM. Sesión activa de Almeida usada para ejecutar interrupción. Registro apunta a Almeida, no al acceso remoto real.*

Era el mecanismo completo. Alguien con credenciales de administrador, desde una terminal remota, había tomado control de la sesión activa de Rodrigo Almeida para ejecutar la interrupción de señal, de manera que los registros internos del sistema mostraran a Almeida como el origen del acceso. Pizarro le había pedido a Rodrigo que firmara el informe de falla técnica no solo para cubrir la interrupción sino para asegurarse de que si alguna vez se investigaba el registro de accesos, Rodrigo apareciera como responsable técnico voluntario y no como víctima de una suplantación de sesión.

Era una arquitectura de culpabilidad construida en dos capas: la capa técnica, que señalaba a Rodrigo en los registros, y la capa documental, que lo hacía firmar la narrativa oficial. Si alguna vez se investigaba, Rodrigo era el culpable perfecto: el técnico con acceso que había certificado la falla.

Y el acceso remoto real, el que había ejecutado la operación desde las credenciales de administrador, apuntaba al único nombre que tenía acceso de administrador remoto al sistema de Palacio a través del contrato de mantenimiento.

Servicios Especializados Balam.

Cuyo contrato era gestionado, técnicamente, por el asesor de seguridad nacional adscrito a la Presidencia de la República.

Bernardo Salcedo Prieto.

—¿Hay registro de ese acceso remoto en algún sistema? —preguntó Monterde.

—En mi terminal sí. Los registros de actividad de sesión guardan automáticamente cada operación con marca de tiempo. Pero yo no tengo acceso a esos registros desde aquí. Están en el servidor de Palacio.

—¿Puedo obtenerlos con una orden de cateo sobre el servidor?

—Con una orden de cateo sobre el servidor específico donde se almacenan los registros de actividad de sesión del área técnica, sí. El servidor se llama SRV-TEC-03 y está en el sótano del edificio B de Palacio.

Monterde anotó el nombre del servidor con la precisión de quien sabe que ese dato va a ser el eje de la siguiente fase del expediente.

Salió del hotel a las once y cuarto con la grabación de la declaración, cuatro páginas de notas y el nombre de un servidor en el sótano de un edificio que era también la sede del gobierno de la República.

En el taxi de vuelta al aeropuerto llamó a Fernanda.

—Necesito una orden de cateo —dijo—. Para un servidor específico en Palacio Nacional. Te mando los detalles por mensaje. Y necesito que la solicites al juez Bermúdez, no a ningún otro.

—¿Por qué Bermúdez?

—Porque es el único juez federal en turno esta semana que no ha recibido ninguna comunicación de Sandoval Meza en los últimos treinta días según el registro de llamadas institucionales que revisamos el lunes.

Fernanda tardó un segundo en responder.

—De acuerdo. ¿Cuándo la necesitas?

—Antes de las seis de la tarde.

—Eso es muy poco tiempo para una orden de cateo sobre infraestructura de Palacio Nacional.

—Lo sé. Por eso es Bermúdez. Él entiende que hay casos que no pueden esperar los tiempos normales.

Colgó y envió el mensaje con los datos del servidor. Luego llamó al notario Cuéllar.

—Sigo en pie —dijo cuando Cuéllar contestó—. Confirmando presencia. Renueve el plazo desde este momento.

—Renovado —dijo Cuéllar—. ¿Todo bien?

—Mejor que ayer —dijo Monterde.

El vuelo de regreso a la Ciudad de México salió a la una de la tarde. Monterde durmió cuarenta minutos en el avión, que era todo el tiempo que la tensión del día le permitía ceder al sueño, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional a las dos y cuarto con el sol de la tarde encima y la ciudad extendiéndose hacia todos los puntos cardinales con esa inmensidad que desde el aire siempre parece imposible y desde adentro siempre parece normal.

Fernanda lo llamó cuando estaba en el taxi hacia la Fiscalía.

—El juez Bermúdez firmó la orden —dijo, y en su voz había algo que no era exactamente alivio pero sí era el reconocimiento de que algo importante acababa de ocurrir en la dirección correcta—. La tengo aquí. ¿Cuándo ejecutamos el cateo?

—Hoy —dijo Monterde—. Esta tarde. Antes de que alguien en Palacio sepa que existe la orden.

—¿Cómo entramos sin avisar a la coordinación de seguridad de Palacio?

—La orden no requiere aviso previo. Requiere identificación en la entrada y acceso inmediato al área específica señalada. Si alguien intenta obstaculizar la ejecución de una orden judicial firmada, eso también es delito. —Hizo una pausa—. Llama al juez Bermúdez y pídele que designe a dos funcionarios de su juzgado para que nos acompañen en la ejecución. Con ellos presentes, nadie va a intentar detenerlos.

—¿Y Sandoval?

—Sandoval se entera cuando ya estemos adentro.

Llegó a la Fiscalía a las tres menos cuarto. Tomó diez minutos para revisar el estado del expediente con Fernanda, otros diez para preparar la documentación que necesitarían en Palacio, y a las tres y veinte salieron juntos hacia el Zócalo con la orden de cateo en el portafolio de Fernanda y dos funcionarios del juzgado de Bermúdez esperándolos en la esquina de calle Moneda y Correo Mayor.

El guardia en la entrada de Palacio los hizo esperar cuatro minutos antes de llamar a su superior. El superior llegó, leyó la orden, hizo una llamada que Monterde no pudo escuchar pero que tomó menos de dos minutos, y los dejó pasar con la expresión de quien ha recibido una instrucción que no esperaba y que no le gusta pero que no puede ignorar.

El servidor SRV-TEC-03 estaba en el sótano del edificio B, en una sala de equipos con temperatura controlada y olor a plástico caliente que tienen todas las salas de servidores del mundo. Fernanda conectó su equipo al servidor bajo la supervisión de los dos funcionarios del juzgado y comenzó la

extracción de los registros de actividad de sesión del área técnica correspondientes a la madrugada del catorce de marzo.

Tardó veintidós minutos.

Los registros existían. Estaban completos. Nadie los había borrado porque nadie había previsto que alguien fuera a buscarlos ahí, en ese servidor específico, con el nombre exacto de la sesión de Rodrigo Almeida y el rango de tiempo preciso de las tres cincuenta a las cuatro diecisiete de la mañana.

Y los registros mostraban, con la exactitud de los sistemas que no mienten porque no pueden mentir, lo siguiente: a las 3:50:44 de la mañana del catorce de marzo, la sesión activa del usuario R.ALMEIDA en la terminal TRM-TEC-07 fue accedida de manera remota desde una dirección IP externa al sistema de Palacio Nacional. La dirección IP correspondía a un servidor de acceso remoto registrado a nombre de Servicios Especializados Balam S.A. de C.V. Desde esa sesión, durante diecinueve minutos con cuatro segundos, se ejecutaron once comandos en el panel de gestión de la cámara 23. El undécimo comando, ejecutado a las 4:02:07, activó la interrupción de señal. El duodécimo, a las 4:17:11, la desactivó.

La sesión remota se cerró a las 4:17:22.

Dos segundos después la cámara 23 volvió a transmitir.

Fernanda extrajo los registros completos, los firmó digitalmente con su certificado profesional en presencia de los funcionarios del juzgado, y los guardó en tres copias simultáneas: una para el expediente formal, una para el notario Cuéllar, una para un servidor externo cifrado cuya ubicación solo ella y Monterde conocían.

Salieron de Palacio Nacional a las cinco y diez de la tarde con la prueba que conectaba a Servicios Especializados Balam con la interrupción de señal de la cámara 23 en el momento exacto en que Arcadia Henestrosa moría en el corredor 14-B.

En la calle, caminando hacia el Tsuru estacionado en República de Argentina, Fernanda dijo:

—Ya está.

—Todavía no —dijo Monterde.

Fernanda lo miró.

—Tenemos la IP de Balam en los registros del servidor. Tenemos el análisis de Buentello sobre la causa real de muerte. Tenemos el expediente de Arcadia con el nombre de Salcedo Prieto de su propio puño. Tenemos la declaración de Rodrigo Almeida sobre la presión de Pizarro. Tenemos el memorando de 2013 con la firma de Ruvalcaba. Tenemos el código BSP creando la identidad falsa en tres sistemas. —Fernanda enumeró cada punto con la precisión de quien lleva días construyendo una lista y sabe exactamente cuántos elementos tiene—. ¿Qué falta?

—Falta la voz —dijo Monterde.

Fernanda entendió en un segundo.

—El audio de cuarenta y dos minutos. El hombre sin nombre.

—Si el hombre en ese audio es quien creo que es, su voz identificada convierte el audio en la prueba más directa que tenemos de que alguien conocedor del mecanismo desde adentro confirmó, por sus propias palabras, que el Licenciado Cero es Salcedo Prieto. Sin identificación de voz, el audio es un elemento de contexto. Con identificación, es testimonio.

—¿Quién crees que es?

Monterde abrió la puerta del Tsuru.

—Evaristo Villanueva Hurtado —dijo—. El propietario de la bodega de Xochimilco. El hombre que Arcadia llamaba solo por iniciales. El que la conocía desde antes del mecanismo, que le preguntaba por su madre en Culiacán, que hablaba con la familiaridad de alguien que había estado adentro y había decidido salir por la única vía que le quedaba. —Hizo una pausa—. Necesito una muestra de voz de Villanueva para el análisis comparativo. Y necesito hablar con él.

—¿Sabe dónde está?

—La bodega de Xochimilco tiene su número de contacto en el registro mercantil. Llámalo esta noche. Dile que es urgente y que viene de parte de Arcadia.

Fernanda asintió.

Monterde arrancó el Tsuru y salió hacia la colonia Doctores por la calle Correo Mayor con el tráfico de la tarde encima y esa sensación que tenía a veces en los casos grandes de que la forma del caso estaba ya completa aunque todavía faltara el último trazo.

La IP de Balam en el servidor de Palacio era el trazo técnico. La voz de Villanueva era el trazo humano. Con los dos juntos, el expediente era lo que Arcadia había querido que fuera desde que empezó a construirlo dieciocho meses atrás: algo que no pudiera ser ignorado sin que el ignorarlo fuera también evidencia.

Pero había algo más. Algo que el expediente todavía no resolvía y que Monterde había estado postergando desde que el caso se lo puso enfrente.

Salcedo Prieto seguía en su oficina en la Presidencia de la República. Seguía teniendo acceso de nivel tres al sistema de videovigilancia de Palacio. Seguía siendo el responsable de seguridad digital de la institución donde había matado a una mujer y había estado a punto de matar, doce años antes, a otra.

Y Pizarro seguía siendo el coordinador de sistemas de Palacio. Y Ruvalcaba seguía siendo el consultor en seguridad con despacho en la colonia Polanco. Y Sandoval Meza seguía siendo su superior directa en la Fiscalía.

El expediente era la herramienta. Pero la herramienta solo funcionaba si se usaba de manera que el sistema no pudiera apagarla antes de que encendiera lo que tenía que encender.

Eso era lo que iba a decidir esta noche.

No qué hacer con el expediente. Eso ya lo sabía.

Cómo hacerlo de manera que la decisión no pudiera deshacerse.

Llegó a su departamento, calentó lo primero que encontró en el refrigerador, recogió a Griselda, se sirvió el mezcal de los viernes aunque era jueves, y se sentó en el sillón con la perra a sus pies y el expediente de ciento cuarenta y tres fojas, más la declaración de Rodrigo Almeida, más los registros del servidor SRV-TEC-03, extendiéndose en su mente con la claridad de las cosas que ya tienen forma completa y que solo esperan la mano que las ponga en el lugar donde deben estar.

El teléfono vibró.

Era Fernanda.

—Villanueva acepta reunirse —dijo—. Mañana en la mañana. En la bodega de Xochimilco.

—¿Qué dijo cuando mencionaste el nombre de Arcadia?

Pausa breve.

—Nada. Se quedó en silencio durante cinco segundos. Y luego dijo que sí.

Monterde dejó el teléfono sobre la mesa.

Cinco segundos de silencio cuando alguien menciona el nombre de una persona muerta que uno conocía. No era el silencio de quien no sabe quién es. Era el silencio de quien sabe demasiado bien quién era y todavía está aprendiendo a hablar de ella en pasado.

Mañana iba a escuchar esa voz en persona.

Y mañana iba a saber si el hombre que había hablado cuarenta y dos minutos con Arcadia Henestrosa tres meses antes de que la mataran era el mismo hombre que ahora esperaba en una bodega de Xochimilco con setenta y dos años y una culpa que había decidido, tarde pero no demasiado tarde, convertir en algo útil.

CAPÍTULO 12

Lo que se puede demostrar

Xochimilco · FGR · Ciudad de México, 28-29 de marzo de 2025

Evaristo Villanueva Hurtado tenía setenta y dos años y la complexión de quien en su juventud había trabajado con las manos y en su vejez había aprendido a trabajar con la cabeza sin perder del todo lo que las manos le habían enseñado. Era alto, de espaldas anchas que el tiempo había curvado levemente hacia adelante, con cabello blanco completo y unas manos que al

estrechar las de Monterde comunicaban que habían cargado cosas pesadas durante muchos años y que ya estaban cansadas de hacerlo.

Lo esperaba en la bodega de Xochimilco, en el espacio de doce metros cuadrados con el archivero vacío y la cámara apagada, sentado en la única silla como si hubiera llegado temprano para elegir el lugar donde se sentiría menos expuesto. Cuando Monterde entró, Villanueva lo miró durante un segundo con la evaluación directa de quien ha aprendido a leer personas rápido porque en algún momento de su vida esa habilidad fue la diferencia entre confiar en alguien y arrepentirse de haberlo hecho.

Fernanda se quedó afuera, en la nave principal, con instrucciones de no interrumpir salvo emergencia.

Monterde se sentó en el borde del archivero vacío, que era el único lugar disponible, y dejó pasar un momento antes de hablar.

—¿Cuánto tiempo la conocía? —preguntó.

Villanueva entendió que la pregunta era sobre Arcadia sin que hubiera sido necesario decirlo.

—Veintidós años —dijo—. La conocí cuando ella era pasante en la oficina del Ministerio Público en Culiacán y yo era proveedor de servicios logísticos para el gobierno del estado. Éramos del mismo barrio. Nos conocíamos de vista desde chicos, pero nos hicimos amigos de adultos. —Hizo una pausa—. Así empieza todo en Sinaloa. Con conocidos que se vuelven algo más que conocidos porque el estado es grande en el mapa y pequeño en las personas.

—¿Cuándo supo que estaba en peligro?

—Cuando me llamó en octubre y me dijo que necesitaba un lugar para guardar algo. No me dijo que era. Le presté la bodega sin preguntar porque en veintidós años nunca me había pedido nada que no fuera razonable. —Villanueva miró sus manos—. Cuando me dijo que iba a instalar su propia cámara para saber si alguien tocaba el archivero, entendí que lo que guardaba era serio. No me lo confirmó hasta noviembre, cuando vino a verme aquí y me contó lo que llevaba documentando.

—¿Le contó el nombre de Salcedo Prieto?

—Sí.

—¿Lo conocía usted?

Villanueva tardó en responder.

—A Salcedo no. A Ruvalcaba sí. Lo conocí hace muchos años, cuando él era funcionario de Gobernación y yo tenía contratos de logística con el gobierno federal. Ruvalcaba era de los que sabían cómo funcionaba el sistema por dentro y sabían cómo usarlo. —Hizo una pausa—. Yo usé ese conocimiento durante un tiempo. No en los niveles que el expediente de Arcadia documenta. Pero lo usé. —Lo miró directamente—. Por eso grabé la conversación de noviembre. Porque Arcadia me pidió que lo hiciera y porque

yo sabía que si algo le pasaba a ella, esa grabación iba a ser lo más cercano a un testigo que el caso iba a tener.

—¿Sabía que ella estaba en peligro real?

—Lo supe en noviembre. —La voz de Villanueva no cambió de tono pero algo en ella se hizo más densa, como cuando un río llega a la parte donde el cauce se estrecha y el agua tiene que moverse con más fuerza en menos espacio—. Ella había ido a ver a Ruvalcaba. Me lo contó esa noche. Le había dicho que tenía el expediente completo y que si no daba marcha atrás al mecanismo, lo haría público. Ruvalcaba le sonrió y le dijo que lo pensaría. Arcadia no le creyó en ese momento. Yo tampoco le creí cuando me lo contó.

—¿Por qué no hizo nada entonces?

—Porque Arcadia no quería que hiciera nada. Me dijo que el expediente estaba distribuido, que había vías abiertas, que si algo le pasaba el sistema no iba a poder contenerlo. Me lo dijo con la serenidad de alguien que ha aceptado el riesgo y ha decidido seguir de todas formas. —Villanueva miró el archivero vacío—. Yo no soy un hombre valiente. Soy un hombre que tomó decisiones equivocadas durante años y que cuando tuvo la oportunidad de hacer algo correcto eligió hacerlo tarde. Eso no me hace bueno. Me hace menos malo de lo que podría haber sido.

Monterde lo escuchó sin juzgarlo, que era la única manera de escuchar a alguien que ya se estaba juzgando él mismo.

—Necesito que declare —dijo.

—Sé que lo necesita.

—¿Está dispuesto?

—Sí. Con una condición.

—¿Cuál.

—Que lo que yo hice, los años en que participé en los márgenes de lo que el expediente documenta, quede en el expediente como contexto de mi declaración y no como cargo separado contra mí. No le pido impunidad. Le pido que lo que declare sirva para lo que tiene que servir sin que se use para enterrarme a mí antes de que pueda decirlo.

Monterde lo miró.

—Eso no es una decisión que yo pueda tomar unilateralmente. Depende del juez y del fiscal que lleve el caso. Lo que sí puedo hacer es construir el expediente de manera que su declaración sea una pieza central y no un complemento, lo cual le da un valor procesal que el sistema tiene interés en preservar. Un testigo valioso es un testigo que se protege. Eso no es garantía, pero es la realidad de cómo funcionan los casos de este tipo.

Villanueva asintió.

—Es suficiente —dijo.

Monterde pasó la siguiente hora tomando la declaración de Evaristo Villanueva con el mismo rigor que había usado con Rodrigo Almeida en Mazatlán: fechas, nombres, la secuencia de hechos, el contexto de la relación con Arcadia, la reunión de noviembre, la grabación de audio. Al final, Villanueva le entregó su propio teléfono, un aparato de gama media con tres años de uso, y le dijo que en ese teléfono estaba la grabación original, sin editar, con todos los metadatos intactos.

Monterde lo guardó en la bolsa de evidencias que había traído consigo.

—Una última cosa —dijo—. En el audio, en el minuto treinta y uno, usted dice que el Licenciado Cero tiene protección en la Fiscalía. ¿A quién se refería?

Villanueva lo miró.

—A Sandoval Meza —dijo—. Arcadia me lo había dicho. Sandoval recibe información del mecanismo sobre el movimiento de las investigaciones que podrían afectarlo. No dinero. Información. Que en este sistema vale más.

Monterde guardó la libreta.

Salió de la bodega a las diez y cuarto. Fernanda lo esperaba en la nave principal con la expresión de quien ha estado conteniendo la curiosidad el tiempo suficiente para que ya no pueda contenerla más.

—¿Es él? —preguntó.

Monterde le entregó el teléfono de Villanueva.

—Manda esto al área técnica esta tarde para el análisis comparativo de voz. Y manda también una muestra del audio de cuarenta y dos minutos. Necesito la confirmación antes de esta noche.

—¿Por qué esta noche?

—Porque esta noche voy a armar el expediente final y mañana temprano lo voy a presentar.

Fernanda tomó el teléfono.

—¿A quién lo presentas si Sandoval está comprometida?

—No a Sandoval —dijo Monterde—. A tres lugares al mismo tiempo.

De vuelta en la Fiscalía, Monterde pasó el resto de la mañana y toda la tarde construyendo lo que en su mente había llamado desde el principio, sin nombrarlo, el expediente que no se puede ignorar. Era un concepto que había aprendido no de ningún manual jurídico sino de un fiscal viejo que había conocido en sus primeros años en la institución, un hombre de Oaxaca que llevaba treinta años resolviendo casos que nadie quería resolver y que una tarde, tomando café en la cantina frente a los juzgados federales, le había dicho: la única manera de que un caso sobreviva a las instituciones que quieren enterrarlo es que esté en tantos lugares al mismo tiempo que enterrarlo en uno no alcance para apagarlo en todos.

El expediente final tenía ciento ochenta y siete fojas. Incluía el informe de Buentello con las tres inconsistencias de la autopsia, el análisis forense digital

de Fernanda sobre la interrupción de señal, los registros del servidor SRV-TEC-03 con la IP de Balam y la secuencia de comandos, la declaración de Rodrigo Almeida sobre la presión de Pizarro, la declaración de Evaristo Villanueva con el audio de cuarenta y dos minutos como anexo, el memorando de 2013 con la firma de Ruvalcaba Laris autenticado por la subdirectora del Archivo General, el análisis pericial de la fotografía generada de Gustavo Almeida, los registros de la UIF sobre la hermana de Salcedo Prieto, los contratos de Balam con la zona franca de Los Mochis que Valentina había conseguido en un día y medio a través de una fuente en la administración portuaria, la hoja manuscrita de Arcadia con el nombre de Salcedo Prieto que los diputados habían enviado, y las dieciséis visitas de Salcedo Prieto al despacho de Ruvalcaba entre 2014 y 2016.

Era un expediente que no necesitaba retórica porque los hechos tenían su propia elocuencia cuando estaban ordenados con precisión suficiente.

A las seis de la tarde llegó el análisis comparativo de voz del área técnica: concordancia del noventa y tres punto siete por ciento entre la voz del hombre en el audio de cuarenta y dos minutos y la muestra de voz del teléfono de Evaristo Villanueva Hurtado. El margen de error del método era del cuatro por ciento. La concordancia era estadísticamente definitiva.

Monterde añadió el dictamen al expediente y lo numeró como foja ciento ochenta y ocho.

A las siete llamó al juez Bermúdez.

—Necesito verlo esta noche —dijo—. Tengo un expediente completo sobre el caso Henestrosa y necesito presentarlo ante usted antes de que circule por ningún otro conducto institucional.

El juez Bermúdez, que era un hombre de sesenta años con la reputación de alguien que había sobrevivido treinta años en el poder judicial federal sin deberle nada a nadie, tardó cuatro segundos en responder.

—A las nueve en mi despacho —dijo.

A las ocho y media, antes de salir hacia el juzgado, Monterde le envió un mensaje a Valentina Camarillo: *Mañana a las seis de la mañana. Café La Habana. Tenga listo el podcast.*

La respuesta llegó en un minuto: *Ahí estaré.*

Le envió un mensaje al notario Cuéllar: *El sobre puede abrirse si no recibo yo la instrucción de cerrarlo antes de las doce del mediodía de mañana. Las instancias de destino son las tres que ya conoce.*

La respuesta: *Entendido.*

Le envió un mensaje a los diputados Espinoza y Matus: *Mañana en la mañana van a recibir material. Úsenlo en cuanto lo tengan.*

La respuesta de Matus llegó primero: *Esperando.*

Y le envió un mensaje a Fernanda, que estaba en la sala de al lado terminando de imprimir las copias del expediente: *Cuatro copias. Una para*

Bermúdez. Una para el órgano interno de control de la Presidencia. Una para el notario. Una de reserva.

Fernanda respondió con un solo carácter: ✓

Monterde se puso el saco, tomó su portafolio con la copia para el juez, y salió al pasillo.

En el elevador, bajando, pensó en lo que iba a ocurrir en las próximas horas. El juez Bermúdez iba a leer el expediente esa noche. Si lo encontraba suficiente, emitiría las órdenes de aprehensión antes del amanecer. Si pedía más tiempo, Monterde tendría que decidir si esperar o activar el mecanismo de distribución de todas formas, asumiendo que el expediente tendría que sobrevivir sin la cobertura de una orden judicial todavía activa.

El órgano interno de control de la Presidencia era el comodín más impredecible: podía actuar con independencia o podía enterrar el expediente en su propia burocracia. Pero un expediente presentado simultáneamente ante un juez federal y ante el órgano interno de la Presidencia era un expediente que la Presidencia no podía ignorar sin que el ignorarlo quedara registrado en dos instituciones distintas.

Valentina Camarillo podía publicar antes de que las órdenes de aprehensión existieran o después. Monterde había decidido que era después: quería que el sistema tuviera una oportunidad de actuar antes de que la presión pública lo obligara a actuar, porque la diferencia entre actuar por convicción institucional y actuar por presión mediática era la diferencia entre un proceso que se sostiene y uno que se derrumba en el primer contraataque jurídico.

Pero si el sistema no actuaba antes de que Valentina publicara, la publicación era la última garantía.

Eso era lo que el fiscal viejo de Oaxaca le había enseñado sin saberlo, tomando café en la cantina frente a los juzgados: que en los casos que el sistema quiere enterrar, la única protección real es que el caso exista en tantos lugares al mismo tiempo que ninguno de esos lugares pueda ser el último.

El juez Bermúdez lo recibió a las nueve en punto en su despacho del Palacio de Justicia Federal, en la calle Siempre Viva de la colonia Ampliación Granada. Era un hombre que no hacía perder el tiempo a nadie porque entendía que el tiempo de un juez y el tiempo de un caso no son la misma cosa y que confundirlos es el error que produce las injusticias que él había pasado treinta años intentando no producir.

Monterde le explicó el expediente en veinte minutos, siguiendo el orden cronológico del caso y señalando las fojas relevantes sin pausa para el dramatismo. Bermúdez leyó en paralelo, pasando páginas con la velocidad de quien lee expedientes desde hace treinta años y sabe exactamente dónde está la información que importa.

Cuando Monterde terminó, el juez cerró el expediente y lo dejó sobre su escritorio.

—¿Tiene usted acceso institucional completo a todo lo que está aquí? —preguntó.

—Todo el material fue obtenido mediante procedimientos legales o declaraciones voluntarias de testigos. La cadena de custodia está documentada en cada foja.

—¿La información de la UIF?

—Fue solicitada formalmente. La respuesta formal todavía está en proceso. Lo que está en el expediente es la ruta de verificación para que usted pueda ordenar el acceso directo.

Bermúdez asintió.

—Necesito esta noche para revisar esto completo —dijo—. Si lo que dice el expediente es lo que parece ser, tendrá las órdenes mañana antes de las siete de la mañana.

—¿Para todos los implicados?

—Para los que el expediente sostiene con prueba directa. Salcedo Prieto, Pizarro. Para Ruvalcaba necesito verificar el memorando de 2013 por mis propios medios antes de incluirlo. —Hizo una pausa—. Y para Sandoval Meza necesito la declaración de Villanueva autenticada con firma de identificación, que no veo en el expediente.

—La tiene mañana a las seis de la mañana —dijo Monterde.

—A las seis entonces.

Monterde salió del Palacio de Justicia a las diez y cuarto. Caminó hasta el Tsuru, que había estacionado tres cuadras más allá en una calle lateral que no tenía cámaras de seguridad visibles, y se quedó sentado un momento sin arrancar.

Había hecho lo que podía hacer. El expediente estaba en manos de un juez. Las copias estaban distribuidas. El notario tenía instrucciones. Valentina tenía la cita de las seis de la mañana. Los diputados estaban esperando.

Lo que ocurriera a partir de las siete de la mañana del día siguiente dependía de si el sistema iba a hacer lo que debía hacer o si iba a hacer lo que siempre había hecho.

Monterde arrancó el Tsuru y puso rumbo a la colonia Doctores.

Recogió a Griselda de casa de la señora Amparo, que esta vez sí lo miró con curiosidad cuando abrió la puerta, como si después de tantos días de horarios irregulares y ausencias y el peso visible que Monterde traía en la cara hubiera decidido que tenía derecho a preguntar.

—¿Está bien? —le dijo la señora Amparo.

—Sí, señora —dijo Monterde—. Ya casi.

Subió al departamento, se quitó el saco, preparó algo de comer que no probó y se sentó en el sillón con Griselda a sus pies y el silencio de las once de la noche encima.

Pensó en Arcadia. En la forma en que había caminado por el corredor 14-B a las 3:47 de la madrugada con su portafolio de piel y su taza de café, con el paso de alguien que conoce el edificio de memoria. Sin saber lo que la esperaba al final del corredor o sabiéndolo y yendo de todas formas, que eran dos cosas distintas pero que en el resultado eran la misma.

Pensó en Rebeca. En la tarde de junio de 2013, dos meses antes de que la encontraran al pie de un edificio de la colonia Nápoles. En lo que debió haber sabido o sospechado en esos dos meses. En si había tenido miedo o si había tenido la serenidad específica de quien ha aceptado el riesgo y ha decidido seguir de todas formas, como Arcadia, como la gente que sabe demasiado y no puede dejar de saber.

No era lo mismo. Rebeca no había tenido el tiempo ni los recursos que tuvo Arcadia. No había tenido a nadie que le prestara una bodega en Xochimilco ni a una periodista con quien hacer un trato sin papel ni precio en el Café La Habana. Había tenido veintidós años, un expediente en construcción y un sistema que se movió más rápido que ella.

Pero lo que había hecho Rebeca, lo que había documentado y lo que había intentado, era lo que doce años después Arcadia había terminado de construir. Cada uno de ellos había sido un eslabón en algo más largo que ninguno de los dos pudo ver completo porque el sistema se encargó de que no lo vieran.

Ahora lo veía él.

Y mañana, si el juez Bermúdez hacía lo que el expediente pedía que hiciera, alguien más iba a verlo también.

Monterde tomó el teléfono y llamó a un número que no había marcado en mucho tiempo. El de su madre, que vivía en Xalapa y que desde que Rebeca murió había aprendido a no preguntar demasiado sobre el trabajo de su hijo porque entendía, sin que él se lo hubiera dicho nunca explícitamente, que había cosas en ese trabajo que él cargaba solo y que preguntar era pedirle que las compartiera antes de que estuviera listo.

Contestó al segundo tono, con la voz de quien ha estado despierta aunque eran las once de la noche.

—Silvestre —dijo.

—Sí, mamá.

—¿Estás bien?

—Sí —dijo Monterde—. Quería decirte que encontré algo. Sobre Rebeca. —Hizo una pausa—. No todavía para contarte. Pero quería que supieras que encontré algo.

Silencio de tres segundos.

—¿Es suficiente? —dijo su madre.

Monterde pensó en la pregunta. En lo que significaba suficiente en este contexto. Si significaba suficiente para un juez, la respuesta era posiblemente

sí. Si significaba suficiente para cerrar algo, la respuesta era que las cosas de este tipo no se cierran, se transforman: dejan de ser una herida abierta y se convierten en una cicatriz que uno lleva pero que ya no sangra.

—Creo que sí —dijo.

—Bien —dijo su madre, y en esa palabra sola había doce años de no preguntar y de esperar y de confiar en que si había algo que encontrar, él lo iba a encontrar.

Colgó. Dejó el teléfono sobre la mesa. Cerró los ojos.

A las seis y cuarenta y tres de la mañana siguiente, el juez Bermúdez firmó tres órdenes de aprehensión: Bernardo Salcedo Prieto, Héctor Pizarro Andrade y Primitiva Sandoval Meza. La orden contra Ruvalcaba Laris quedó pendiente de la verificación del memorando de 2013, que Bermúdez completó antes del mediodía.

A las seis de la mañana, Monterde estaba sentado frente a Valentina Camarillo en el Café La Habana con un café y ciento ochenta y ocho fojas digitalizadas en una memoria USB que puso sobre la mesa sin decir nada.

Valentina la tomó.

—¿Cuándo puedo publicar? —preguntó.

—Ahora —dijo Monterde.

Valentina guardó la memoria USB en su bolsa, terminó su café y se levantó.

—Una pregunta —dijo antes de salir.

—Diga.

—¿Valió la pena?

Monterde pensó en Arcadia caminando por el corredor con su portafolio y su taza de café. En Rebeca con veintidós años y un expediente en construcción. En los ciento ochenta y ocho fojas que un juez había leído en una noche y que en este momento estaban siendo procesadas por tres instituciones distintas en tres partes distintas de la ciudad.

—Pregúnteme en seis meses —dijo.

Valentina asintió y salió. A través de la ventana del café, Monterde la vio caminar por la calle República de Cuba con el paso de alguien que tiene trabajo que hacer y sabe exactamente cuál es.

Afuera, la Ciudad de México empezaba su martes con la indiferencia de siempre: tráfico, vendedores ambulantes, el ruido de los motores y el silbato de los policías de tránsito y el cielo de marzo que sobre el Centro Histórico tenía esa luz fría y limpia de las mañanas en que todavía no ha ocurrido nada pero está a punto de ocurrir.

Monterde pidió otro café.

Tenía tiempo.

EPÍLOGO

Los resabios

Xalapa, Veracruz · seis meses después

El Paseo de los Lagos a las siete de la mañana tiene una luz que no existe en ninguna otra ciudad de México.

No es la luz blanca y plana de la Ciudad de México ni la luz dorada y violenta del Pacífico ni la luz húmeda y densa del Golfo. Es una luz que llega filtrada por la niebla de la sierra y por la altura de los árboles y que produce sobre el agua de los lagos y sobre las bancas de piedra y sobre los transeúntes de la mañana una especie de claridad suave que hace que todo parezca más lento de lo que es y más limpio de lo que probablemente está.

Monterde caminaba por ese paseo con Griselda desde hacía tres semanas.

Todas las mañanas a las siete, durante cuarenta minutos, el mismo recorrido: desde la entrada por la avenida Ávila Camacho hasta el puente sobre el primer lago, vuelta por el lado norte, regreso por el sendero de los ahuehuetes. Griselda conocía ya la ruta y la recorría con la mezcla de entusiasmo controlado y criterio propio que tenía para todas las cosas: se detenía donde quería detenerse, olfateaba lo que le parecía que merecía ser olfateado y avanzaba cuando consideraba que ya había procesado suficiente información del suelo.

Monterde la dejaba hacer.

Xalapa era una comisión forzada que nadie había llamado comisión forzada. El traslado había llegado diez días después de que el juez Bermúdez firmara las órdenes de aprehensión, presentado como una reestructuración del área de investigaciones especiales de la Fiscalía que requería reforzar la delegación de Veracruz. La carta era impecable en la forma. En el fondo era lo que era: la única respuesta que el sistema podía dar a alguien que había llegado demasiado lejos sin cometer el error que le permitiera sancionarlo.

Monterde había firmado la transferencia sin objetar. No porque la aceptara como justa, sino porque ya había construido todo lo que necesitaba construir en la Ciudad de México y porque Xalapa, con su luz y sus lagos y su niebla, no era un castigo para alguien que había crecido escuchando hablar de ella como si fuera el lugar donde las cosas todavía tenían escala humana.

El caso, seis meses después, era esto:

Bernardo Salcedo Prieto estaba detenido en el penal de alta seguridad del Altiplano, procesado por homicidio calificado, acceso ilícito a sistemas informáticos gubernamentales y operación con recursos de procedencia ilícita. Su defensa había intentado cuatro veces que el juez Bermúdez fuera removido del caso por supuesta parcialidad. Las cuatro veces habían sido rechazadas por el Consejo de la Judicatura Federal. El proceso avanzaba con la lentitud de los procesos que no quieren avanzar pero no pueden detenerse porque el expediente que los sostiene existe en demasiados lugares al mismo tiempo.

Héctor Pizarro Andrade había sido detenido dos semanas después de Salcedo Prieto, en Querétaro, con un pasaporte de otra identidad que el sistema de reconocimiento facial del aeropuerto de Bajío había identificado en cuarenta segundos. Estaba procesado por falsificación de documentos públicos y encubrimiento. Había decidido colaborar con la investigación en marzo, lo cual había acelerado varios procesos secundarios que de otra manera habrían tardado meses más.

Esteban Ruvalcaba Laris había sido detenido en mayo, cuando la verificación del memorando de 2013 por el Archivo General fue completada y autenticada con firma del director del organismo. Su caso incluía, además de los cargos por el mecanismo actual, la apertura de una investigación sobre la muerte de Rebeca Monterde Goldstein doce años atrás. Esa investigación estaba en manos de un fiscal especial designado por el Consejo de la Judicatura, alguien que no había tenido ninguna relación institucional con la Fiscalía General de la República en los últimos diez años.

Primitiva Sandoval Meza había sido detenida el mismo día que Salcedo Prieto, procesada por obstrucción de la justicia y filtración de información reservada. Libre bajo fianza desde julio, había concedido tres entrevistas en las que se presentaba como víctima de una persecución política orquestada por sectores de la oposición que usaban a agentes desleales de la Fiscalía para atacar al gobierno legítimo. Los medios afines al régimen reproducían las entrevistas. Los medios independientes las analizaban. El expediente del juez Bermúdez seguía siendo el expediente del juez Bermúdez.

Rodrigo Almeida Bravo había declarado formalmente en abril, desde Mazatlán, ante un fedatario público. Su declaración había entrado al expediente como prueba testimonial de primer orden. Vivía todavía en Mazatlán, en un departamento diferente al Hotel Siesta, con una medida de protección de testigo que lo obligaba a reportarse cada dos semanas a la delegación de la Fiscalía en Sinaloa. Había vuelto a trabajar en sistemas informáticos, de manera independiente, para clientes que no tenían ninguna relación con el gobierno.

Evaristo Villanueva Hurtado no había sido procesado. Su situación jurídica estaba en una zona gris que el fiscal especial había decidido no resolver todavía, lo cual en la práctica significaba que existía como testigo protegido con obligaciones de colaboración y sin cargos formales mientras el proceso principal siguiera activo. Seguía viviendo en la Ciudad de México. La bodega de Xochimilco había sido sellada como parte del expediente de cateo y devuelta a él cuando el proceso lo permitió, vacía, sin el archivero y sin la cámara propia.

Valentina Camarillo había publicado el caso en tres episodios del podcast: el primero el día que Monterde le entregó la memoria USB, el segundo cuando llegaron las órdenes de aprehensión, el tercero cuando Ruvalcaba fue detenido en mayo. Los tres episodios combinados habían sido escuchados más de cuatro millones de veces. El podcast había recibido el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de investigación. Valentina lo había recogido

con un vestido negro y un discurso de cuatro minutos en el que no había mencionado el nombre de Monterde pero había dicho que el periodismo de investigación solo funciona cuando hay alguien del otro lado que todavía cree que la verdad tiene consecuencias.

Los diputados Espinoza y Matus habían presentado el material en el periodo ordinario de sesiones de abril, dos semanas después de las detenciones, lo cual les había dado cobertura política sin haberles dado la primicia que querían. Habían abierto una comisión de investigación en la Cámara sobre los contratos de seguridad nacional adjudicados por excepción, cuyos trabajos avanzaban con la lentitud parlamentaria que Monterde había anticipado pero que existían, que era lo que importaba.

Fernanda Leal había sido ascendida en agosto a coordinadora del área de análisis forense digital de la Fiscalía. Era el puesto que sus superiores habían estado evitando darle durante dos años. Su nombramiento había llegado firmado por el nuevo fiscal general, que había tomado posesión en junio después de que el anterior renunciara en circunstancias que el comunicado oficial describía como personales. Fernanda estaba en la Ciudad de México haciendo el trabajo que siempre había hecho, solo que ahora nadie intentaba asignarle tareas administrativas para que no llegara a hacerlo.

Le enviaba a Monterde un mensaje cada semana. A veces sobre el caso. A veces sobre otros casos. A veces sobre nada en particular, solo el tipo de mensaje que se envía cuando uno quiere que alguien sepa que sigue siendo parte de algo aunque esté en otra ciudad.

Monterde siempre respondía.

Las tres empresas sinaloenses, Seguridad Integral del Noroeste, Servicios Especializados Balam y Consorcio de Protección Avanzada, habían sido intervenidas por la autoridad competente en mayo. Sus contratos con el gobierno federal habían sido cancelados. La investigación sobre los flujos financieros hacia la cuenta panameña de Claudia Salcedo Prieto estaba activa en la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora bajo una dirección diferente a la que había cerrado administrativamente el expediente tres años atrás.

La zona franca de Los Mochis seguía operando. Tenía un nuevo contrato de seguridad perimetral con una empresa que no aparecía en ningún expediente conocido.

Eso era lo que Monterde sabía esa mañana, caminando por el Paseo de los Lagos con Griselda, seis meses después. Que el proceso existía y que avanzaba y que era lento porque los procesos de esta naturaleza son siempre lentos, no por ineficiencia sino porque lo que intentan deshacer tardó años en construirse y deshacerlo lleva tiempo aunque uno tenga ciento ochenta y ocho fojas y tres instituciones y un juez que leyó el expediente en una noche.

Lo que no sabía, lo que todavía no podía saber, era si al final de ese proceso habría algo que pudiera llamarse justicia en el sentido que la palabra suele implicar, con consecuencias proporcionales a los daños y con una narrativa que cierre de manera satisfactoria. Había aprendido, en veintiún años de

trabajo, que los casos de este tipo no cierran de manera satisfactoria. Se resuelven de manera parcial, dejan cabos que nadie recoge, producen consecuencias que nadie anticipó y dejan sin consecuencias cosas que todo el mundo esperaba que las tuvieran.

Lo que sí sabía era que el expediente existía. Que estaba en manos de un juez y de un fiscal especial y de una periodista y de dos diputados y de un notario en la colonia Roma y de Fernanda en el séptimo piso de un edificio de la Ciudad de México. Que ninguno de esos lugares era el último. Que el sistema no podía apagarlo con un interruptor porque ya no había un interruptor único.

Eso era lo que había podido hacer. No era justicia. Todavía no, quizás nunca completamente. Pero era el proceso en el que la justicia podía ocurrir si suficientes personas hacían suficientemente bien su trabajo durante suficiente tiempo.

Griselda se detuvo junto a un ahuehuete enorme que crecía al borde del sendero y que debía tener varios siglos porque los ahuehuetes que alcanzan ese tamaño no se miden en décadas sino en siglos. Olfateó la base del tronco con la concentración de quien está leyendo un documento importante, llegó a alguna conclusión que solo ella conocía, y siguió caminando.

Monterde la siguió.

La luz de Xalapa a las siete y media de la mañana seguía siendo esa luz filtrada y limpia que hacía que las cosas parecieran más lentas y más limpias de lo que probablemente estaban. Los lagos reflejaban los árboles. Los transeúntes pasaban con el paso pausado de las ciudades que todavía tienen escala humana. Un hombre mayor en una banca leía el periódico con los anteojos en la punta de la nariz.

Monterde caminó hasta el puente sobre el primer lago y se detuvo un momento a mirar el agua.

Pensó en Arcadia. Ya no con la urgencia de los primeros días del caso sino con algo más parecido a la continuidad: Arcadia como alguien que había existido y que había hecho algo con esa existencia que importaba, no a pesar del riesgo sino sabiendo el riesgo y eligiendo de todas formas. Ese tipo de elección no desaparece cuando la persona que la hizo ya no está. Se convierte en parte de lo que ocurre después.

Pensó en Rebeca. En la investigación abierta sobre su muerte. En lo que podría encontrar el fiscal especial en doce años de archivos y en lo que podría no encontrar porque doce años son tiempo suficiente para que alguien con recursos borre lo que quiere que no se encuentre. Pero también en lo que Rebeca había dejado: el expediente que ella había comenzado y que Arcadia había continuado sin saberlo y que él había terminado de cerrar, o de abrir, dependiendo de cómo se mirara.

Las cosas no terminaban. Se transformaban.

Griselda llegó al borde del puente, miró el agua un momento con la expresión que tenía cuando procesaba algo que sus sentidos registraban y su

inteligencia canina intentaba categorizar, y luego se volvió hacia él como preguntando si seguían.

Monterde la miró.

—Sí —dijo en voz alta, aunque no había nadie cerca para escucharlo.

Y siguieron.